


Roberto González Arana y
Alejandro Schneider (comps.)

Sociedades en conflicto

Movimientos sociales y movimientos
armados en América Latina



LUN UNIVERSIDAD
DEL NORTE

 **CLACSO**

**IMAGO
MUNDI**

Sociedades en conflicto

Roberto González Arana y Alejandro Schneider
compiladores

Sociedades en conflicto

Movimientos sociales y movimientos armados en
América Latina



COLECCIÓN ESTUDIOS DE NUESTRA AMÉRICA

Roberto González Arana y Alejandro Schneider (comps.)
Sociedades en conflicto. Movimientos sociales y movimientos armados en
América Latina. 1a ed. Buenos Aires: 2016.

192 p.; 15x22 cm.

ISBN 978-950-793-226-7

1. Sociedades. I. Schneider, Alejandro, comp. II. González Arana, Roberto,
comp. III.

CDD 303.4

Fecha de catalogación: 28/12/2015

© Roberto González Arana y Alejandro Schneider (comps.) 2016

Foto de portada: manifestación minera en Bolivia, 2007

© 2016, Ediciones Imago Mundi

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 500 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2016 en Gráfica San Martín, Güiraldes 2723, San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

Índice general

Introducción	
	<i>Alejandro Schneider y Roberto González Arana</i> IX
1	Movimientos sociales en América Latina y teoría sociológica: una aproximación <i>Blas Zubiría Mutis</i> 1
2	El Proyecto Mesoamérica y los movimientos sociales <i>Nadia Castillo Romero</i> 15
3	Política laboral y conflictividad minera durante los gobiernos de Evo Morales en Bolivia (2006-2014) <i>Alejandro Schneider</i> 33
4	Protesta y movilización social en Colombia a comienzos del siglo XX <i>Roberto González Arana e Ivonne Molinares-Guerrero</i> 53
5	Actores transnacionales clandestinos en escenarios de conflicto: el caso de las FARC-EP en Colombia <i>Luis Trejos Rosero y Eliana Sanandrés Campis</i> 71
6	Schafik Jorge Handal: y la reconfiguración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1992-2014) <i>Carlos López Bernal</i> 95
7	El pensamiento político latinoamericano y su recepción, creación y circulación en MIR chileno <i>Ivette Lozoya López</i> 119
8	Human Rights and the Liberalization of Civil Society <i>Rachel May</i> 145
Autores 157
Bibliografía 159

Introducción

Alejandro Schneider y Roberto González Arana

.....

El presente libro es una primera aproximación de una puesta en común entre el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) «Movimientos Sociales y Movimientos Revolucionarios en Centroamérica y el Caribe» y el Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte de Colombia (UNINORTE).

Durante las últimas décadas se ha discutido y reflexionado en forma intensa sobre la problemática de los movimientos sociales y los movimientos revolucionarios en nuestro continente. En numerosas ocasiones, estas polémicas han ido acompañadas por la propia praxis de sus integrantes al calor de sus acciones cotidianas. En cierta forma, estos temas y preocupaciones estuvieron vigentes durante las tres jornadas que duró el Primer Congreso Internacional de Movimientos Sociales en América Latina organizado por UNINORTE y CLACSO en la ciudad de Barranquilla (Colombia) entre el 3 y 5 de septiembre de 2014.

En el mencionado encuentro, que reunió a más de ciento veinte investigadores y especialistas de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se debatieron algunas de las cuestiones antes nombradas. En este sentido, la región se ha convertido en un interesante laboratorio de estudio para una mejor comprensión de la naturaleza de las desigualdades sociales, las limitaciones de la democracia y la representación política.

Los artículos compilados son el fruto de la reunión mantenida en Barranquilla. El libro muestra algunos avances de los resultados de la investigación realizada en el marco de nuestro grupo de trabajo. Responden a los intereses individuales de sus autores pero están atravesados por problemáticas comunes que se expusieron en el mencionado congreso y en diversas reuniones mantenidas por los integrantes de este proyecto. La distribución de los capítulos permite ofrecer una mirada del conjunto de las diversas cuestiones debatidas durante esas jornadas, aunque desde

distintos ángulos. Para ello se combinan metodologías diversas que van del estudio de caso a las generales, del empleo de la memoria al escrutinio de las más diversas fuentes escritas, etcétera. El mosaico final expresa la pluralidad de las ideas y de los temas investigados por los integrantes del grupo en el área de las humanidades y de las ciencias sociales.

El libro abre con el artículo «Movimientos sociales en América Latina y teoría sociológica: una aproximación» de Blas Zubiría. En el mismo se realiza un balance de los aportes de la teoría sociológica al estudio de los movimientos sociales. De este modo, exhibe un panorama general sobre los diversos enfoques sociológicos en el abordaje del tema; sobre todo, reconoce las contribuciones de la tradición europea, estadounidense y latinoamericana que efectúan al estudio del fenómeno. A su vez, considera que dichos movimientos han tenido efectos significativos en cuestiones sociales, políticas y culturales en distintos escenarios del continente.

En segundo orden, el artículo «El Proyecto Mesoamérica y los movimientos sociales», de Nadia Castillo, describe la acción de distintos movimientos sociales agrupados en los foros sociales mesoamericanos que se reúnen desde 2001 en distintas ciudades de México y Centroamérica para buscar alternativas a la imposición de los mega proyectos de desarrollo como el Proyecto Mesoamérica. Asimismo, se presentan algunas reflexiones en torno a la economía solidaria como alternativa a la forma de relación social neoliberal, que tomó fuerza y organización en dicha área del continente.

Desde otra perspectiva y haciendo énfasis en el movimiento obrero, se encuentra el análisis de Alejandro Schneider en «Política laboral y conflictividad minera durante los gobiernos de Evo Morales en Bolivia (2006-2014)». En su artículo se esbozan algunas características que asumen los conflictos del proletariado minero durante las dos primeras presidencias del Movimiento al Socialismo (MAS). En particular, se examinan los distintos tipos de reclamos y formas de enfrentamiento que protagonizó el trabajador del subsuelo en el altiplano. Asimismo, el autor reflexiona sobre las diversas tácticas que empleó el Poder Ejecutivo para canalizar la protesta obrera.

El libro prosigue con dos análisis sobre la situación de los movimientos sociales en Colombia. El primero de ellos se denomina «Protesta y movilización social en Colombia a comienzos del siglo xx» de Roberto González e Ivonne Molinares. En ese ensayo, los autores centran su atención en el movimiento urbano e industrial colombiano en las primeras décadas del siglo xx. En particular, su perspectiva de estudio se detiene en los motivos económicos y políticos de las luchas sociales de ese convulsionado período histórico.

Por su parte, el artículo «Actores transnacionales clandestinos en escenarios de conflicto: el caso de las FARC-EP en Colombia» de Luis Trejos y Eliana Sanandrés ilustra sobre el accionar de estos sujetos armados en dicho país. Con ese objetivo, los autores diferencian los discursos políticos de las prácticas que emplea esta organización guerrillera. De tal modo buscan trascender el debate entre ambas dimensiones, a la vez que conceptualizan a la misma desde la categoría de «Actor transnacional clandestino».

Prosiguiendo con la perspectiva de la cuestión armada, Carlos López en «Schafik Jorge Handal: y la reconfiguración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1992-2014)» examina el impacto del fallecimiento de este líder guerrillero en la vida del FMLN y en el escenario político salvadoreño. En ese sentido, el autor estudia cómo, tras su muerte, se impone su línea de pensamiento en la antigua organización militar; sobre todo, en su readaptación política tras los acuerdos de paz que le permiten participar en la vida electoral de este país centroamericano.

Por su parte, Ivette Lozoya en «El pensamiento político latinoamericano y su recepción, creación y circulación en MIR chileno» examina, desde otra perspectiva, la lucha armada desplegada en nuestro continente. En este caso, la autora indaga en cuáles son los motivos por los que un grupo de sujetos de elite y vinculados a las letras y la reflexión teórica se relacionaron a proyectos revolucionarios en Chile. Asimismo, se pregunta sobre cuáles son los argumentos que esgrimen esos intelectuales para justificar esas acciones en un país donde los espacios democráticos estaban abiertos y, de qué manera el pensamiento latinoamericano aporta a la definición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Finalmente el libro se cierra con el ensayo de Rachel May «Human Rights and the Liberalization of Civil Society». En el mismo, la autora estadounidense estudia los cambios que experimentan algunas organizaciones radicales de la época de la Guerra Fría a la luz de la coyuntura signada por las «transiciones a la democracia». En este último escenario, se detiene en el análisis del desenvolvimiento de los movimientos sociales; en particular, en el movimiento transnacional de los derechos humanos.

Como lo hemos expresado al comienzo de la presente introducción, este es un primer esbozo de algunas investigaciones que se expusieron en el Primer Congreso Internacional de Movimientos Sociales en América Latina efectuado por nuestro GT de CLACSO en colaboración con la Universidad del Norte. Somos conscientes que aún queda mucho por estudiar, indagar y pensar; no obstante, consideramos que el libro puede contribuir a enriquecer ciertos saberes y reflexiones sobre el continente Latinoamericano.

Asimismo, como se puede apreciar, queremos subrayar que los artículos presentan problemáticas actuales desde diversas miradas y perspectivas; en ellas se observan análisis y reflexiones tanto contrastantes como semejantes. Como el avisado lector advertirá, los ensayos que integran este libro no son coincidentes en sus análisis y reflexiones. Así, se respeta la filosofía que une el proyecto del grupo de trabajo que conformamos, donde cada integrante puede opinar y formular hipótesis e investigaciones diferentes sobre los tópicos y dificultades que cruzan a América Latina. En este sentido, somos conscientes y partidarios que la diversidad de voces ayuda a conocer y pensar mejor nuestra historia y nuestro presente.

Si bien no es un análisis completo y acabado, este libro posee una extraordinaria pertinencia porque permite dar cuenta de una mayor comprensión de la dinámica global que jugaron algunos movimientos sociales y movimientos revolucionarios en toda la región.

Capítulo 1

Movimientos sociales en América Latina y teoría sociológica: una aproximación

Blas Zubiría Mutis

.....

«Mire la calle. ¿Cómo puede usted ser indiferente a ese gran río de huesos, a ese gran río de sueños, a ese gran río de sangre, a ese gran río?»

Nicolás Guillén

Introducción

¿Qué va del lenguaje directo y sencillo del indio Manuel Quintín Lame, reivindicando desde las montañas del Cauca la propiedad comunal de la tierra al discurso posmoderno del comandante Marcos desde Chiapas exigiendo una nueva relación con el poder? ¿Qué va del grito heroico de José Arcadio Segundo –«Cabrones, les regalamos el minuto que falta» (García Márquez 1980, pág. 257)– como una metáfora de las luchas del movimiento obrero en Colombia y de su represión como estrategia política por parte de gobiernos conservadores a los piquetes para interrumpir la movilización de mercancías como repertorio del Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) en la Argentina? ¿Qué va de las protestas, inspiradas en el discurso arielista, de los estudiantes de Córdoba en 1918 pidiendo mayor autonomía a la fotografía de Camila Vallejo, como la «revolucionaria más glamorosa del mundo» (Goldman 2012) que se convirtió en icono del movimiento estudiantil chileno y sus exigencias al gobierno de Sebastián Piñera desde el 2011? ¿Qué va del silencio de la mujer golpeada en sus relaciones maritales o del silencio del homosexual atormentado por sus preferencias sexuales a la denuncia pública ante un juez de familia

o al desfile colorido y provocativo de los LGTBI en distintas ciudades latinoamericanas? Estos ejemplos solo muestran la persistencia – pero también los cambios – de la expresión colectiva en América Latina por parte de diversos movimientos sociales, tanto tradicionales como nuevos, a lo largo de nuestra historia. Presencia que ha permitido además la reflexión sociológica desde diversas perspectivas paradigmáticas (Kuhn 2004) y/o teorías de alcance intermedio (Merton 1987) para tratar de comprender en su complejidad, dichas expresiones.

El presente artículo realiza un balance sobre los aportes de la teoría sociológica al estudio de los movimientos sociales, esas poderosas corrientes, como grandes ríos impetuosos, en el ancho mar de la sociedad civil. Muestra un panorama general sobre los diversos enfoques sociológicos en el abordaje del tema con el cual reconoce la tradición europea, estadounidense y latinoamericana en el estudio del fenómeno. Se considera, por una parte, que los movimientos sociales pueden concebirse como una unidad de análisis, que a pesar de las dificultades que pueda tener su abordaje para la delimitación es, sin embargo, más precisa que otras categorías como la de sociedad civil, y, por otra, que sus dinámicas históricas han estado vinculadas a procesos políticos, culturales y sociales que tanto en América Latina como en otras partes del mundo han tenido efectos significativos diversos en varios planos, tales como la reorganización de las fuerzas políticas en los sistemas de partidos (v.g. como los alcanzados por los movimientos indígenas), las nuevas concepciones sobre instituciones básicas (v.g. la concepción de familia a partir de las demandas de los LGTBI) y las amplias transformaciones de elementos culturales de la sociedad (v.g. las modificaciones en la cultura patriarcal a partir del movimiento de mujeres). Por último, reconocemos que este acercamiento teórico parte del supuesto básico de que los movimientos sociales poseen un potencial que permitirá ampliar el proceso de democratización y formulación de alternativas al desarrollo económico, político, social y cultural del conjunto de actores de la vida social.

Paradigmas europeos y estadounidenses en el estudio de los movimientos sociales

Si bien se puede reconocer que la tradición sociológica en sus diversos paradigmas clásicos trabajó de manera indirecta el tema de los movimientos sociales, bien fuera como fenómeno relacionado con el comportamiento colectivo y con el estudio de las multitudes – Le Bon y Tarde, en el campo europeo; Smelser en el terreno funcionalista estadounidense (Melucci 2010, pág. 33) o bien fuera desde la perspectiva histórico estructural marxista (Eckstein 2001, pág. 19) – en los balances de teoría sociológica reciente se considera que existen dos grandes paradigmas – uno europeo

y otro estadounidense – para analizar los movimientos sociales y la acción colectiva: el paradigma de la «identidad» y el paradigma de la «movilización de recursos» (Cohen 1988; Cohen y Arato 2001, págs. 556-635), aunque también pueden ser identificados como teorías de alcance medio con variados rótulos específicos de acuerdo al énfasis dado por los diversos autores – por ejemplo, nuevos movimientos sociales, para el caso europeo ola de proceso político para el caso estadounidense – o con el rótulo más general de escuela estadounidense y escuela europea (Esteve 2010; Archila 2003; Yagenova 2009).

Pero la reflexión no se detiene. Recientemente se ha propuesto la necesidad de abandonar los presupuestos de ambas tradiciones sociológicas y utilizar como marco interpretativo paradigmático de los movimientos sociales la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann (Estrada Saavedra 2012, págs. 23-43). También se argumenta como una renovación teórica necesaria, poner entre paréntesis las grandes estructuras para favorecer el análisis microsociedad y repensar el rol de la cultura y de las emociones en la movilización social a partir de los aportes de Jasper (1997, 2012) y algunos de sus continuadores (Massal 2014, págs. 269-339).

Es lógico pensar que el análisis de un tema tan complejo y tan actual como los movimientos sociales debe estar abierto a la revisión teórica y metodológica permanente con el fin de enriquecer dichos análisis. Sin embargo, como lo han señalado algunos, creemos en lo fundamental que no es necesario oponer estas dos propuestas teóricas – la europea y la estadounidense – ya que no solo ponen cada una un énfasis en dimensiones relativamente distintas de la realidad social, sino que en última instancia es posible conciliarlas (Wieviorka 2009). Incluso el propio Alberto Melucci, uno de los representantes más importantes del paradigma europeo, reconoce que ha intentado un acercamiento crítico para hacer comparables ambos esfuerzos (Melucci 2010, pág. 61).

El paradigma europeo de la identidad

El primero de estos paradigmas, el de los nuevos movimientos sociales o de la identidad, se asocia a la tradición europea que se consolidó gracias a las aportaciones hechas por sociólogos como Touraine (1987, 1999, 2001), Melucci (1995, 2010) y Castells (1997), entre otros. Esta perspectiva se basa en la búsqueda de identidad, autonomía y reconocimiento por parte de los agentes y por tanto no acepta para explicar la acción colectiva aspectos teóricos como la primacía de las contradicciones estructurales entre las clases sociales o los modelos del actor racional. El énfasis de la acción colectiva estriba en ser contenciosa y a su vez ser generadora o promotora de valores por lo que Touraine restringe la definición de movimiento social a «un tipo muy específico de acción colectiva, aquel por el cual

una categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma de dominación social, a la vez particular y general, e invoca contra ella valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su adversario para privarlo de tal modo de legitimidad» (Touraine 2001, págs. 99-100). Para que se originen los movimientos sociales «no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario que reivindiquen también determinados atributos positivos» (Touraine 1999, pág. 56), de allí que Touraine considera como una característica de los movimientos sociales de nuevo cuño que tengan como objetivo primordial defender los derechos culturales y sociales de los individuos y de las minorías y no el hablar – como lo hicieron los movimientos sociales tradicionales, v.g. el obrero – en representación de la sociedad perfecta (ibídem).

Por su parte, Melucci considera que nos estamos enfrentando a la necesidad de entender un nuevo modelo social postindustrial, en el cual los conflictos caen en las esferas culturales y se salen del tradicional sistema económico-industrial, por lo que afectan no tanto a las relaciones de clase, sino a la identidad personal, y no tanto a la lucha política en el terreno de las relaciones de poder institucionalizadas en el Estado, sino en el terreno y el tiempo de la vida cotidiana. De allí que plantea la dimensión simbólica de la acción humana como un referente central para el análisis, tomando en cuenta la importancia de la información como eje fundamental de los sistemas complejos – «altamente diferenciados [que] producen cada vez más recursos y los distribuyen para la individualización, para la autorrealización, para una construcción autónoma de las identidades personales y colectivas» (Melucci 2010, pág. 69) – en que se han convertido nuestras sociedades.

Para Melucci ni las tesis propias de los modelos macro estructurales ni la de los modelos individuales pueden explicar adecuadamente el accionar de los movimientos sociales. Para él, se puede lograr una aproximación crítica a un nivel intermedio entre estos dos modelos que acerquen los enfoques europeos y estadounidenses. Este nivel intermedio parte de reconocer como eje fundamental a la identidad colectiva, la cual se concibe como un «proceso de construcción, adaptación y mantenimiento [que] refleja siempre dos aspectos: la complejidad interna del actor (la pluralidad de orientaciones que lo caracterizan) y las relaciones del actor con el ambiente (otros actores, las oportunidades y las restricciones)» (ibídem, pág. 66).

Podemos sostener que Melucci acerca ambos paradigmas pues para él «la propensión de un individuo a implicarse en la acción colectiva está así ligada a la capacidad diferencial para definir una identidad, esto es, al acceso diferencial a los recursos que le permiten participar en el proceso

de construcción de una identidad» (ibídem, pág. 67). Solo que Melucci no concibe esta identidad como una especie de esencia del movimiento (como la concibe Touraine) sino como una construcción que se logra por medio de la interacción, la negociación y las relaciones con el ambiente.

Un último autor representativo del enfoque europeo de la identidad que queremos tratar es Manuel Castells, quien reconoce a «la sociedad red» como una nueva forma de sociedad en que la oposición entre globalización e identidad está presente, y la cual es desafiada por los movimientos sociales, esa «marejada de vígorosas expresiones de identidad colectivas» que define como «las acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforman los valores y las instituciones de la sociedad» (Castells 1997, págs. 24-25). Para él, la construcción de identidad –la cual distingue de los roles ya que estos se definen a partir de las normas estructuradas por las instituciones y las organizaciones de la sociedad– es importante como dinámica social porque es la fuente de sentido y experiencia para los propios actores, quienes se encargan de construirla mediante un proceso de individualización. Un punto crucial planteado por Castell es que si bien al momento de construir las identidades se utilizan distintos materiales –de la historia, la geografía, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas– lo importante es que esta «construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder» (ibídem, pág. 29).

Ello exige, por tanto, en el desvelamiento de las dinámicas sociales que buscan la inclusión de grupos minoritarios que construyen su identidad a partir de uno o varios de los materiales de que habla Castells, el reconocimiento de dichas relaciones de poder, la situación social de subordinación o de marginalidad que se expresa por la desigual capacidad para generar cambios significativos y provechosos en función de los intereses de dichas minorías. No es difícil colegir de aquí la importancia que pueden tener los movimientos sociales para los procesos democratizadores, que es uno de los puntos de coincidencia por parte de los distintos autores que tratan el tema, independientemente de su posición teórica o paradigmática, y que ha sido uno de los elementos centrales de la reflexión por parte de los sociólogos latinoamericanos.

El paradigma estadounidense sobre los movimientos sociales

El otro enfoque paradigmático proviene de la tradición sociológica estadounidense. Para autores como Charles Tilly el movimiento social ha sido el resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres

elementos: campañas, repertorios y demostraciones de valor, unidad, número y compromiso (WUNC). Para Tilly la campaña es

«un esfuerzo público organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas; [los repertorios son] el uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política: creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda; [y las demostraciones WUNC son las] manifestaciones públicas y concertadas de los participantes, tanto de los actores como de su circunscripción» (Tilly 2010, págs. 21-22).

A partir de los anteriores elementos, el historiador y sociólogo estadounidense ha formulado una serie de tesis importantes que también enriquecen el paradigma y lo vinculan a ciertos aspectos más complejos. Para él, desde su aparición en el siglo XVIII, los movimientos sociales no solo han progresado gracias a sus actuaciones individuales, sino gracias también a campañas interactivas. Sostiene que los movimientos sociales combinan tres tipos de reivindicaciones: programáticas, identitarias y de posición, y que además de afirmar la soberanía popular fomentan la democratización, a la vez que son fomentados por ella (ibídem).

Con relación a esta última tesis, vale la pena señalar algunas de sus conclusiones planteadas con relación al tema de los movimientos sociales y la democratización, ya que reconocen la importancia de los mismos en los procesos democratizadores y coinciden con el balance positivo hecho por los sociólogos latinoamericanos acerca del impacto de nuestros movimientos sociales en la región. Concluye Tilly que la democratización permite la formación de unas relaciones más regulares y categóricas entre los gobiernos y sus ciudadanos, y, por consiguiente, permite la ampliación y/o equiparación de derechos y de obligaciones en la política pública, así como la ampliación de la protección a las personas contra las actuaciones arbitrarias de los agentes gubernamentales, sobre todo la protección a los miembros de las minorías vulnerables. A su vez, dichas dinámicas democratizadoras contribuyen a la creación de instituciones complementarias tales como sindicatos, partidos, ONG y asociaciones de toda índole (ibídem).

Por su parte, Sidney Tarrow, otro representante de la tradición estadounidense, defiende la tesis que «la acción política colectiva surge cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ella» (Tarrow 2004, pág. 22). A partir de allí define a los movimientos sociales como «secuencias de acción política

basadas en redes sociales internas y marcos de acción colectiva, que desarrollan la capacidad para mantener desafíos frente a oponentes poderosos» (ibídem, pág. 23) o también, reconociendo el carácter contencioso de los mismos, que será evidente en la medida en que no existan canales institucionalizados para encauzar la acción colectiva, como «desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las autoridades» (ibídem, pág. 26).

La reflexión adelantada por los sociólogos y politólogos estadounidenses ha explorado nuevas rutas y nuevos enfoques, tratando de generar una síntesis esencial de perspectivas comparadas a través de tres componentes (McAdams; McCarthy y Zald 1999). Dicha síntesis plantea tres aspectos claves para el análisis de los movimientos sociales: el primero, las oportunidades o restricciones políticas, que reconoce la importancia que reviste el sistema político – considerado de forma general – y con el cual se precisan cuatro dimensiones de análisis: el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado; la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre elites, las cuales ejercen una gran influencia en el ámbito de lo político; la presencia o ausencia de aliados entre las élites; y, por último, la capacidad del Estado y su propensión a la represión.

El segundo elemento, las estructuras de movilización, hace referencia a las formas de organización (tanto formales como informales) a disposición de los contestatarios, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva; se habla de grupos de nivel medio, organizaciones y redes informales que constituyen la base colectiva de los movimientos sociales. El estudio de este factor se ha inspirado en dos perspectivas teóricas distintas: por una parte, la teoría de la movilización de recursos que ha intentado romper con concepciones de corte pesimista sobre los movimientos sociales para centrarse en procesos de movilización y en las manifestaciones organizativas de estos procesos. Aunque los movimientos sociales no deben cristalizar necesariamente en una organización formal, extraen su fuerza, como motor del cambio social, precisamente de las organizaciones que generan; por otro lado, la segunda de las corrientes teóricas ha sido el modelo que parte de procesos políticos; esta corriente rechaza la equiparación entre movimientos sociales y organizaciones formales pues se centra más en procesos informales – la vecindad, el lugar de trabajo, iglesias, la escuela –. En síntesis, las estructuras de movilización – tanto en sus repertorios tácticos como modulares – son formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas.

El tercer elemento clave son los procesos enmarcadores, los cuales se definen como procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción, es decir, los

significados compartidos y conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación. Para el análisis de los procesos enmarcadores, la teoría sociológica estadounidense ha propuesto tener en cuenta cinco tópicos que parten de las herramientas culturales a disposición de los activistas a la hora de entrar en procesos de creación de marcos interpretativos, los intentos de crear marcos interpretativos estratégicos que llevan a cabo movimientos o grupos, las controversias en torno a la creación de marcos interpretativos que surgen entre el movimiento y otros actores colectivos, el papel desempeñado por los medios de comunicación de masas en estos debates en torno a la interpretación y definición de los problemas y en quinto lugar, el impacto cultural que tiene el movimiento al modificar las herramientas culturales disponibles.

Para concluir, es importante señalar que además de la tradición que representan los anteriores paradigmas macrosociales también se han dado enfoques paradigmáticos que explican la acción colectiva en el nivel del individuo, sobre todo por estudiosos no marxistas. Tarrow (2004), Jasper (1997, 2012) y Eckstein (2001) realizan sendos balances de algunos de estos aportes teóricos, que bien pueden considerarse como inscritos dentro de las orientaciones teóricas microsociales, entre los cuales figuran como relevantes diversas teorías que subrayan, en la explicación de la movilización colectiva, los rasgos de carácter y/o los estados de tensión generados por normas y valores (Smelser 1995), así como la teoría de la elección racional y su explicación básica de que las acciones colectivas son guiadas, en pos del bien común, por individuos motivados por intereses egoístas personales (Olson 2011).

La teoría sociológica sobre los movimientos sociales en América Latina

La tradición y lo novedoso de los movimientos sociales en América Latina

La presencia de los movimientos sociales en América Latina tiene una larga historia de lucha y resistencia por parte de movimientos clásicos – obrero y campesino – que aunados a los procesos de desarrollo capitalista y a las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo xx vieron el surgimiento permanente de diversos movimientos, como el de los pobladores, ambientalistas, indígenas y mujeres. Se puede decir, entonces, que ha existido dentro del debate de las ciencias sociales en América Latina un interés por construir a los movimientos sociales como sujeto de estudio (Parra 2005). De allí que como lo señala Martín Retamozo es importante reconocer una tradición en el pensamiento sociológico latinoamericano ya que

«siempre que existieron fenómenos de protesta social, de alguna u otra manera (...) se ofrecieron interpretaciones a tales movilizaciones (...). En este sentido, la reflexión sobre las movilizaciones colectivas populares ocupó una gran parte de los esfuerzos de la teoría social latinoamericana. En la perspectiva clásica, los enfoques dominantes (...) estuvieron vinculados al funcionalismo y al marxismo (...). No obstante, hacia la década de los ochenta, se introdujeron las categorías elaboradas por los paradigmas centrados en los movimientos sociales» (Retamozo 2010, pág. 248).

Esta transición desde la mirada clásica hacia los paradigmas más contemporáneos también es reconocida por otros autores (Calderón 1986; Ernesto Laclau 1987; De Sousa Santos 1998). Para Elizabeth Jelin la teoría sociológica latinoamericana, experimentó un enriquecimiento sustancial con nuevas explicaciones desarrolladas por los análisis políticos y culturales, así como por la perspectiva regional y el intento por precisar nuevas definiciones sobre el movimiento social e identificar las dimensiones que configuran su heterogeneidad, desarrollando para ello un tipo de estudio basado en los análisis de casos – sobre identidades homosexuales, protestas campesinas, movimientos ciudadanos, democráticos, eclesíásticos de base, étnicos e indígenas, ecológicos, guerrilleros, de género, o populares urbanos – con mucha riqueza empírica y analítica (Jelin 1985). Por su parte Yagenova y Slater han llamado la atención en cuanto a las diferencias entre el contexto latinoamericano y el europeo con relación al desarrollo de los movimientos clásicos – obreros y campesinos – y de los movimientos sociales más recientes (Yagenova 2009; Slater 1989).

Ahora bien, la dinámica social, económica y política de América Latina ha planteado nuevos retos e interrogantes a los estudiosos de los movimientos sociales, de allí que existe coincidencia, en la mirada de los sociólogos latinoamericanos y de otras latitudes, en que los movimientos sociales en las dos últimas décadas del siglo xx y primera del siglo xxi se enfrentaron primordialmente a los procesos de ajuste estructural y sus efectos perversos promovidos por el auge hegemónico del neoliberalismo (Eckstein 2001; Seoane 2004; Ocampo Banda 2008; Svampa 2008; Mestries; Pleyers y Zermeño 2009). En el marco de estos ajustes estructurales propuestos por el Consenso de Washington y de sus efectos nefastos, en América Latina se presentó un viraje de varios gobiernos latinoamericanos hacia la izquierda, por lo que en los últimos años se ha abierto un nuevo campo de indagación acerca del papel de los movimientos sociales en contextos diferentes, es decir, contextos considerados desde el punto de vista político dominados por gobiernos progresistas (Svampa 2008; Martí

i Puig 2012; Ortiz Crespo y Mayorga 2012; Castro y col. 2014; Gaudichaud 2014; Modonesi 2014).

Es, por tanto, apenas obvio que América Latina haya desarrollado un campo teórico sobre los movimientos sociales en el último tercio del siglo xx (Murga Frassinetti 2006; Retamozo 2010) y que paulatinamente se fuese consolidando una tradición en la literatura sociológica que reconoce una diversidad amplísima de nombres,¹ así como una variada gama de movimientos sociales estudiados, a partir de variadas formas de protesta, articuladas a las realidades propias de los países de la región que entrañan diversas bases sociales para la movilización contenciosa de los movimientos sociales.

Ello nos obliga a preguntarnos qué propone la teoría sociológica para abordar un sujeto de estudio tan diverso y complejo. Al respecto se han dado diversas respuestas. Eckstein ha señalado, en una taxonomía que nos parece adecuada, la siguiente clasificación: conflictos originados en las relaciones de producción; tensiones basadas en el mercado; conflicto étnico y racial; resistencia basada en el género; desafíos de base política y desafíos religiosos (Eckstein 2001, págs. 27-48). Por su parte, Ocampo argumenta que

«por el peso que los nuevos movimientos sociales y la acción directa representan en la resignificación del espacio público [vale la pena detallar] algunas expresiones observadas y construidas en la investigación de campo: a) espacios públicos autónomos, nuevos territorios y ámbitos de lucha; b) espacios asamblearios; c) apropiación de fábricas como símbolo de reapropiación social; d) la creación intelectual de los sujetos sublevados; e) producción de pensamientos emancipatorios; f) producción de memorias colectivas» (Ocampo Banda 2008, págs. 39-42).

Wieviorka reconoce que el paradigma fundador en el análisis de los movimientos sociales proviene del estudio del movimiento obrero cuando este estaba en su apogeo y que dicho «paradigma se sostuvo en cinco puntos principales» (Wieviorka 2009, pág. 24): el primero, el marco del Estado-nación; el segundo, una dominación de clase; el tercero, una acción

1. Un listado, a todas luces incompleto, no solo por faltar varios latinoamericanos, sino por la ausencia de estudiosos de otras latitudes que han contribuido en el análisis de los movimientos sociales en la región, señala nombres como Sonia Álvarez, Mauricio Archila, Eduardo Ballón, Silvia Bolos, Atilio Borón, Fernando Calderón, Daniel Camacho, Evelina Dagnino, Arturo Escobar, Orlando Fals Borda, Manuel Antonio Garretón, Elizabeth Jelin, Rafael Menjivar, Aníbal Quijano, Isabel Rauber, José Seoane, Rodolfo Stavenhagen, Hugo Zemelman, Sergio Zermeno.

propriadamente social como lo demostraron los estudios Edward P. Thompson sobre la cultura obrera; el cuarto, un ejercicio de transición por parte del movimiento social, como un actor no político, a la acción política; y, el quinto, un sujeto social. Estos cinco puntos principales, considera Wieviorka, tienen validez, aunque con algunas diferencias, para analizar tanto a los nuevos movimientos sociales, como a los movimientos globales y a los que él llama «antimovimientos sociales»: el terrorismo global y el antisemitismo global (ibídem, págs. 34-41). Para el estudio de los nuevos movimientos sociales y de los movimientos globales, Wieviorka propone que pueden seguir analizándose estos cinco puntos, pero teniendo en cuenta las variaciones significativas que él encuentra, tales como el debilitamiento del Estado-nación, la acción centrada más en la demanda de reconocimiento cultural que en la dominación de clase y la construcción de un sujeto más plural que ni es político, ni social, ni cultural, en la medida en que su desarrollo «dependerá de su capacidad de conjugar demandas de reconocimiento cultural, reivindicaciones de justicia social y acciones que contribuyan a abrir nuevos espacios políticos» (ibídem, pág. 34).

Ahora bien, existe una fuerte coincidencia en los análisis sobre los movimientos sociales al momento de intentar construir una mirada general para América Latina: la de considerar su diversidad, tanto en los agentes que se movilizan como en las acciones u objetivos que persiguen. Cada autor intenta, por su parte, encontrar elementos que permitan clasificar la diversidad constatable en la realidad y brindar una posibilidad de mayor orden analítico, con cierta coherencia en la clasificación. Así, por ejemplo, Zermeño (2009) ha llamado la atención sobre la diversidad, amplísima y diferente, de los movimientos sociales como fenómeno empírico constatable y ha establecido dos grandes grupos de acuerdo con las dinámicas de movilización, en los cuales se expresan, no solo a nivel latinoamericano sino mundial, fenómenos de confrontación y fenómenos de sedimentación – aunque no exista una frontera clara entre ambos – que permita, por ejemplo, constatar movimientos de resistencia a la globalización y al neoliberalismo como el altermundismo representado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o en los intentos de Coordinación del Foro Social Mundial o movimientos paulatinos de empoderamiento de la sociedad en diversos escenarios como los logrados por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) o la exigencia de presupuestos participativos en varias ciudades brasileras. Svampa (2008), a partir del cuestionamiento que los movimientos sociales le hacen al régimen imperante, los agrupa en dos tipos: «movilizaciones del sector público que ponen de relieve las fronteras de la precariedad [y que] plantean una revalorización y reconstrucción de lo público» y «movilizaciones que ponen de relieve las fronteras de la exclusión [y que cuestionan un] *modelo de desarrollo monocultural y destructivo*,

al destacar la necesidad de la desmercantilización de los bienes comunes» (Svampa, 2008: 35-36, énfasis en el original). Fernando Calderón, por su parte, vincula su análisis de los movimientos sociales en América Latina tanto a los procesos de modernización trunca que ha vivido el continente a través de su historia como a la gestación de «una nueva subjetividad vinculada a nuevos comportamientos socioculturales emergentes» (Calderón 1997, pág. 192).

Este surgimiento de lo nuevo, todavía embrionario, latente en muchos casos y no consolidado, exige a su vez nuevos referentes teóricos que intenten explicar la peculiaridad de los movimientos sociales latinoamericanos con referentes epistemológicos, teóricos e históricos adecuados a nuestro devenir. Las teorías decoloniales de autores como Quijano (2011), Lander (2011), Dussel (2009, 2011), Mignolo (2003, 2004, 2007, 2011) y Escobar (2011), para citar solo algunos, o las teorías de Boaventura de Sousa Santos (2009, 2010) sobre la epistemología del sur y la sociología de las emergencias son algunos de estos referentes que de seguro seguirán enriqueciendo la reflexión y planteando nuevos debates.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos señalar que algunos autores proponen el acercamiento de los dos paradigmas dominantes en los últimos años dentro de la tradición sociológica (el estadounidense y el europeo), incluyendo una mirada que identifique la voz propia de los actores del movimiento social, en una relación necesaria para el caso de América Latina por la dominación e invisibilidad de los mismos, de tal manera que epistemológicamente se reconozca una relación sujeto-sujeto, como la que propone la sociología crítica latinoamericana.

También es necesario aceptar la simultaneidad de lo tradicional con lo novedoso, porque esa es la realidad compleja de América Latina. Procesos y problemas estructurales de larga duración no resueltos aún y frente a los cuales los movimientos sociales se siguen enfrentando (acceso a la tierra, condiciones dignas de trabajo, inclusión social efectiva, entre otros) con nuevas realidades y nuevos retos que movilizan a otros actores desde otras lógicas (reconocimientos de minorías en su identidad y en sus derechos como los reclamados por los movimientos LGTBI; o enfrentamientos desde lo local a las dinámicas homogeneizadoras de lo global, como las reivindicaciones expresadas en el Foro Social Mundial). Ello daría pie para que el acercamiento a los movimientos sociales pueda hacerse desde diversas perspectivas. Una perspectiva puede ser lo que Eckstein llama «las bases sociales del desafío»: conflictos originados en las relaciones de producción; tensiones basadas en el mercado; conflicto étnico y racial; resistencia basada en el género; el desafío de base política; y la religión

(Eckstein 2001, págs. 26-48); otra puede ser lo que Svampa llama «las principales dimensiones» de los movimientos sociales en América Latina: dimensión territorial; acción directa no convencional y disruptiva como herramienta de lucha generalizada; formas de democracia directa; y como cuarta dimensión demanda de autonomía (Svampa 2008, págs. 77-79).

Hay que reconocer que la realidad abigarrada de América Latina, constatable por diversos estudios, se articula en el terreno teórico a la diversidad en el tratamiento de los movimientos sociales: diversidad en los enfoques no solo con el empleo de una gran variedad de criterios e indicadores para explicitar la composición social de dichos movimientos, sino también con una multidimensionalidad que muestra la gran complejidad que asumen los movimientos sociales en las orientaciones sociales, en el enriquecimiento de las demandas, en la complejidad de las formas organizativas y en el repertorio plural de las acciones.

Ello plantea, a su vez, reconocer que existen desequilibrios y lagunas en algunos temas investigados ya que la mayoría de los estudios se han concentrado en ciertos países como México y Brasil, en ciertos movimientos como los movimientos urbanos y de mujeres y en ciertos temas como los de la emergencia y desarrollo de los movimientos sociales o los de su identidad (Murga Frassinetti 2006, pág. 117). También se anota la necesidad de una mayor comparación (ibídem; Massal 2014, pág. 421), así como la complementariedad entre los paradigmas existentes (Melucci 2010) o el promover la aplicación de nuevos enfoques paradigmáticos y teóricos (Estrada Saavedra y Guerra Blanco 2012, págs. 251-270; Massal 2014, pág. 423).

En conclusión, podemos anotar que son, por tanto, los movimientos sociales, como expresión vigorosa del devenir de las sociedades latinoamericanas, un objeto de estudio riquísimo que seguirá exigiendo una tarea continua de reflexión sociológica.

El Proyecto Mesoamérica y los movimientos sociales

Nadia Castillo Romero

.....

Los movimientos sociales en América Latina han ocupado el centro del escenario político desde la década de los noventa del siglo xx y la primera década del siglo xxi, a partir de su resistencia activa al desmantelamiento de los Estados benefactores para aplicar las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal signadas por el Consenso de Washington.

El neoliberalismo profundizó desigualdades ya existentes, agudizó conflictos latentes y emergieron nuevos, derivados de las formas de acumulación de capital flexibles en la región.

Por tal motivo, a partir del neoliberalismo en América Latina los movimientos sociales transitan por múltiples campos de conflicto. Estas tensiones muestran la vitalidad de distintos sujetos sociales – que viven en condiciones de pobreza y/o exclusión social– a través de variadas organizaciones, redes y movimientos. No obstante, el conflicto de clase que tiene que ver con la distribución del ingreso y la lucha por los derechos sociales y económicos que derivan del mismo, sigue siendo una de las lógicas permanentes en las demandas de estas movilizaciones, como es el caso del movimiento social que desde 2001 se ha venido reuniendo en foros mesoamericanos oponiéndose a la implementación de megaproyectos como Proyecto Mesoamérica y a las iniciativas de libre comercio en Centroamérica y desde 2008 reflexionando y buscando alternativas y oportunidades para la disputa por la hegemonía y la transformación social.

En este sentido, los ejes de conflictividad social generados por las dinámicas de reestructuración capitalista a escala mundial, tienden a organizar acciones colectivas transnacionales como forma de respuesta social a los mecanismos de la globalización neoliberal.

Por tanto, en este artículo presentaremos algunas revisiones y reflexiones en torno a los conflictos de clase, agudizados con las formas neoliberales de acumulación de capital, y la respuesta organizada desde los movimientos sociales, que buscan generar una alternativa que mitigue las consecuencias de la desigualdad de clase. Asimismo, presentaremos algunas reflexiones en torno a la economía solidaria como alternativa a la forma de relación social neoliberal, que tomó fuerza y organización en el área denominada Mesoamérica desde 2001 en los foros mesoamericanos. Esta red de movimientos sociales reunida en estos foros integra organizaciones ambientales, campesinas, de mujeres, jóvenes, sindicales e indígenas principalmente, que buscaron frenar la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la región y, también, cancelar el Proyecto Mesoamérica antes llamado Plan Puebla Panamá (PPP). Después de 2008 con la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Centroamérica (TLC EU CA) el movimiento mesoamericano reflexiona en torno a generar alternativas que disputen la hegemonía del capital en la región.

En primer lugar, cabe aclarar que, históricamente Mesoamérica fue construida con base en rasgos culturales comunes, como la agricultura y cerámica, los cultivos de maíz, frijol, calabaza, batata y algodón, las construcciones de piedra o barro, de terrazas para cultivo de calabazas empedradas, la organización por clanes de tipo calpulli, la confección de telas de algodón, sandalias, mercados, prácticas de sacrificios humanos y los juegos de pelota de hule. No obstante, Mesoamérica debe ser vista como historia y no como estructura. El espacio ha sido expresión de relaciones sociales determinadas. Por tanto, la geografía (en el sentido de los límites territoriales de civilizaciones y estados nacionales) es una realidad social y como toda realidad social tiene historicidad.

Por tal motivo, la apropiación del término más que fijar una identidad, apunta hacia las potencialidades de los actores locales, definir objetivos estratégicos y proyectos políticos orientados a atravesar las fronteras nacionales, se transforma de un concepto analítico a un programa social y político que pretende integrar a actores colectivos muy distintos entre sí, para esto se destacan historia, cultura, conflictos, agravios y amenazas actuales, determinados por los proyectos de reestructuración y regionalización capitalista que las sociedades centroamericana y mexicana tiene en común (Castillo Romero 2008).

Por otra parte, entendemos los movimientos sociales como procesos históricos que construyen significados y enmarcan la acción colectiva que generan, para alcanzar las demandas consensuadas. Es decir, son agrupaciones que cuentan con objetivos definidos, crean identidades y buscan soluciones a un problema planteado.

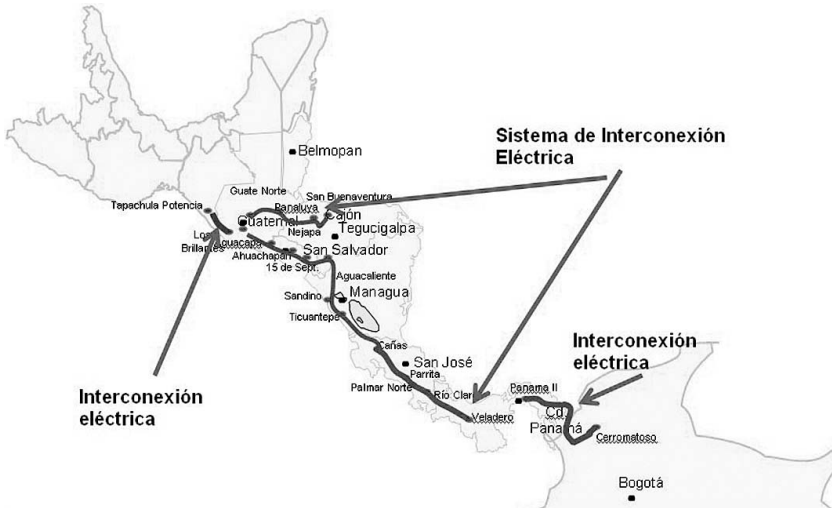


Figura 2.1 – Área geográfica del Proyecto Mesoamérica. Fuente: CIEPAC, 2014.

Sin embargo, estos objetivos, identidades y formas de llevar a cabo la acción colectiva, no son procesos lineales, se van construyendo a lo largo de la formación y/o articulación de un movimiento. Es decir, los movimientos sociales parten de supuestos iniciales que articulan y dan sentido a la organización y a las primeras fases de la acción colectiva, pero las demandas secundarias o complementarias, así como la agenda para canalizar las protestas, se va construyendo y negociando entre los integrantes de un movimiento, pero también depende de la estructura de oportunidades políticas (EOP) que se presente, es decir, de las coyunturas en el escenario social que faciliten o no, la irrupción pública (ibídem).

A partir de la expansión neoliberal, los movimientos sociales en América Latina, transitan por múltiples campos de conflicto. Estas movilizaciones muestran la vitalidad de distintos sujetos sociales – que viven en condiciones de pobreza y/o exclusión social – a través de variadas organizaciones, redes y movimientos que se han convertido en los últimos años en instancias de participación ciudadana que los partidos políticos no canalizan y de atención a demandas sociales que el Estado no responde. No obstante, el conflicto de clase que tiene que ver con la distribución de la renta y la lucha por los derechos sociales y económicos que derivan de la misma, sigue siendo una de las lógicas permanentes en las demandas, como es el caso del movimiento social que se opone a la implementación del Proyecto Mesoamérica y a las iniciativas de libre comercio.

Cabe señalar que la imposición del neoliberalismo como panacea del desarrollo no logrado en las etapas capitalistas anteriores, profundizó desigualdades existentes y agudizó conflictos latentes en la región. Es decir, previo al neoliberalismo instaurado completamente en la década de los noventa del siglo xx, existía ya un poder hegemónico que ejercía presencia, y en los casos extremos había casi una situación de poder dual, como aquellos donde hubo intervención directa de los Estados Unidos: Nicaragua, Honduras, Panamá. Se podría concluir que los Estados centroamericanos ejercían solamente una soberanía mediatizada y se apoyaban en una autoridad y legitimidad dependientes. Esto último es lo que ha venido a consolidar la globalización neoliberal: la dependencia socioeconómica y política a los Estados Unidos (Castillo Romero 2008).

En este esquema, apareció el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el PPP – hoy Proyecto Mesoamérica – y el TLC EU CA, como algunos instrumentos de esta dominación neoliberal. Por ejemplo, el PPP planteó problemas comunes a toda la región: los corredores viales y las obras de infraestructura conllevan un inminente peligro: que amplias zonas de la economía campesina en la región sean arrasadas. En caso de ser extendido y profundizado el sistema de maquilas, implicará una extensión y profundización similares de las formas de explotación laboral. Asimismo, la biodiversidad en donde descansan las poblaciones mayoritariamente indígenas y campesinas, aparece como una de las metas más significativas de apropiación, por ello, cualquier evento de autonomía en estas comunidades será obstáculo para lograr la apropiación de este territorio.

Pero también, observamos otro instrumento de dominación en Centroamérica que va de la mano con el Proyecto Mesoamérica. El TLC EU CA es el fruto de un modelo económico, político y social que subordina los intereses nacionales a los de las transnacionales estadounidenses y la oligarquía regional, este tratado llegó después de más de veinte años de promesas incumplidas por el neoliberalismo y por la historia del capitalismo dependiente y subdesarrollado de la región.

Al Proyecto Mesoamérica solo son incorporados los sectores de alta rentabilidad y de mayor potencial en los procesos de inversión productiva. Por lo mismo, priva la tendencia hacia la polarización hacia la misma región en la medida en que se constituyen mercados concentrados en ciudades o estructurados en ciertos corredores.

Para incorporar nuevas regiones en dicho esquema resulta fundamental modificar la geografía de la producción, de las inversiones y de los mercados de trabajo, en aras de reevaluar espacios atractivos para el capital. En consecuencia el Estado asume nuevas funciones en la política económica regional que lo llevan a concentrar sus esfuerzos y recursos en

determinados territorios, privilegiando los factores exógenos de segmentación económica regional que permitan aprovechar las posibles ventajas de los procesos globales en el entorno local (I. Enríquez 2006, pág. 321).

La idea del Proyecto Mesoamérica es abrir el espacio hacia el sur del Estado mexicano de Puebla, donde la mano de obra es más pobre y que podría pensarse competitiva con la mano de obra China y de otros países asiáticos. Hay que pensar que Puebla es un referente de inversión de capitales, pero los beneficiados van más allá de esa entidad (Cortez Yacila 2006, pág. 148).

Por tanto, observamos que las nuevas modalidades de hegemonía capitalista requieren nuevas formas de acciones colectivas que resistan a este modelo, tanto para capitalizar recursos de los movimientos como para realizar autocrítica al interior de los movimientos sociales.

Entonces, nos encontramos en un panorama en donde dos proyectos sociales se enfrentan. Por un lado el proyecto del capital que a lo largo de la historia ha buscado distintos mecanismos de acumulación que le permitan generar más y mejores riquezas. Por otro lado, los movimientos sociales que sacan la política del dominio del Estado, para ensayar formas de democracia amplias, participativas y que buscan una economía solidaria, que valore el trabajo, los recursos naturales, la diversidad cultural y étnica y los derechos humanos de mujeres y hombres, principalmente.

Por tanto, los ejes de conflictividad social generados por las dinámicas de reestructuración capitalista a escala mundial, tienden a ser transnacionales y han estado impulsando a los movimientos sociales de la región a elaborar prácticas de acción y de protesta que involucran a más de un sector social y que van más allá de las fronteras nacionales. Esto no quiere decir que hayan desaparecido las formas tradicionales bajo las cuales se ha expresado la conflictividad social, tampoco que el proceso de mundialización capitalista se traduce automáticamente en una internacionalización o regionalización de la acción colectiva, pero vuelve más agudo para los actores sociales el dilema de que ellos, conservando como referente para su acción el territorio nacional y como interlocutor principal su respectivo gobierno, se enfrentan a adversarios que actúan y piensan en dimensiones globales (Castillo Romero 2008).

La necesidad de construir alianzas que atraviesan fronteras se expresa tanto en el discurso de los actores colectivos como en sus esfuerzos organizativos por construir coordinadoras y redes regionales de organizaciones. Además de que existe una tendencia hacia la regionalización de la acción colectiva, y al mismo tiempo que se mantienen las protestas de clase, de carácter gremial, agrario, sindical, principalmente.

De acuerdo al panorama señalado, notamos que el repertorio de los movimientos sociales se amplió. Algunos de los movimientos de clase

permanecieron, aunque a menudo en una forma articulada con demandas derivadas por la emergencia de nuevos y/o renovados conflictos nacidos en la etapa de acumulación neoliberal.

Para el caso centroamericano la construcción de un modelo alternativo de relaciones sociales se presenta como un reto más del desafío económico. Con excepción de Costa Rica, en Centroamérica no hay una cultura política de manejo democrático de conflictos sociales. La región se ha caracterizado por presentar pocos espacios para el ejercicio pleno de la ciudadanía social. Además de la exclusión económica y social que separa las sociedades de disfrutar de forma equitativa bienes y servicios, también se ha presentado un enorme déficit en materia de derechos individuales y colectivos que permitan a los individuos ejercer su derecho de organizarse, expresarse libremente, canalizar demandas al gobierno y hacer un contrapeso a las desigualdades generadas por el mercado.

De acuerdo a lo anterior, la crisis Mesoamericana no es solo del sector agrícola de la economía, hay una transformación societal por la aparición de nuevos y/o renovados conflictos: migración, proliferación del narcotráfico y las estrategias de sobrevivencia delincuenciales; surgimiento de identidades supranacionales como las *maras*; falta de gobernabilidad; en general, hay una agudización de conflictos que refleja una crisis del modelo de desarrollo capitalista dependiente, donde los costos sociales de este modelo se presentan para el conjunto de la población, no obstante, resultan particularmente graves en el campo.

Pero también, es preciso reconocer que los resultados efectivos de los movimientos sociales son escasos. En todos los lugares de Mesoamérica, las protestas, multitudinarias, se agotaron en sí mismas y no lograron el objetivo que las había convocado – como la cancelación del PPP en su momento o del TLC EU CA – de tal suerte que en buena medida el éxito se mide conforme al eco mediático. No obstante, paulatinamente se ha elevado el nivel de conciencia que ha logrado vincular diversos aspectos de manera integral como son el agua-tierra-biodiversidad – Proyecto Mesoamérica-ALCA-TLC EU CA-TLCAN-OMC – energía eléctrica-corporaciones transnacionales. Es decir, no podríamos medir el éxito o no de un movimiento social, sino más bien, construir tejidos sociales que permitan la conexión de los marcos de acción colectiva con una red social que piense de manera integral, local y global las soluciones a las demandas planteadas (Castillo Romero 2008).

Esta visión global ha llevado a que las luchas de resistencia popular sean cada vez más integrales y que luchando en lo local se piense en lo global. Pero todavía existe un aspecto pendiente en el actuar del movimiento popular: las alternativas que apuntalen hacia un nuevo sistema distinto al capitalismo actual.

Como han señalado Seoane; Taddei y Algranati (2007), más allá de las particularidades que presentan los movimientos sociales en América Latina, la generalización del libre comercio y las implicaciones sociales y económicas que tienen, aparecen en todos los países como un eje privilegiado de las elites políticas y económicas para refundar el orden neoliberal y su legitimidad. De tal manera, los movimientos sociales demandan poner la economía al servicio de la sociedad, derribar las diferencias de derechos económicos y sociales entre el norte y el sur; rechazar el poder del dinero, por encima del poder ciudadano; reconstruir y democratizar al Estado; de ser verdaderos ciudadanos en medio de una democracia participativa; de fortalecer los valores colectivos; de globalizar las luchas sociales; de despertar la esperanza de los pueblos.

Como lo hemos señalado, la base social de los movimientos no determina por sí misma las preocupaciones y la dinámica del mismo, sino que las oportunidades políticas de cada escenario, es decir, el conjunto de recursos públicos para la acción colectiva, son los que determinan la irrupción de movimientos sociales.

Por tanto, creemos que se trata de construir una nueva visión y un espacio para la política. No la política de visión tradicional que la restringe a los campos institucionales y a los calendarios electorales en que toda la energía de la lucha de las personas y de las organizaciones se canaliza hacia la conquista de gobiernos; tampoco la que busca acumular fuerzas para asaltar al aparato de Estado, sino una visión que piense la lucha social, política e ideológica en la perspectiva de un proyecto alternativo, de construcción de una nueva sociedad, sea en sus bases económicas, sociales, políticas o culturales.

El movimiento social mesoamericano

En este marco surgió el movimiento social en Mesoamérica que se agrupa en torno a la resistencia primero del ALCA, del PPP – hoy del Proyecto Mesoamérica – y del TLC EU CA, tuvo su génesis en 2001 a partir del lanzamiento público del PPP del entonces presidente de México Vicente Fox.

Desde entonces la red de movimientos sociales que lo integran se ha reunido periódicamente en foros mesoamericanos en distintas ciudades de Centroamérica y México, con el fin de reconocer esfuerzos, buscar y organizar acciones colectivas, y generar alternativas posibles a los mecanismos neoliberales de dominación. De acuerdo con esto, integran este movimiento diversos actores del sur-sureste mexicano y Centroamérica, que se ven afectados por los proyectos de acumulación neoliberal del capital y resisten ante estos.

Las principales demandas de esta red de movimientos son: soberanía alimentaria, desarrollo sustentable, respeto a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas, así como a los recursos naturales y territorios de los grupos étnicos que habitan la región; respeto a los derechos sociales y económicos. Asimismo, a partir de estas demandas en los foros se debate la construcción de marcos de acción colectiva que den sentido a su protesta y que no solo integren las demandas señaladas, sino que trabajen en la construcción de agendas comunes y propongan alternativas de relaciones sociales (Castillo Romero 2008).

De tal manera, las posibilidades reales de avanzar hacia propuestas alternativas al sistema capitalista, patriarcal y excluyente pasa por mantener y defender espacios con esta radicalidad política y con persuasión pública vía medios de difusión, así como de alianzas con diversos actores sociales que puedan fortalecer la resistencia y también la construcción de alternativas posibles al neoliberalismo.

Por ello, una aspiración permanente que observamos en los miembros de esta red de movimientos es la preocupación y necesidad de que los foros dejen de ser un evento periódico para convertirse en un proceso real de articulación del movimiento social en resistencia al capitalismo neoliberal y patriarcal.

Esta aspiración lamentablemente no ha pasado de ser eso, aunque hay que reconocer que se han hecho intentos por darle este carácter. Lograr la consolidación como proceso, requiere al menos garantizar un mecanismo de seguimiento efectivo, un espacio de coordinación y conducción política estable y representativo, así como la capacidad real de las diversas organizaciones para articularse en una agenda política regional y multisectorial. Ante este reto, cualquier mecanismo de seguimiento acordado, y la formalización y consolidación de espacios de conducción, estarán vacíos de contenidos si no existe una verdadera agenda social articulada, es decir, si no se avanza en la construcción del *sujeto mesoamericano*.

Con nuestra participación en los foros mesoamericanos desde 2001, notamos que las principales diferencias y rupturas para algunos actores han girado principalmente en torno a tres ejes:

1. En el objetivo y fin de la resistencia política, Proyecto Mesoamérica y/o TLC EU CA: en este sentido, las divisiones se hicieron sobre todo entre organizaciones mexicanas y centroamericanas. Mientras las primeras insistían en un discurso integral que resistiera a ambos proyectos neoliberales, las segundas enfocaron su protesta únicamente contra el TLC EU CA, ignorando con ello el aparente silencio del entonces Proyecto Mesoamérica.
2. En la participación y acompañamiento en los foros y en los ciclos de protesta de partidos políticos de izquierda: nuevamente, la división

se hizo entre las organizaciones mexicanas que han rechazado cualquier forma de alianza con los partidos políticos y los movimientos centroamericanos que sobre todo se nutren de militantes de partidos políticos de izquierda, sobretodo en el caso de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Finalmente, el acuerdo ha sido para los militantes de partidos participar en los foros a nivel individual, pero no en nombre de un partido político.

3. En la radicalidad del discurso político y en la construcción de marcos de acción colectiva: a este aspecto hicieron más referencia los informantes clave. Señalaron que las rupturas se dieron con aquellas organizaciones de la sociedad civil que mantenían lazos estrechos con diversas agencias de cooperación internacional y su discurso en los foros era más bien conciliador al proyecto neoliberal, lo cual generó amplios debates dentro de los foros sobre la apuesta política del movimiento social mesoamericano (MSM). Finalmente, estas organizaciones fueron agotando su participación en los foros.

De tal manera, el precepto más importante en nuestro análisis es que el Foro Mesoamericano es expresión de la complejidad de la red de movimientos y organizaciones sociales en la región, que apuesta a la resistencia contra el neoliberalismo en sus formas concretas primero del ALCA, PPP, TLC EU CA y Proyecto Mesoamérica. Este colectivo heterogéneo, expresa una amplia gama de diversidades sociales, que sus integrantes – con los que entramos en contacto – quieren potenciar y no homogeneizar en un proceso de articulación. Así, la pretensión de que el Foro Mesoamericano sea un instrumento que permita y potencie las resistencias de este movimiento social, pasa por revisar cuáles son algunas de las identidades que se van configurando y cuáles son las tensiones desde las cuáles no es posible aún construir articuladamente.

Sin embargo, es incipiente aún del movimiento lograr la construcción de estrategias y marcos de acción colectiva que articulen las diversas agendas de lucha contra estos instrumentos y acumule, visibilice y fortalezca las resistencias en una dimensión política más integral frente a la globalización neoliberal. Ante esto, la economía solidaria se presenta como el único marco de acción colectiva articulado, es decir, que contiene demandas pero también visualiza hacia dónde quiere transitar en la integración de diversas agendas, esto no quiere decir que el conjunto de actores sociales que forman el MSM hayan adoptado la economía solidaria como su principal marco de acción.

Algunos dirigentes de los movimientos nacionales y también integrantes del Comité Internacional Mesoamericano con los que entramos en contacto desde 2001, así como organizaciones de base campesinas, indígenas y ambientalistas, han asumido la economía solidaria como el punto de

partida en la construcción de alternativas a la sociedad capitalista, el reto de estas organizaciones es socializar el contenido de esta y mostrar como en la misma confluyen agendas de soberanía alimentaria, medio ambiente, equidad de género, derechos laborales y comercio justo, principalmente.

Sobre los actores del movimiento

A continuación, presentamos algunos actores que han tenido presencia en la constitución del movimiento. Para seleccionar a estos actores, observamos las demandas centrales del MSM, posteriormente las organizaciones y movimientos que tuvieran mayor comunicación y/o injerencia con otras organizaciones en busca de un fin común y a partir de ahí seleccionamos a estas organizaciones que albergan en principio las demandas de resistencia a los megaproyectos neoliberales del Proyecto Mesoamérica y que trabajan por una economía solidaria como alternativa a la economía de mercado actual, no solo como proyectos socialmente responsables, sino también sustentables. En este sentido tenemos la Red Mexicana contra el Libre Comercio (RMALC), Cooperativa Tosepan Titataniske, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Por otra parte, observamos organizaciones con amplias trayectorias en educación comunitaria en base a los derechos sociales y económicos como el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIE-PAC), Red de Consumidores de Nicaragua y el Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH) en Honduras, Grito de los Excluidos sección Mesoamericana y Encuentro Popular en Costa Rica.

La economía solidaria como marco de acción colectiva

La economía solidaria es una forma de concebir las relaciones sociales a partir de valores solidaridad, justicia, equidad y la sustentabilidad principalmente, con el fin de que repercuta en formas de vida digna, apuntalando el desarrollo local por medio de prácticas comerciales equitativas y amigables con los ecosistemas.

La economía solidaria es una respuesta a las desigualdades e inequidades consecuentes de la acumulación del capital en su fase neoliberal que privilegia en esta fase, la generación de capital a través de la circulación libre del capital financiero en detrimento del trabajo, es decir, de las personas, generando con ello desempleo, más pobreza y por consecuente, ensanchando la brecha de la desigualdad. Por tal motivo, la economía solidaria coloca al trabajo como el elemento principal de generar capital en beneficio de las personas que participan en estas cadenas productivas, privilegiando el valor de uso sobre el valor de cambio, repartiendo los

<p><i>Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC)</i>. Esta organización chiapaneca tiene una tradición en educación popular para socializar derechos sociales y económicos de las poblaciones indígenas del estado Chiapas y socializa su incidencia hacia Mesoamérica. Es una de las organizaciones impulsoras del MSM.</p>	México
<p><i>Cooperativa Tosepan Titataniske</i>. Esta cooperativa agrupa a 5.800 productores de café orgánico y de comercio justo en la Sierra Norte de Puebla. Siendo una de las experiencias mexicanas en economía solidaria.</p>	México
<p><i>Red Mexicana contra el Libre Comercio (RMALC)</i>. Esta organización es pionera en el campo de la resistencia, investigación y propuesta a los tratados de libre comercio generados a partir de la implantación de la globalización neoliberal. Es una organización pionera en el MSM y en las alternativas que de él se han generado. Asimismo, socializa su incidencia hacia organizaciones hermanas en Mesoamérica.</p>	México
<p><i>Movimiento Social Nicaragüense Otro mundo es Posible</i>. Esta red de organizaciones surgió la segunda mitad de la década del noventa del siglo xx e integra diversas organizaciones independientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Es el movimiento que coordina las acciones colectivas nacionales en contra del neoliberalismo, la integran múltiples sujetos sociales.</p>	Nicaragua
<p><i>Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares (COPINH)</i>. Esta red de organizaciones integra a diversas organizaciones indígenas, formando así la organización indígena con más presencia en Honduras y una de las más representativas en Mesoamérica. Se distingue por los éxitos de las acciones colectivas para frenar los megaproyectos del PPP en su área de influencia.</p>	Honduras
<p><i>Grito de los Excluidos, sección Mesoamericana</i>. Red de organizaciones no partidarias que lucha por la transformación de la sociedad, dando el protagonismo a los y las excluidas como sujetos históricos de dicha transformación. Su lema es «trabajo, justicia y vida».</p>	Coordinación actual en Costa Rica
<p><i>Encuentro Popular</i>. Red de organizaciones sociales multiseccional que trabaja en torno a la relación entre comercio y desarrollo, su posicionamiento ha sido contra el ALCA, PPP, TLC EU CA</p>	Costa Rica

Cuadro 2.1 – Actores sociales permanentes desde 2001. Fuente: elaboración propia en base a la observación participante en los foros y a entrevistas profundas.

beneficios de manera equitativa entre sus miembros y en beneficio de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, desde la década de 1990 la apropiación organizada de la economía solidaria en América Latina ha sido desde los movimientos sociales.

Mauricio Castro (2008), representante del movimiento sindical en Costa Rica, señaló que para hacer frente a los megaproyectos del neoliberalismo, los movimientos sociales tienen que avanzar hacia propuestas integrales que unan diversas demandas sectoriales. De tal manera, puso énfasis en rescatar agendas y experiencias desde la economía social, debido a que este enfoque incluye demandas de soberanía alimentaria, sustentabilidad, respeto a los derechos sociales, económicos y laborales, equidad de género, con el fin de revitalizar las economías locales frente al capital transnacional.¹

La economía solidaria, como proyecto educativo, busca generar la «revolución de la conciencia» en la construcción de un comercio justo y un consumo responsable, a partir de relaciones comerciales basadas en la cooperación; que el precio que se pague a los productores les permita tener condiciones de vida dignas; establecer relaciones laborales libres de explotación, producir socialmente y ambientalmente responsable, principalmente (Castillo Romero 2008).

Cabe señalar que la economía solidaria es fundamentalmente, la economía social surgida en Francia en la década de los setentas del siglo xx. Sin embargo, con el término solidaria, se acentúa la noción del proyecto de desarrollo social-local de pluralidad de las formas de actividad económica. La economía solidaria enfatiza una estrategia económica que prioriza las necesidades y los mercados nacionales, privilegiando en estos últimos el acceso de los pequeños y medianos productores, mejorando los rendimientos de sus productos alimenticios, fomentando la pequeña industria y orientando la infraestructura y la interconexión de las pequeñas comunidades.

La economía solidaria designa todas las actividades económicas que contribuyen a la democratización de la economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. No es un sector de la economía, sino un enfoque transversal que incluye iniciativas en todos los sectores de la actividad económica. Es, por tanto, una forma alternativa de concebir la economía: una nueva forma de organización de la sociedad en torno a los recursos productivos

1. El 20 de mayo de 2008 se reunieron en San José, Costa Rica, distintos representantes del llamado Frente Amplio, para dialogar sobre el estado de la movilización popular post referéndum en Costa Rica. El Frente Amplio fue la unión de diversas organizaciones y movimientos sociales costarricenses que tenían una agenda social previa al TLC, como el Grito de los Excluidos.

y a su concepto de progreso y bienestar. A través de nuevas formas de funcionar en torno a aspectos como producción, distribución, consumo, mercado, finanzas, comercio, y otros, se plantea una alternativa al modo de producción capitalista.

El fundamento de la economía solidaria es la introducción de niveles crecientes de trabajo, cooperación y solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, de manera de generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que trasciendan la esfera del beneficio económico y favorezcan a la sociedad en su conjunto, es decir, que se recupere el valor de uso de un determinado bien.

Esta economía «alternativa» busca el desarrollo, pero se refiere a este término como el «buen vivir de todos y todas». El *buen vivir* es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia (incluida la naturaleza), y no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por la escasez de sus recursos; así el *buen vivir* sería desarrollarnos, ampliando nuestras capacidades como sociedades para construir e institucionalizar una economía donde quepan todos, una economía solidaria que dé respuesta material a los deseos legitimados de todos sus ciudadanos miembros (Morán Esparza 2008).

Conceptualmente, esta economía alternativa se diferencia de la economía capitalista por varios motivos: la economía de capital define la riqueza como valor de cambio, es decir, no contabiliza en el crecimiento la destrucción de valores de uso ni recursos no renovables, y está centrada en la lógica de la acumulación privada ilimitada. Como lo apuntamos anteriormente, la economía solidaria está centrada en el valor de uso (en la provisión de bienes y servicios útiles para satisfacer las necesidades y deseos legítimos de todos) y en el trabajo humano en sus múltiples formas, combinado con el trabajo de la naturaleza, que busca calidad de vida antes que calidad de posesiones.

Como podemos observar, la economía solidaria es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de la economía solidaria es la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. La economía de solidaridad postula un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, integral, a escala humana, sustentable, con énfasis en lo local (Castillo Romero 2008).

Por lo anterior, el movimiento de economía solidaria lo integran organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, mutuales, asociaciones y

fundaciones, entre otras formas asociativas; constituyéndose en los principales instrumentos que la caracterizan. Sus actividades no pertenecen al sector público ni a la actividad privada tradicional que tiene como único fin o motor de impulsión el lucro, la maximización del beneficio en términos financieros.

Este tipo de experiencias priorizan el fomento de la autonomía y la igualdad, la participación y la actividad cooperativa, el establecimiento de escalas salariales justas y proporcionales, la transparencia y auditoría social, la sostenibilidad ambiental y social, etcétera. Actividades empresariales sin ánimo de lucro, donde no existe reparto de beneficios entre accionistas, sino que de haberlos se reinvierten en la creación de nuevos empleos, la mejora de su estructura técnica y el apoyo a nuevos emprendimientos de desarrollo local (Askunze Elizaga 2007).

Lo anterior en el marco más amplio del uso y manejo alternativo de los cultivos, de la base de recursos naturales y su comercialización y de la defensa y valoración del capital natural, cultural y patrimonial. Se trata, pues de generar y reproducir el capital social fomentando la participación comunitaria y la autogestión económica de las comunidades, teniendo al campesinado como el principal actor y beneficiario en aras de trascender el actual modelo económico agroexportador, para apostar a una estrategia de desarrollo local sustentada en la construcción del poder desde las bases locales.

Retos y desafíos del movimiento

El principal obstáculo del movimiento social mesoamericano para la construcción tanto de marcos de acción colectiva como de estrategias y objetivos de la protesta social contra los planes de acumulación neoliberal, es la carencia de una visión amplia multisectorial y regional que ubique los conflictos locales y sectoriales en un paraguas histórico llamado globalización neoliberal.

Ante esto, coincidimos con varios de sus participantes del movimiento social mesoamericano en la necesidad de dialogar entre los diferentes sujetos sociales que participan en esta red de movimientos mesoamericanos, con el fin de articular y visualizar horizontes sobre el tipo de relaciones sociales que se quiere construir y no solo quedarse en un papel contestario hacia las políticas estatales neoliberales. También, transitar las luchas nacionales a las regionales, comprender desde los movimientos sociales que las luchas que se dan en Panamá, o en Costa Rica, son las luchas que se dan en México, es decir, guardando las particularidades de los contextos locales, entender las protestas insertas en las resistencias regionales a la globalización neoliberal.

Para lograrlo, se requiere un diálogo interclasista, intersectorial, intergeneracional e interregional, más información y divulgación, más espacios de análisis político, donde los foros como evento sean solo un momento y no el único espacio de encuentro e intercambio de información; y la definición de estrategias claras con acciones integradoras no solo de los procesos políticos en cada país, sino y sobre todo que tenga en cuenta los avances diferentes que del libre comercio hay en la región, para que en vez de desarticularse se logre aprovechar las experiencias en sentido acumulativo.

Así, este devenir de foros visibiliza una identidad temática de los movimientos sociales en Mesoamérica, pero también está aún en un proceso de construcción política. Sin embargo, el Foro Mesoamericano ha fomentado y promovido el fortalecimiento sectorial a nivel regional. Como lo hemos señalado, lo que no ha logrado el foro, más allá de sus reuniones anuales, en distintos lugares de México y Centroamérica, es un fortalecimiento de las agendas multisectoriales.

Cabe resaltar que en los foros de Costa Rica en 2005 y Nicaragua 2008, se hicieron esfuerzos por inducir metodológicamente esta articulación, pero no se han dado avances significativos. La tendencia regional de una gran mayoría de las organizaciones es a mantenerse en sus espacios específicos sectoriales. Esta tendencia puede explicarse por la necesidad de las organizaciones de fortalecerse aún internamente, en sus agendas, estrategias, propuestas, antes de ir a plantearlas y ponerlas a debate con otros sectores. Es decir, la opción es consolidar procesos internos en cada una de sus demandas que dan origen a sus organizaciones, antes de lanzarse a espacios más amplios, donde sin claridad política podría desdibujarse y perderse muchas de las propuestas construidas desde la organización interna con sus demandas específicas.

Otro desafío que observamos de este proceso de foros, es la necesidad al interior de este es plantearse cómo se reinventa a sí mismo, que será lo que deba hacer distinto teórica, metodológica y políticamente que le permita dar un nuevo valor al proceso y no sea simplemente la repetición de los espacios anteriores. En este sentido, apuntalar las estructuras de oportunidad política que permitan repuntar el ciclo de acción colectiva deprimido como consecuencia de la aprobación del TLC EU CA en toda Centroamérica.

No obstante, pese al lógico reflujo de los ciclos de protesta, es necesaria la reconstrucción del tejido social con el objetivo de avanzar en marcos de acción colectiva que permitan hacer frente al relanzamiento del PPP con el Proyecto Mesoamérica y que poco a poco los gobiernos mesoamericanos van impulsando la ejecución de los megaproyectos derivados del mismo, por ejemplo: la construcción de represas en Panamá y el Sur de Costa

Rica; la ampliación de las carreteras en el Estado mexicano de Chiapas, con el consecuente desplazamiento indígena y el daño ecológico, o bien la consolidación del tendido eléctrico en toda Centroamérica, por mencionar algunos.

También, observamos que la constitución de un *sujeto mesoamericano* que como característica principal tenga la diversidad apenas está iniciando. La construcción de una imagen, de un enemigo y de raíces comunes, que permita consolidar sentimientos de pertenencia y de solidaridad es un referente aún débil para superar la heterogeneidad interna respecto a las demandas específicas de las organizaciones y el grado de afectación de los megaproyectos a las organizaciones integrantes, por lo cual habría que hablar más que de un actor colectivo de un movimiento en constante construcción que tendría que superar las coyunturas políticas y enfocarse en la creación de agendas integrales, que avancen en la consolidación de modelos alternos a la globalización neoliberal.

Después de haber analizado esta red de movimientos, – con sus diversos integrantes, la dificultad para nombrarlos y/o clasificarlos, la diversidad de demandas y la poca consistencia en la generación de marcos de acción colectiva, las diferencias entre los actores que incluso los ha llevado a rupturas – consideramos que el triunfo sobre el neoliberalismo tiene que ser principalmente en el plano ideológico, que cuestione los valores que orientan cotidianamente a las sociedades, que recupere el sentido de lo colectivo y entonces se pueda velar por el éxito de las luchas reivindicatorias y de sus movimientos. Debido a que a la mercantilización sin límites de la vida social corresponde a una ideología que busca destacar los elementos de libertad individual y de indiferencia a lo comunitario, a lo público.

Por tanto, las alternativas sociales a potenciar en los movimientos sociales tendrían que ser de carácter universal, que atraviesen el capitalismo en su conjunto, restableciendo alianzas entre las acciones colectivas del centro y de la periferia a partir del sistema como un todo. Si bien las periferias capitalistas son las mayormente afectadas por las políticas neoliberales especialmente su población pobre, la fuerza acumulada en la periferia no es suficiente para revertir la correlación de fuerzas en su conjunto.

Finalmente, podemos argumentar que en la actualidad los cambios sociales podrán tener eco en todo el sistema capitalista mundial mientras los movimientos conozcan el entorno global y participen activamente en redes para articularse regionalmente. Solo en este caso habrá una transición de movimientos nacionales a movimientos regionales y globales que busquen en forma simultánea conseguir apoyos para sus acciones políticas nacionales e incidir en organismos de gobernabilidad global

pertinentes para sus marcos de acción colectiva con sus respectivos ciclos de protesta.

Entrevista profunda citada

Mauricio Castro. Abogado. Dirigente del Movimiento Sindical en Costa Rica. San José, Costa Rica. Entrevista uno de cuatro realizada el 20 de mayo de 2008.

Política laboral y conflictividad minera durante los gobiernos de Evo Morales en Bolivia (2006-2014)

Alejandro Schneider

.....

Introducción

En el convulsionado año de 1985, emergió una nueva Bolivia. El país que nació con la Revolución de 1952 comenzó un proceso de modificaciones estructurales. El ascenso al poder del líder histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Víctor Paz Estensoro marcó el cierre de una etapa, en la que él fue un protagonista destacado. A partir de entonces, con el decreto supremo (DS) 21.060 se abrió un ciclo político, económico y social signado por una fuerte ofensiva neoliberal sobre la sociedad.

Tras proclamar que «Bolivia se nos muere», Paz inauguró un drástico programa de medidas económicas, que acarreó un nuevo acuerdo de dominación sobre la sociedad civil. Se buscó recrear y restablecer la autoridad estatal perdida en los últimos años, en particular, sobre la clase obrera y el campesinado. En ese escenario, el mundo de la minería expresó los cambios más radicales. La crisis del mercado internacional del estaño y el constante quebranto de la productividad en las minas fueron los argumentos que se emplearon para iniciar el desmantelamiento progresivo de las empresas productoras.

El núcleo central de las reformas estructurales impulsadas por el Palacio Quemado fue el desmantelamiento de la poderosa Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En el plazo de un año, se cerraron más de cincuenta minas estatales. La citada empresa despidió a más de las dos terceras partes de sus obreros, incrementando las tasas de desocupación y subempleo, convirtiendo en pueblos fantasmas a numerosos distritos erigidos alrededor del trabajo del subsuelo. A la par de este fenómeno,

como parte del mismo modelo económico implementado, fue creciendo el sector informal a través del comercio al menudeo y de los servicios. En otras palabras, desde entonces se fue configurando un mundo laboral distinto al producido por la Revolución de 1952.

A partir de 1985 se inició la debacle de la hasta entonces principal organización obrera del país: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB). Este fenómeno fue acompañado no solo por el aumento del desempleo, sino también por una dispersión (eufemísticamente llamada relocalización) del proletariado del subsuelo a través de todo el territorio. Sin embargo, si bien su presencia militante disminuyó, el ciclo de rebeliones abierto a partir de las guerras del agua (2000) y del gas (2003) junto con la llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) lo volvió a instalar en la escena política.

El ascenso a la presidencia de Evo Morales Ayma, en enero de 2006, representó un momento de esperanza para extensos sectores de la población. Aunque el gobierno logró una cierta redistribución de la riqueza, tras varios años de intensas disputas regionales y política, la situación económica y social de la mayoría de la ciudadanía no se modificó en sus aspectos sustanciales. A pesar de ello, en los comicios de 2009, con una fuerte campaña electoral centrada en la búsqueda de transformar a Bolivia en un país desarrollado, una gran parte de la población renovó la confianza en el MAS.

En ese escenario de permanente transformación, el presente artículo busca analizar y reflexionar sobre un conjunto de tensiones sociales y políticas en torno a la relación que la administración de Morales mantuvo con los trabajadores mineros. En particular, se detiene a examinar tanto una serie de conflictos y enfrentamientos que se dieron alrededor de algunos yacimientos (Huanuni, Sinchi Wayra, Mallku Khota) así como también sobre un cúmulo de temas y problemas alrededor de las leyes que regulan la propiedad y el usufructo de las riquezas mineras.

Algunas características generales de las presidencias del MAS

En términos globales, las administraciones del líder cocalero se caracterizan por continuar con el sistema primario exportador que identifica al territorio desde la llegada de los españoles. Aunque el vicepresidente García Linaera (2006) ha manifestado que se busca crear un Estado fuerte y desarrollado denominado «capitalismo andino amazónico», esto aún no se ha logrado; la base económica permanece atada a una lógica extractivista nutrida por los altos precios mundiales de algunas materias primas. La producción primaria de bienes no renovables sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país. Esta situación acarrea una serie de consecuencias estrechamente ligadas: primero, reafirma una

dependencia respecto a los recursos minerales no reemplazables; segundo, genera una alta vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones del mercado internacional y tercero, reproduce un mercado de trabajo con escaso empleo. De esta manera, el modelo vigente se alimenta sobre la captación de la renta proveniente de las exportaciones y su posterior transformación en ayudas sociales como el bono escolar «Juancito Pinto» y la «Renta Dignidad» para los ancianos. Pese a los discursos a favor de la industrialización, en ambas gestiones se avanzó muy poco en una agenda posextractivista de mediano plazo; aún se mantiene el ciclo rentista donde cerca del 90 % del valor exportado se genera por la venta de gas natural, soja, petróleo, plata, oro, estaño, entre otros bienes (Instituto Nacional de Estadísticas 2011).

Este panorama económico tiene su correlato en el ámbito de la ocupación. Al igual que en otros países de la región, los datos sobre el nivel de desempleo difieren, según si las cifras son emitidas por oficinas estatales o por sectores privados. De este modo, de acuerdo con datos del órgano oficial, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo en 2011 fue de 5,5 %; mientras que para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) fue de 7,9 % (ibídem; CEDLA 2012a). En cuanto al índice de subempleo, de acuerdo con el CEDLA, presenta un incremento del 17 % en 2011 con relación al año 2010 (CEDLA 2011; CEDLA 2012b).

A esta situación hay que sumar que, por un lado, el CEDLA afirma que más del 60 % de la población que figura en las estadísticas como empleada, debe considerarse como autoempleada, debido a que se desempeña en actividades económicas informales. La mayor parte de las fuentes de trabajo posee un escaso nivel de productividad, tanto en el área de comercio, los servicios, como en las faenas agropecuarias de subsistencia donde se abonan los salarios más bajos. Por otro lado, a partir de 2011, el trabajo por cuenta propia (en particular, en la construcción, los servicios personales y el transporte público) permitió el aumento de la ocupación. Sin embargo, no se informa que es muy seria la precariedad laboral en esas ramas. En ese sentido, el porcentaje de trabajadores que tienen una ocupación estable, bien remunerada y protegida por la seguridad social se redujo en la última década a solo 20,9 %; el resto tiene un empleo precario (79,1 %). Cabe indicar que los empleos precarios carecen de convenio laboral a la vez que no poseen ni jubilación ni indemnización por despido. Asimismo en ese marco, las mujeres son las más perjudicadas, no solo por la segregación que soportan cuando efectúan tareas análogas a las de los hombres, sino por su exclusión a los empleos menos calificados (CEDLA 2013). En resumen, la generación de nuevas ocupaciones tuvo lugar a expensas de su calidad.

La flexibilidad laboral, por un lado, sobre todo en lo que refiere a la precarización en los contratos de empleo, se transforma en una herra-

mienta de primer orden para incidir en el deterioro constante de los haberes percibidos. De este modo, los bajos salarios siguen siendo una de las principales variables que caracteriza a este modelo que favorece al gran capital, representado en multinacionales, terratenientes y cooperativistas, convirtiéndose en un especial atractivo para la inversión extranjera en la producción primaria. Por su parte, la industria manufacturera no le va a la zaga: esta se identifica por ser liviana, pequeña y de escasa innovación tecnológica. En general, su competitividad radica en el aumento de la intensidad del trabajo y la suba del volumen de producción sobre la base de la reducción del empleo de mano de obra; en ese sentido, no pocos empresarios tienden a la subcontratación y externalización de diversos procesos o servicios auxiliares, disminuyendo el personal en los establecimientos.

Por otro lado, existe una amplia brecha social, ya que la riqueza se concentra en pocas manos: el 20 % de la población más rica acapara más del 60 % de los ingresos, en tanto que el 20 % más pobre solo recibe el 2 %. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se observa que siete de cada diez bolivianos son indígenas y están insertos en el sector familiar del mercado laboral, con escasas remuneraciones. Por el contrario, en el estrato de mayores ingresos, seis de cada diez no son indígenas y se insertan en el sector empresarial con sueldos relativamente altos y con mejores condiciones ocupacionales (PNUD 2010). Al igual de lo que sucede en materia de empleo, las mujeres perciben menos salarios e ingresos que los hombres, por idénticas tareas.

El patrón de desarrollo vigente siguió privilegiando al capital por encima de la fuerza de trabajo. A pesar de las nacionalizaciones de los hidrocarburos y de algunos sectores mineros, el poder real lo siguieron detentando las empresas transnacionales, aportando al fisco porcentajes insignificantes en relación con sus ganancias. De igual modo, el gobierno aumentó sus reservas financieras, manteniendo las mismas en la banca privada y en bonos del tesoro de los países centrales. La pobreza continuó estando presente más allá del incremento de las reservas internacionales en las arcas del Estado y del crecimiento económico. Aunque los líderes del MAS incorporaron en sus discursos la filosofía del «vivir bien», esto no se tradujo en proyectos orientados a la transformación de la matriz productiva del país ni en la disminución de la brecha social. Como se observa en diversos informes publicados por los organismos antes mencionados, la mayor parte de los conflictos desarrollados se originaron por temas económicos: incremento del costo de vida (en particular, en alimentos y transporte), escasez de productos básicos, pugnas por el control de recursos naturales, entre otros.

La extracción de bienes minerales no renovables sigue teniendo un peso central en la estructura económica del país. A pesar de que en la

campana electoral de 2005 Morales hizo promesas alrededor del renacimiento de la minería estatal bajo la COMIBOL, sus administraciones se caracterizaron por fortalecer al ámbito privado representado tanto por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como por la mediana y gran minería en manos de las transnacionales. Lejos de la renacionalización del subsuelo, el principal interés del gobierno fue de continuar con la estrategia capitalista neoliberal de fomento a los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras.

En ese sentido, las presidencias del MAS privilegiaron la relación con el sector cooperativista dentro del mundo de la minería. Desde el inicio de su gobierno, Morales les dio un lugar destacado en su alianza política con el objetivo de atraer a este sector porque, al mismo tiempo que representa un voluminoso número de eventuales votantes, se ha convertido también en el gran creador de empleo para los desempleados provenientes de otros ámbitos laborales. De este modo, el primer ministro que designó para esta área fue un ex presidente de la FENCOMIN. Además, creó el cargo de viceministro de Cooperativas Mineras, en manos de hombres que previamente habían sido autoridades del área.¹ Asimismo los cooperativistas actuaron como asambleístas durante la Convención Constituyente y, en la actualidad, también se desempeñan como diputados, senadores y representantes diplomáticos.

La política favorable hacia los cooperativistas se evidencia no solo observando las nuevas áreas que adquirieron bajo su gobierno (muchas de ellas alcanzadas tras cortes de rutas, avasallamientos de yacimientos y movilizaciones) sino también en la obtención de ventajas en términos impositivos y en cambios jurídicos que los beneficia frente a otros actores. Sin embargo, hubo un hecho más importante que expresa la solidez de esta alianza: los cooperativistas consiguieron que la administración del MAS no acceda a la principal demanda de los asalariados mineros, como es la nacionalización de los yacimientos y su control por medio de la COMIBOL. Cabe subrayar que todo esto se dio en un escenario signado por la suba de las exportaciones de los bienes del subsuelo, en algunos casos, con la exclusiva participación de los empresarios cooperativistas.²

1. Según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), cuando Morales asumió la primera presidencia había 911 cooperativas; para el año 2013, la cifra pasó a 1630. *CEDIB*, abril de 2014.

2. Durante 2013 la exportación de minerales de las cooperativas fue tres veces mayor a la del sector estatal. Por otro lado, este último sector no participa de la explotación de valiosos minerales como plomo, antimonio y wólfam. *Página Siete* 2014 (La Paz) 13 de abril.

¿Quiénes son los cooperativistas?

Es útil subrayar que a diferencia de lo que se puede pensar, el cooperativismo minero en Bolivia no es un sistema solidario. Por el contrario, es un sector capitalista que se desarrolla sobre la base de la explotación de sus trabajadores asalariados. Las cooperativas son empresas privadas que buscan denodadamente aumentar su tasa de ganancia sobre la base de un elevado nivel de explotación laboral de la fuerza de trabajo que contratan.

El sector cooperativista, internamente, no conforma un grupo homogéneo: algunos son empresarios y otros son trabajadores. Detrás del concepto de cooperativas mineras se oculta una compleja realidad en donde se despliega un amplio abanico de situaciones que abarca desde empresas con cerca de treinta miembros hasta otras que emplean a miles de trabajadores. En general, los dirigentes de cooperativas que controlan a las federaciones locales y departamentales se componen de un grupo minoritario de socios que se halla al frente de los órganos de dirección de las cooperativas. Por otra parte, no todos pueden convertirse en socios de una cooperativa minera: para acceder a esa posición se necesita comprar una cuota de admisión que oscila entre los 1.000 y 3.000 dólares.

Cada socio explota una parcela contratando a una cuadrilla de trabajadores mineros donde organiza libremente su producción usufructuando un paraje determinado de un yacimiento. De este modo, se conforma una verdadera unidad productiva, donde se trabaja para el beneficio de unos pocos, con una limitada (o casi nula) capacidad de inversión.

En el seno de las cooperativas se emplean a trabajadores con diversos convenios laborales. Si bien imperan los contratos por medio de salarios preestablecidos, también es normal que se pague según la producción obtenida, sin ningún compromiso salarial previo. Como el nivel de producción en cada cooperativa tiene un alto grado aleatorio, se producen fuertes diferencias en su interior: mientras algunos miembros no logran beneficios en varios meses, otros pueden obtener ganancias en forma inmediata. Además de poseer un magro salario, los mineros tienen un empleo inestable. Este fluctúa de acuerdo con los vaivenes en la cotización de los metales en los mercados. La jornada de trabajo, que puede alcanzar hasta dieciséis horas diarias, se efectúa en condiciones altamente precarias: se desarrolla en hábitats donde impera el calor y el frío extremo. El trabajo al interior de la mina requiere un gran esfuerzo físico (la perforación se efectúa con maza y cortafierros); asimismo, cuentan con un equipo básico de protección (el guardatojo y las botas de goma). La insuficiencia de herramientas y maquinarias, junto con la escasez de elementos de seguridad, hace que el empleo en las cooperativas cause numerosos accidentes de trabajo. Si bien en su mayoría los trabajadores

al interior de las minas son varones adultos, también en ese circuito productivo se desempeñan mujeres, adolescentes y niños.

Además de las precarias condiciones laborales, la gran mayoría de las cooperativas carecen de ingenios para el procesamiento de minerales: la concentración de los bienes extraídos se realiza en forma manual. A eso se debe añadir la utilización de productos químicos contaminantes – como el xantato, el ácido sulfúrico, el mercurio – que provocan cuantiosos daños en la salud de los trabajadores. Un detalle no menor es que tampoco las cooperativas efectúan tareas de prospección. La mayoría no planifican la labor en los yacimientos lo que conduce a una disputa permanente y desorganizada por la extracción de las mejores vetas. Este sistema conlleva a que se generen mayores riesgos de accidentes laborales por la falta de conocimiento de las propias condiciones de las zonas productoras que, por lo general, son propensas a inundaciones y derrumbes. Por otro lado, por la forma en que se lleva a cabo la extracción, no están disponibles los recursos para paliar los daños ambientales que se generan.

En el sistema de explotación que implementan las cooperativas mineras el Estado prácticamente se encuentra ausente en diversos aspectos: desde su nula intervención en las tareas de planificación, prospección y control de las condiciones laborales, hasta en el magro ingreso que recibe vía aporte impositivo a través del Impuesto Complementario a la Minería. En idéntico sentido, los socios de las cooperativas comercializan lo extraído con especuladores y rescatadores de minerales evadiendo las contribuciones fiscales.

Conflictos obreros mineros durante la primera presidencia

Si bien al comienzo de su primera gestión los principales reclamos que tuvo que hacer frente Morales fueron los que se originaron en el magisterio, los más significativos y neurálgicos fueron los que se produjeron en el mundo minero. De todos estos conflictos, el más importante fue el protagonizado por los trabajadores del subsuelo en Huanuni.

La ciudad de Huanuni, declarada capital del estaño de Bolivia, se encuentra en la primera sección municipal de la provincia Pantaleón Dalence del departamento de Oruro. En dicha zona se alza el yacimiento minero en el cerro Posokoni, que hasta la Revolución de 1952 había pertenecido a uno de los hombres más poderosos de la «rosca»: el magnate Simón Patiño. Por otro lado, también el centro productor ha pasado a la historia porque en ese lugar, el 11 de junio de 1944 fue fundado en un congreso de trabajadores mineros la FSTMB. Además, fue el lugar donde se impulsó la realización de un encuentro minero donde se votó la ayuda económica para la guerrilla de Ernesto Che Guevara en 1967.

Tras la debacle provocada por la aplicación del DS 21.060, numerosos trabajadores desocupados se instalaron en el cerro Posokoni con el fin de explotar algunas áreas en la zona. A partir de ahí, durante cerca de quince años se produjeron una serie de incidentes entre diversos sectores. Por un lado, los mineros asalariados permanecieron bregando para que el yacimiento siga estando explotado por la COMIBOL; por otra parte, un grupo de empresas transnacionales abogó (y lo logró en forma momentánea) por su privatización y, finalmente, hubo un sector que terminó formando empresas cooperativas para su propio beneficio.

En el año 2006, en el marco de las alianzas establecidas para alcanzar la presidencia, Morales designó como ministro de Minería a Walter Villarroel, miembro de la cooperativa La Salvadora de Huanuni, decisión que generó un abierto malestar con la FSTMB. A partir de entonces, los empresarios cooperativistas retomaron la ofensiva para explotar los niveles más profundos del cerro, donde se encontraban trabajando los asalariados de la COMIBOL. En esa coyuntura, en los primeros nueve meses del año hubo dieciséis reuniones entre el gobierno y los actores antes mencionados para solucionar la explotación del yacimiento; sin embargo, esto no sirvió para detener los enfrentamientos sangrientos que se sucedieron.

A medida que se desarrollaron las negociaciones, en el mes de septiembre, los cooperativistas agrupados en la FENCOMIN efectuaron una serie de ocupaciones en las minas de Colquiri y de Viloco (ambas del departamento de La Paz) a la vez que bloquearon las principales carreteras del occidente del país exigiendo – entre otras cuestiones – mayores niveles de explotación en Huanuni.

A pesar de que muchas de las demandas solicitadas se cumplieron, en la primera semana de octubre, los cooperativistas incrementaron las presiones sobre la FSTMB y las autoridades nacionales para que se acepten sus reclamos. En ese marco, los socios de las cooperativas que operaban en el cerro determinaron la toma del yacimiento, dando lugar a un enfrentamiento sangriento con los asalariados. Como consecuencia, tras dos días de duros combates, fallecieron dieciséis pobladores y cerca de un centenar de heridos.

Estos hechos derivaron en una grave crisis institucional; en opinión de Morales, este fue uno de los momentos más difíciles de su presidencia. En lo inmediato, Evo solicitó la renuncia del ministro Villarroel y del director de la COMIBOL, Antonio Rebollo, quienes fueron reemplazados por Guillermo Dalence y Hugo Miranda, respectivamente. A fines de ese mes, el primer mandatario firmó el DS 28.901 por el cual se nacionalizó el yacimiento. Además, la empresa estatizada contrató a los empleados mineros que estaban agrupados en las cuatro cooperativas que operaban el cerro; así, ingresaron como asalariados cerca de cuatro mil trabajadores

provenientes de las ex cooperativas y de campesinos de la zona (Mokrani 2006; Fornillo 2009).

Las protestas de cooperativistas, mineros sindicalizados y empresarios continuaron durante los restantes años de la primera presidencia. Dentro de estas, una de las más importantes fue la que se dio desde fines de diciembre de 2008, y a lo largo del primer semestre de 2009, en la empresa Sinchi Wayra, filial de la multinacional suiza Glencore. Las mismas se sucedieron en diversos centros mineros de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro. Los hechos se iniciaron en ocasión de que la compañía había decidido despedir a más de mil doscientos trabajadores a la vez que pensaba reducir el quince por ciento de los haberes para aquellos asalariados que permanecían; junto con ello, había dispuesto la reorganización de labores en dos turnos de doce horas diarias. Frente a esa situación en los distintos centros mineros de Porco, Bolívar y Colquiri, los trabajadores decidieron efectuar distintas medidas de fuerza. Así, por ejemplo, en este último campamento los asalariados del subsuelo ocuparon la mina y se hicieron cargo de la producción; cabe subrayar que la acción contó con el amplio respaldo de sus mujeres que colaboraron con el bloqueo al ingreso principal del yacimiento.

Ante el impacto de estos acontecimientos y temiendo que la medida se extienda a otros centros mineros, se rubricaron una primera serie de acuerdos entre la FSTMB, la COB, el gobierno y la compañía; por medio de ellos, la firma se comprometía a rever los despidos y la rebaja salarial. Sin embargo, esto no sucedió. La multinacional continuó con su ofensiva lo que llevó a que se iniciaran nuevamente acciones de protestas en el mes de mayo con paros y movilizaciones desde los distritos mineros a La Paz con el fin de frenar las ambiciones de la empresa. Tras una masiva marcha de tres mil mineros a la sede del Poder Ejecutivo, se llegó a un nuevo convenio por el cual aumentó la productividad de los trabajadores manteniendo el régimen horario original de ocho horas. En otros términos, el acuerdo avalado por Morales y la COB terminó siendo perjudicial para los intereses de los trabajadores.

En ese marco es interesante observar cómo fue cambiando el posicionamiento de la dirigencia sindical frente al gobierno. Al principio de su mandato los líderes mantuvieron una actitud de desconfianza hacia el presidente. La central obrera se encontró con una situación novedosa en su larga historia: la presencia de un dignatario indígena con un fuerte respaldo de las organizaciones campesinas. En esa coyuntura, la FSTMB y la COB cuestionaron dos grandes temas. En primer lugar, se criticó que el ministerio de minería estuviese encabezado por un socio cooperativista. En segundo término, se esbozó el temor de que sectores sociales vinculados a Evo buscaran modificar el estatuto de la entidad e impusieran

a dirigentes de sindicatos campesinos o a cooperativistas al frente de la misma en el XIV Congreso Orgánico que se iba a efectuar en junio de 2006.

Esto último no sucedió ya que los delegados hicieron prevalecer la tradición minera a la hora de elegir una nueva conducción. De esta forma, el encuentro celebrado en Viacha designó a Pedro Montes en reemplazo de Jaime Solares como secretario ejecutivo de la central. A la par de esta designación, el cónclave laboral reafirmó la necesidad de «luchar por las agendas de octubre del 2003 y de mayo-junio de 2005» por lo que se enfatizó «la nacionalización sin indemnización de los hidrocarburos, la recuperación de todos los recursos naturales y la abrogación de los decretos y leyes neoliberales» (CEDLA 2009, pág. 5).

A pesar de estas declaraciones, durante los siguientes años la dirigencia encabezada por Montes se terminó acercando al proyecto de Morales, lo que se expresó en el último semestre del 2008. En ese sentido, la decisión de la COB estuvo enmarcada por una serie de sucesos previos. En primer lugar, esta determinación se aceptó tras una serie de fuertes críticas que recibió la dirigencia cobista por parte de un importante sector de mineros de Huanuni tras la muerte de dos trabajadores en una medida de fuerza en el mes de agosto.³

En segundo lugar, la aproximación al gobierno se encuadró dentro de los distintos realineamientos de fuerzas que se produjeron en esa coyuntura al calor de los tensos enfrentamientos con los prefectos opositores en el marco de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente.⁴ Paralelo a ello, la disposición del secretario ejecutivo de la entidad laboral se inserta en un contexto donde el presidente había sido ampliamente ratificado en las urnas tras el referéndum realizado el 10 agosto.

Toda esta situación condujo a que la dirigencia de la COB, en septiembre de 2008, se integre a la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), ente que aglutinaba a todos los sectores sociales afines al MAS.⁵ Si bien el pacto fue duramente criticado por las centrales obreras departamentales de Oruro y Tarija, el mismo representó la subordinación

3. En esa oportunidad fallecieron dos mineros asalariados de Huanuni como consecuencia del enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad del gobierno cuando buscaron levantar el bloqueo de caminos. Este hecho generó una fuerte crisis en el seno del sindicato minero lo que derivó en la renuncia de algunos de sus dirigentes

4. Cabe recordar que esa coyuntura estuvo enmarcada por un momento de alta tensión cuando el día 11 de septiembre se produjo la masacre de más de veinte campesinos en Pando ordenada desde la prefectura local. Véase Allende y Boido (2014).

5. El acuerdo fue suscrito en instalaciones de la máxima entidad con la presencia de Morales; el ministro de Trabajo, Walter Delgadillo; el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez, el titular

de la lucha de los asalariados y de la agenda de octubre de 2003 a la defensa del gobierno y su política de conciliación de clase.

A partir de entonces, con muy escasas situaciones excepcionales, se produjo una explícita convivencia entre ambos actores a lo largo del primer mandato de Evo. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas se tensaron cuando emergieron conflictos por fuera de la aprobación de la dirigencia cobista como fueron los casos de las protestas de los docentes paceños, los trabajadores del Servicio de Aeropuertos SA, los del proletariado fabril y los empleados de la salud pública, por mencionar solo algunos.

La conflictividad laboral minera durante el segundo mandato presidencial

La mayoría de los observadores sobre el proceso reciente boliviano coinciden en afirmar que el segundo período presidencial de Morales se inició dentro de una coyuntura más favorable que su primer mandato: logró un amplio triunfo electoral, derrotando a los sectores opositores de la derecha regional. El MAS se convirtió en un movimiento político y social hegemónico sin precedentes. Sin embargo, ese escenario no alcanzó para evitar que se produzcan numerosos conflictos (Schneider 2014).

El objetivo gubernamental de impulsar un modelo de desarrollo industrial en el marco del denominado «Proceso de Cambio» provocó, desde el inicio del segundo mandato de Evo, una serie de problemas y cuestionamientos distintos a los experimentados en el primer período. A diferencia de esa gestión, los principales sectores que impugnaron las directivas del Poder Ejecutivo no provinieron del bloque regional del oriente boliviano, sino desde sus propias bases electorales.

Asimismo, como un elemento necesario para promover este modelo de desarrollo, Morales privilegió una estrecha alianza con las corporaciones antiguamente dominantes, poseedoras de las principales riquezas del país y del pasado poder político. En este sentido, no sorprende la abierta aceptación de sus medidas por los enemigos de antaño, como los grupos empresariales de Santa Cruz y Tarija. Por otro lado, el amplio control alcanzado en los diversos órganos del Estado condujo al MAS a contar con una notable concentración de poder en todas las instituciones del régimen, lo que en la práctica se tradujo en una clara posición hegemónica sobre las diferentes organizaciones sindicales y comunitarias.

Todo este panorama quedó claramente plasmado en el incremento de las protestas sociales durante el segundo mandato presidencial; en particular, sobresalieron las encabezadas por la clase trabajadora. Según

del CONALCAM, Fidel Surco; el ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Edgar Patana, entre otros.

la Fundación UNIR (2012), en el 2010 se desarrollaron 770 conflictos, lo que constituye más del doble de las protestas acaecidas el año anterior, cuando hubo 316, y más del triple de las originadas en 2008. Estos datos cobran una mayor relevancia si se los compara con 2011, cuando se alcanzó la cifra de 1.304 conflictos. Por otra parte, si bien en el 2012 y en el 2013 los eventos tendieron a disminuir, en comparación con el 2011, estos nunca alcanzaron los escasos números de la primera gestión de gobierno.

Cabe indicar que el recrudecimiento de la protesta social por parte de la clase obrera se dio en la mayoría de las ocasiones por fuera de la voluntad de la dirigencia sindical. En ese marco, los primeros enfrentamientos en el mes de abril de 2010 fueron encabezados por los docentes y el proletariado fabril de La Paz en oposición al anteproyecto del Código de Trabajo que era impulsando por el MAS en connivencia con la dirigencia laboral.⁶

Este panorama se intensificó al cruzarse con las negociaciones anuales salariales impulsadas por la central obrera; en esa coyuntura, frente a las diversas críticas que recibía la dirección de la COB por su actitud complaciente con Evo, decidió convocar al primer paro general nacional del período. El mismo mostró un masivo apoyo: en los nueve departamentos se realizaron marchas, bloqueos de vías y se instalaron piquetes de huelga de hambre; incluso en La Paz, los obreros fabriles intentaron tomar el Ministerio de Trabajo y fueron reprimidos por la policía, dejando a numerosos trabajadores detenidos.

Con ese panorama de fondo, se acrecentó el cuestionamiento a la dirección cobista. Los mineros (corazón y alma de la central obrera) reunidos en el XXXI Congreso de la FSTMB criticaron duramente el incumplimiento de Morales; a su vez se demandó la convocatoria a un nuevo Congreso de la COB para renovar el Comité Ejecutivo Nacional junto con el pedido de que Montes sea sometido a un «proceso por el tribunal de honor de la Federación de Trabajadores Mineros».⁷

En esa coyuntura los mineros participaron de numerosos enfrentamientos contra el gobierno. Si bien los empresarios cooperativistas se perjudicaron con la nacionalización del cerro Posokoni en el 2006, el primer mandatario continuó otorgando numerosos beneficios a este sector. En el mismo sentido, el Poder Ejecutivo continuó con su política laboral de no objetar ni castigar a las cooperativas por las pésimas condiciones de empleo que impera en ese espacio laboral (Espinoza 2010).

En la segunda presidencia de Morales, el sector minero continuó beneficiado por el alza de los precios de las materias primas. En parte, esto

6. El cuestionamiento al anteproyecto fundamentalmente se centró en que el mismo limitaba el derecho de huelga, reglamentando los pasos a seguir antes y después de declarada la medida de fuerza.

7. *La Prensa*, 12 de septiembre de 2011.

explica el aumento de las pugnas entre los asalariados y las cooperativas por el control de los yacimientos. Según la pesquisa efectuada, los mayores enfrentamientos, algunos en forma extremadamente violentos, se sucedieron en la región occidental; sobre todo, en aquellas áreas con mayor concentración de minerales, como en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. Así, por ejemplo, en el año 2011 se efectuaron varias protestas de empresarios cooperativistas, mineros asalariados y campesinos, por el control y explotación de diversos yacimientos de piedra caliza, estaño, hierro y oro, entre otros minerales (Quiroga y col. 2012).

En el año 2012, además de los conflictos por aumentos salariales sobresalieron una serie de enfrentamientos en el mundo minero. De esta manera, se produjo una dura disputa de trabajadores en Colquiri y en Mallku Khota en favor de la nacionalización del subsuelo. En el primer yacimiento, el problema se inició en el mes de mayo cuando un grupo de cooperativistas avasalló la mina ubicada en el departamento de La Paz. Hasta ese momento la empresa era operada bajo la modalidad de riesgo compartido (con la COMIBOL) por la compañía Sinchi Wayra. A partir de ese entonces, durante cinco meses, se desarrolló una puja incesante entre los dos grandes interesados del área: la FSTMB y la FENCOMIN. En ese lapso, se desataron varias provocaciones con dinamita (que ocasionaron decenas de heridos y un muerto), capturas de rehenes, paros en centros mineros, bloqueos de rutas y movilizaciones a la sede del gobierno. Frente a estos hechos, Morales decidió nacionalizar parcialmente el yacimiento, pasando su gestión a la COMIBOL; en forma simultánea, dejó que una de las mejores vetas (la denominada Rosario) fuese en un 50 % explotada por los cooperativistas.

En la segunda ocasión, el altercado se dio en torno a la producción de la mina Mallku Khota en territorio indígena originario del norte de Potosí. Desde el año 2003, la zona venía siendo regenteada por un consorcio subsidiario de la firma canadiense South American Silver. A partir de ese momento, la empresa mantuvo una política de adquisición de concesiones y de cooptación de dirigentes comunitarios por medio de compensaciones sociales y facilitando fuentes de empleo. Sin embargo, esta situación no fue aceptada por la mayoría de la población; esto condujo a que diferentes ayllus del lugar hiciesen numerosas asambleas y cabildos con el objetivo de expulsar a la compañía y exigir al Poder Ejecutivo la reversión de las concesiones otorgadas (Jiménez y Campanini 2012). Con ese panorama de fondo, se iniciaron en el mes de mayo una serie de protestas a raíz de que un grupo de policías ingresó con violencia en la comunidad, invadiendo las viviendas, gasificando a los pobladores e intentando capturar a una serie de dirigentes locales. Esto derivó en cinco meses de ocupaciones con rehenes, movilizaciones a La Paz y choques con las fuerzas de seguridad que dejaron

un saldo de un campesino muerto y de varios heridos. Tras esos hechos, Morales firmó un decreto supremo donde se nacionalizó la reserva, asignando a la COMIBOL la administración del yacimiento.⁸ No obstante, este fue un pacto provisorio. Los asalariados de la FSTMB insistieron en que en la medida dispuesta no se contemplara la participación de los cooperativistas y que, en la directiva sindical de los trabajadores de la empresa estatal, se incluyera la participación de los ayllus, ingresando los comunarios de la zona de acuerdo con las necesidades laborales de la COMIBOL. De esta forma, hasta mediados de octubre prosiguieron las pugnas violentas con heridos entre comunarios del lugar y ex cooperativistas y campesinos que apoyaban la presencia de la multinacional canadiense; esto condujo a que Evo decidiera otorgar una custodia militar permanente a la reserva.

Por fuera de esos problemas específicos, al igual que en Huanuni durante el 2006, en lo anteriormente expuesto se expresa la política del MAS para el sector minero. Por un lado, los trabajadores asalariados exigieron en todo momento la nacionalización de los yacimientos y su control por medio de la COMIBOL; por el otro, los cooperativistas (junto con el gobierno) postularon el derecho del capital privado a la explotación minera. De esta manera, como consecuencia de la radicalización de la propia lucha en torno a la contienda de Colquiri, cuando los cooperativistas bloquearon durante cuarenta y ocho horas todos los caminos del país, la FENCOMIN logró la firma de un decreto supremo suscripto por el presidente que alteró por completo los términos de explotación de la Reserva Fiscal Minera, en detrimento del Estado nacional boliviano.⁹

En cuanto a la central obrera, en enero de 2012 se llevó a cabo en Tarija su XV Congreso Ordinario. Dicho encuentro eligió un nuevo Comité Ejecutivo liderado por el ex minero de Huanuni Juan Carlos Trujillo; el evento reiteró un conjunto de declaraciones propias de la historia de la COB centradas en torno al sindicalismo revolucionario. A pesar de que en ese momento se criticó la relación que mantuvo la anterior dirección cobista con el MAS, a los pocos meses de iniciada la nueva gestión se reiteraron similares prácticas negociadoras con el gobierno como se evidenció en

8. Luego de suscribir el acuerdo, el primer mandatario reconoció su «error» por «no convocar» en forma inmediata a los comunarios de la región para resolver el problema, y por ello, ofreció sus disculpas. *La Razón y Página Siete*, 11 de julio de 2012.

9. Hasta ese entonces, el Estado boliviano era el único propietario de los recursos mineralógicos de la Reserva Fiscal Minera. Esta norma legal, desde sus orígenes, había sido duramente cuestionada por los cooperativistas y los empresarios privados, nacionales y extranjeros. Con la nueva disposición legal, Morales acalló estas críticas.

los magros acuerdos salariales de ese año y en el apoyo electoral para las elecciones de 2014.¹⁰

En esa coyuntura, en mayo de 2013 el movimiento obrero mantuvo uno de los principales conflictos del período; este se originó en torno a la ley de Pensiones O65, por la cual el gobierno se aferró a mantener los lineamientos básicos diseñados por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada. La exigencia de la COB se inició en demanda de una mejora sustancial de la renta recibida junto con la posibilidad de cambiar algunos artículos de la mencionada norma. En función de ello, la central sindical dispuso un paro general que tuvo una amplia repercusión, como pocas veces había ocurrido en el último lustro. Durante las dos semanas que se mantuvieron los enfrentamientos, se produjeron cerca de cuarenta puntos de bloqueos en rutas y calles, movilizaciones masivas en cada uno de los departamentos del país, huelgas de docentes, los trabajadores del área de la salud, los mineros y los operarios fabriles. Entre algunas de las acciones efectuadas, se destacó el sitio en torno a la Plaza Murillo, en La Paz, que protagonizaron cuatro mil mineros provenientes de Huanuni.

Ante el desarrollo de estas medidas de fuerza el Poder Ejecutivo declaró ilegal la protesta, dispuso la detención de cerca de cuatrocientos trabajadores, reprimió en la localidad de Parotani a los asalariados fabriles y a los mineros en el punto de bloqueo de Caihuasi. En este último sitio, frente al brutal accionar policial que provocó una decena de obreros heridos de bala y cien detenidos, los trabajadores del subsuelo dinamitaron el puente. Al igual que en otros conflictos, Morales y su vicepresidente descalificaron la puja gremial acusando a los dirigentes sindicales como «golpistas», a la vez que convocaron a algunos de sus grupos afines como la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» a movilizarse contra los huelguistas y manifestantes obreros.

Tras dieciséis días de paro y luego de varias reuniones mantenidas con emisarios del gobierno, la dirigencia de la COB redujo el monto de los haberes originalmente solicitados a la par que acordó un cuarto intermedio de negociación con las autoridades ministeriales. Por otra parte, como consecuencia de la protesta, Evo mandó a procesar a veintidós mineros de Huanuni acusados por la voladura del puente de Caihuasi, impulsó la revisión de las cuentas de la Empresa Minera Huanuni buscando suspender el control obrero colectivo y sugirió la posibilidad de que esta última compañía pudiese convertirse en una cooperativa.¹¹

10. Esta negociación se dio a pesar de las numerosas protestas que se dieron a favor de un importante incremento salarial. Información extraída de *La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos*, mayo de 2012.

11. Una crónica detallada en *La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos*, mayo a septiembre de 2013.

Es evidente, como mencionamos al comienzo de este ensayo, que las cuestiones referentes al mundo minero son centrales en Bolivia. Ya sea por el peso que aún mantiene el proletariado del subsuelo como por la dimensión económica del sector. En ese sentido, estos elementos volvieron a cobrar importancia en los primeros meses de 2014 cuando se produjo una serie de conflictos entre los empresarios cooperativistas y el gobierno durante el proceso de discusión parlamentaria de la ley de Minería y de Metalurgia.

Si bien el proyecto presidencial continuó con los lineamientos centrales de la norma sancionada bajo la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1997, el gran capital minero y los cooperativistas buscaron una mayor participación en la explotación del subsuelo a expensa de la empresa estatal (la COMIBOL) y de las comunidades originarias.

Al calor de esas discusiones, como en otras disputas, los empresarios cooperativistas se valieron de sus empleados para efectuar un rotundo bloqueo de caminos en el altiplano.

Como consecuencia se dieron una serie de enfrentamientos con la policía que derivaron en el fallecimiento de dos trabajadores junto con medio centenar de heridos. A raíz de ello, el ministro del área Mario Virreira presentó su renuncia, obligando a los parlamentarios a rediseñar el proyecto original del Poder Ejecutivo. En ese escenario, se renegociaron los artículos que generaron las controversias y se aceptó, a fines del mes de abril, una nueva norma legislativa sobre la materia en cuestión.

De este modo, el nuevo marco jurídico impulsa y fomenta la privatización de la actividad minera a través de las grandes empresas y las cooperativas, relega la presencia minera estatal, no prioriza la industrialización de los recursos ni el resguardo del medio ambiente, a la vez que resta importancia a la consulta de los pueblos indígenas sobre el uso de sus tierras.

Algunas características de los conflictos y su resolución por parte del gobierno

En el presente apartado se intenta observar algunas de las principales características que adoptaron las medidas de fuerza durante estos años. En primera instancia, en gran medida, la mayor parte de las disputas las desplegaron los propios votantes del MAS.

En cuanto al tipo de enfrentamiento desarrollado se caracterizó por paros activos con movilización a las sedes de los gobiernos comunal, departamental y nacional. Algunas protestas se hicieron con ocupación de yacimientos y tomas de rehenes. En varias ocasiones estas pugnas se desarrollaron en forma violenta.

En lo que respecta a los reclamos planteados se pueden calificar, a grandes rasgos, de dos formas. Primero, estos emergieron como consecuencia de problemas locales con las autoridades nacionales en los centros mineros; en este sentido, las demandas se hicieron contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de las propias leyes que impulsó, ya sea porque violaron los derechos constitucionales de los indígenas tanto en la preservación de las denominadas áreas ambientales protegidas, como por los acuerdos firmados en torno a las concesiones de yacimientos. Segundo, se originaron por disputas económicas, como el pedido de incrementos salariales, la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y el acceso a los empleos del sector.

En la mayoría de los conflictos analizados se observa que estos se iniciaron sin ningún tipo de instancia de previa conversación. Si bien de acuerdo con la lectura de la prensa diaria, se puede advertir la existencia de antecedentes en los reclamos, los sectores afectados optaron por la movilización y el propio enfrentamiento, antes que la búsqueda de un entendimiento con las autoridades. De este modo, se desplegó una lógica donde primó la fuerza de la presión y luego la negociación. Por otro lado, el desenvolvimiento de este accionar les facilitó a los sectores movilizados el posicionamiento en forma rápida de los reclamos en la agenda política y mediática. En cierta manera este comportamiento no es nuevo, sino que hunde sus raíces en una tradición sindical de larga data en Bolivia.

La reacción del gobierno frente a estos reclamos ha transitado por un sendero idéntico en casi todas las ocasiones. A grandes rasgos, sus respuestas se caracterizaron por dejar que las protestas se diluyeran o se resolvieran en el ámbito de las autoridades locales. Cuando superaron esa instancia, se las descalificó y se las hostigó con argumentos de que las mismas fueron originadas por intereses espurios, ajenos a los reales problemas de la sociedad afectada. Se las denunció como una conspiración motorizada por grupos políticos opositores, los departamentos del oriente o por organizaciones no gubernamentales, con el fin de derrocar a Morales. Siguiendo esta línea de pensamiento, García Linera, en reiteradas oportunidades, ha estigmatizado a los distintos sectores en conflicto como adversarios del «proceso de cambio», por ende como «conspiradores» y «agentes de derecha».

De manera simultánea, el primer magistrado recurrió al auxilio de sus grupos de apoyo más cercanos y directos, para que efectúen convocatorias paralelas en solidaridad con su gestión. Llegado a ese plano de confrontación, en no pocas ocasiones el gobierno también apeló a la represión provocando varios heridos y muertos. La falta de una instancia previa de negociación, la beligerancia discursiva empleada contra los opositores que se movilizaron y el llamamiento a sectores cercanos del Poder Ejecutivo

para que confronten con los manifestantes, condujo a transitar un sendero de violencia. Al respecto, los ejemplos de Huanuni, en el primer mandato, y los de Mallku Khota y Colquiri, en el segundo, son elocuentes. Alcanzada esa instancia, el presidente diluyó la protesta interviniendo en forma personal y, en general, cediendo total o parcialmente en las posturas que motivaban los reclamos. Asimismo, en numerosas ocasiones, intentó integrar a los opositores en el aparato del estado. De esta forma, el gobierno en la mayoría de las circunstancias intervino en forma tardía, modificando sus planes e intereses originales.

A pesar de que muchas medidas de fuerza presentaron un elevado índice de radicalización y que, a través de su propia dinámica, se desarrollaron hechos de violencia, es necesario señalar que esto no significó una impugnación al sistema democrático ni se puso en riesgo la gobernabilidad del país. Por otro lado, tampoco el MAS dejó de ocupar el centro del campo político, sino que continuó controlando la totalidad de las instituciones públicas y un gran número de organizaciones sociales.

En otro orden de cuestiones, es importante mencionar que en ambas gestiones de gobierno, los sectores más privilegiados del mundo de la minería fueron los pertenecientes al ámbito privado: el gran capital transnacional y las cooperativas.

Finalmente, corresponde observar que el Poder Ejecutivo es consciente de esta coyuntura de descontento social con su gestión; en este sentido, el segundo mandato estuvo cruzado por un fuerte desgaste frente a la población, como lo demostró el constante cambio de ministros. Por su parte, como una manera de justificar los problemas existentes, García Linera ha mencionado en diversas ocasiones que se estaba transitando por la quinta fase del denominado «Proceso de Cambio», la cual era definida por la presencia de «tensiones creativas» en el interior del bloque popular (García Linera 2011).

Conclusiones

A pesar de ciertas mejoras en algunos indicadores sociales, el desempleo, los bajos salarios y la calidad del empleo se mantuvieron entre los problemas más acuciantes de la sociedad boliviana. En aras de construir un capitalismo desarrollado, el primer mandatario indígena continuó privilegiando el interés del capital y los equilibrios macroeconómicos, en desmedro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Aunque numerosos conflictos se caracterizaron por poseer inusitados niveles de violencia, en particular, por la represión ejercida desde las autoridades, los sectores sociales que se manifestaron lograron acceder a sus objetivos por la fuerza de su movilización y su capacidad de presión. En cierta manera, Evo muestra su pragmatismo como antiguo líder sindical, el

cual se acomoda frente a los reclamos de sus bases en el marco de una lógica caracterizada por la tensión, la negociación y la integración al Estado. De este modo, se vio obligado (en reiteradas oportunidades) a aceptar alguna demanda pidiendo como prenda de cambio la finalización de las medidas de fuerza. El debate que precedió a la definitiva ley de Minería y Metalurgia es un ejemplo de ello.

Asimismo, corresponde observar que por distintas circunstancias la dirigencia de la COB cada vez más se ha ido alejando de su propia historia. En ese sentido, no existen por ahora indicios que demuestren un intento de regresar a su antigua independencia de clase frente a los gobiernos en Bolivia.

Protesta y movilización social en Colombia a comienzos del siglo XX

Roberto González Arana e Ivonne Molinares-Guerrero

.....

En América Latina, el movimiento obrero ha sido uno de los actores permanentes del escenario de conflictividad social, escenario en el cual, la lucha a través de la movilización ha sido una constante por la equidad y mejores condiciones, para este caso laborales. Este también ha sido el otro soporte de las fuerzas populares en el continente, junto con los movimientos campesinos. Sus primeras formaciones se encuentran en las poblaciones mineras de finales del siglo XIX. En la primera década del siglo XX encontramos una primera ola de industrialización en varios países de la región que se sostuvo en gran parte con el trabajo de inmigrantes europeos, particularmente españoles e italianos (Dos Santos 2004, pág. 69). Estos trajeron consigo sus ideales, imaginarios y su experiencia de lucha social, que pudo manifestarse en estas tierras a través de la inconformidad de artesanos y otros trabajadores, que empezaron a expresarse a través de la «huelga general revolucionaria a la cual se aproximaron hacia finales de 1910, después de la expansión industrial durante la Primera Guerra Mundial y la contracción económica que le sucedió» (ibídem, pág. 70). Como sostiene Nieto Arteta (1942), hacia 1850 eran ya tan vigorosos los grupos sociales deseosos de extinguir y destruir la economía colonial, que esa prepotencia obligó al gobierno a inclinarse ante sus exigencias. Afirmación que referencia el estado de la economía colombiana para la segunda mitad del siglo XX, marcada por la fuerte herencia de las instituciones poscoloniales (ibídem, pág. 107).

Para la teoría de los movimientos sociales, los obreros se explican desde la óptica de lo «clásico», pues ellos provienen de movilizaciones con acento económico, se expresan a partir de un conflicto con el orden institucional, el cual pretenden cambiar con su lucha. Es así como la definición de Turner y Millian (1987), establece que «un movimiento social puede definirse como

una colectividad que actúa con cierta continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad (o grupo) de la que forma parte» (Turner y Millian 1987, págs. 3-4). En el recorrido de los obreros nos encontramos con esta *continuidad* que desde principios del siglo xx hasta hoy siguen en búsqueda de reivindicaciones, y con el objetivo de *cambio social*, o de resistencia a él, que en ellos se expresa a través de la inconformidad con el modelo económico en el discurso del desarrollo y hoy en resistencia a los pasos globalizadores de los tratados de libre comercio.

Así las cosas, definir este movimiento desde una perspectiva clásica, nos obliga a establecer un enemigo u oponente, que para el caso es el modelo económico y la complacencia del Estado con este. Su finalidad siempre será colectiva pues busca la transformación de la sociedad, lo que no es muy fácil es concretar si las transformaciones anheladas obedecen a cambios parciales, por lo cual cabrían en la tipología de *reformadores*, o si son cambios totales, que los clasificaría entonces como *revolucionarios* (MacAdam y Snow 1997). Sin embargo, si observamos el recorrido del movimiento obrero en América Latina (véase para ello Berquist 1989), de manera muy suspicaz se podría avizorar que, después de los totalitarismos en la región – iniciados en 1968 en Perú con un gobierno militar nacional democrático – y la inminente derrota de Estados Unidos en Vietnam, se generó un ambiente de represión estatal, que incluso rayaba en el terror, por lo cual, resultó natural, «que el movimiento obrero haya renacido hacia fines de la década de los setenta y los ochenta bajo formas más cautelosas y que asumiera las banderas de los derechos humanos, de la amnistía y del restablecimiento de la democracia» (Dos Santos 2004, pág. 72).

Desde esta perspectiva nos encontramos ante un movimiento social «clásico», que ha trascendido el tiempo y que además, ha ajustado sus demandas a un modelo económico hegemónico que nunca ha mostrado más alternativa que la diferencia de una clase que produce y otra que aprovecha. Pero más que eso, el movimiento obrero colombiano ha enfrentado década tras década desde el pasado siglo xx, los embates de una sociedad que consume y que además se ha mundializado, sin resolver los problemas de fondo.

La movilización social en Colombia, como manifestación de rechazo a la arbitrariedad y al autoritarismo y «como medio para alcanzar reformas de variado orden era considerada desde los años veinte, una acción subversiva, desestabilizadora del andamiaje institucional y susceptible de condena social y legal. El trabajador, el ciudadano, el campesino y el indígena eran tratados como enemigos de la sociedad» (Torres Del Río 2010, pág. 79). A las elites nacionales les preocupaba enormemente que los vientos liberadores que venían de Europa (Revolución Rusa), México (revolución agrarista), Argentina (revuelta estudiantil de Córdoba) o el aprismo

peruano, influyeran en los trabajadores y sus líderes, en un contexto en cual las condiciones laborales en el país eran muy precarias. Justamente, el Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista surgieron en las primeras décadas del siglo, y algunas de estas colectividades no descartaron a la violencia como método para obtener sus metas. Según Ignacio Torres Giraldo «la fuerza política principal que movilizaba al pueblo por la senda revolucionaria, era la propaganda que hacíamos del sistema soviético instaurado por los trabajadores rusos en su país» (Torres Giraldo 2005, pág. 18). Antes de ello, las ideas de la Revolución Francesa habían iluminado las luchas sociales en el país.

El arribo del siglo xx y el inicio del proceso de la industrialización en el país trajeron consigo la aparición de las primeras generaciones obreras, herederas de tradiciones, imaginarios y una importante capacidad organizativa de los artesanos del siglo xix. No olvidemos las movilizaciones de estos contra el librecambismo y las sociedades democráticas impulsadas por los trabajadores de la época. Este trabajo centra su atención en el movimiento urbano e industrial colombiano pues la historia del capitalismo agrario y las luchas campesinas merecen un capítulo aparte que desarrollaremos en otro avance del proyecto de investigación que adelantamos. Tenemos muy presente que nuestra perspectiva de análisis se centra en los motivos económicos y políticos de las luchas sociales en el período de estudio pese a lo cual, sabemos también que un trabajo más amplio debería incluir otros aspectos como la cultura política, los imaginarios, las tradiciones de lucha en las distintas regiones y diversos sectores económicos en los que laboraban los obreros.

En 1912, los trabajadores colombianos iniciaron diversas protestas sociales como el paro de los maquinistas y fogoneros del ferrocarril de Antioquia, quienes pedían mejor remuneración y asistencia médica, dadas sus precarias condiciones con extenuantes jornadas laborales y difíciles condiciones de vivienda. Posteriormente, los obreros de los ferrocarriles de La Dorada declararon otra huelga. Lo paradójico del asunto es que para ese momento, la movilización social aun no era un motivo de gran preocupación para el establecimiento. Según el periódico *El Tiempo* (21/12/1917), el paro se dio «sin gritos agresivos, sin un solo acto de violencia, sin una sombra de amotinamiento, con la serenidad que hubiera precedido al más culto de los pueblos». A lo anterior añadía, «aunque la cuestión social se ha presentado por primera vez en Colombia, aconteció en forma honrosísima, por su serenidad y su justicia... con una moderación inteligente que sería injusto no elogiar» (Cronshaw 1996, pág. 204). Sobre este período, Melo (1989) sostiene que existía un cierto *paternalismo hostil* por parte del Estado hacia la protesta pues las huelgas en las que se daban actos de violencia fueron reprimidas brutalmente, pero en forma paralela se reconoció el

derecho a huelga en 1919. El mismo decreto brindaba a los patronos el derecho a reemplazar a los huelguistas contratando nuevos trabajadores. Luego en 1920, se prohibieron las huelgas en el sector del transporte así como en algunos servicios públicos e incluso, se limitó la realización de las mismas hasta tanto no agotar el recurso de la conciliación. Posteriormente, muy lentamente se iría introduciendo mejoras a las condiciones de los obreros como el derecho al descanso dominical (no remunerado) y regulaciones de salubridad e higiene en las fábricas (Melo 1989, pág. 89).

Como lo evidencia Cronshaw, la tolerancia de las elites colombianas hacia el joven movimiento sindical se desvaneció tempranamente (en 1918) a partir de las huelgas en la costa Atlántica, ocurridas en Cartagena y el Magdalena. Los obreros de la Santa Marta Railway Company, unidos a los trabajadores del puerto obstaculizaron la llegada del vapor de la United Fruit Company. En respuesta a la protesta y los «motines y tumultos» el presidente José Vicente Concha declarararía la «turbación del orden público» y el «estado de sitio» en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena mediante la expedición del decreto legislativo 1 de 1918. Sobre esto se preguntaba el periódico *El Tiempo*

«¿Pero se trata verdaderamente de huelgas en los sucesos de Cartagena y Santa Marta? Una huelga es la suspensión del trabajo, como respuesta de los obreros a los patronos en caso de graves desacuerdos, pero en aquellas ciudades lo que ha habido es motines violentísimos, ataques a la propiedad cometidos desde el primer momento. En las grandes huelgas de los países civilizados, se suelen presentar violencias a la larga, por choques que son efectos de la duración del conflicto, pero en la costa la declaratoria de huelga y la apelación a la violencia irrazonada han sido cosas simultáneas. Hay en ello algo que no puede tolerarse, que ninguna relación tiene con el derecho de huelga, que es pura zambra demagógica sin objeto y sin justificación posible, y es preciso extirpar estos gérmenes de torpe anarquía antes de que lleguen a ser un peligro para la nación».¹

Los distintos ámbitos de formación de la clase obrera estuvieron asociados al sector de obras públicas, el cual tuvo durante los años veinte un período de auge con la construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos, edificios públicos muelles. Asimismo, los enclaves fueron otro escenario de donde se conformó la clase obrera desde las primeras décadas del siglo xx. Un último espacio se materializó por medio del desarrollo industrial de

1. *El Tiempo* 12/01/1918.

donde surgirían los trabajadores fabriles (Vega Cantor 2002, pág. 130). Muy importante señalar que

«los trabajadores portuarios de todo el mundo, de quienes dependía el buen funcionamiento del engranaje y del comercio y por tanto de la vida económica de extensas zonas, aprendieron a sacar de este hecho poder de negociación frente a los patrones y los gobiernos (...). En los puertos se fue acumulando una experiencia cultural en torno de los conflictos. El mismo mundo económico en que se movían permitió a los trabajadores representarse el trabajo como una simple relación económica. Los trabajadores portuarios fueron aprendiendo a sincronizar sus protestas con ciclos de la economía internacional y nacional, con la oferta laboral, con el movimiento de carga y con las ganancias de las empresas que estaban a la vista por la intensidad del movimiento de trenes, vapores, el volumen de la carga y los precios internacionales. Y sobre todo, sabían que estaban ubicados en sitios estratégicos por el buen desarrollo de las economías nacionales e internacionales. Por eso desarrollaron un gran negocio para desafiar a empresarios y a los gobiernos de muchas partes del mundo» (Solano De Las Aguas 2001, pág. 23).

Diversas formas de protesta social estuvieron asociadas a la escala de valores que los obreros otorgaban a sus actividades. Es decir, que de acuerdo con sus oficios, se generaron diversas disputas en torno a la defensa de tradiciones, defensa de su independencia frente a los controles sociales y laborales, etcétera (íbidem, pág. 11). Ello quiere decir que no toda forma de protesta estaba ligada exclusivamente a asuntos económicos.

Durante los primeros años de la industrialización del país, los empresarios nacionales y extranjeros combinaron prácticas paternalistas y despóticas como la utilización de la mano de obra con el propósito de extraer la máxima ganancia en el corto plazo sino que acudieron también a formas de explotación propias de las fases primitivas del capitalismo: «de esta combinación de prácticas laborales coloniales y del temprano capitalismo europeo, surgieron las relaciones sociales que caracterizaron las primeras fases de industrialización colombiana» (Archila 1991, pág. 130). En este orden de ideas, el abrupto descenso de los salarios nominales, las extenuantes jornadas de trabajo, el pago por vales, la ausencia de seguridad social, las pésimas condiciones de higiene, los despidos sin causa justa, los castigos físicos y multas, el acoso sexual a mujeres trabajadoras, se dieron acompañado por una gran ausencia de conquistas laborales ya obtenidas en Europa,

«Era muy cómodo tener a menores de 15 años trabajando en fábricas de Bogotá y Medellín mientras las élites se oponían a la reducción de la jornada, laborar argumentando que ello propiciaría más tiempo libre para los vicios y el ocio. Asimismo, los empresarios se opusieron al establecimiento de un salario mínimo (esto solo se dio a partir de los años cincuenta) y el argumento esa vez era que muchas veces el trabajador por ganar más, se dirige a los lugares más malsanos» (Archila 1991, págs. 131-132).

Por su parte, el Estado colombiano pese a que había reconocido desde 1931 el derecho de asociación sindical, miraba con sospecha a los trabajadores y a los sindicalistas del país, al punto que con el apoyo de la Iglesia se propiciaron *campañas moralizadoras* para reorientar a esas *almas perdidas* por las *malas influencias foráneas*. De igual manera, a partir de la reducción de la jornada laboral a ocho horas, reglamentada a través del decreto 895 (26 de abril de 1934) *el buen uso* del tiempo libre de los obreros se planteó como una preocupación común a los empresarios, el gobierno y el clero pues se trataba de evitar a toda costa que las *ideas revolucionarias* del sindicalismo socialista tuvieran influencia sobre los trabajadores, ante lo cual se precisaba ejercer un control social sobre estos sectores. La creación de barrios obreros, justo apuntaba a tener cerca de las fábricas a los trabajadores para seguir sus pasos, luego de las jornadas laborales.

Mientras para las mujeres obreras el final de su jornada era el comienzo del trabajo extra, a su vez para los asalariados varones un buen momento para la diversión, para el Estado el tiempo libre era «cuando se fraguaban las rebeliones» y para la Iglesia Católica, tiempo en el que «la inmoralidad amenazaba» (ibídem, pág. 167). Durante este período, las reivindicaciones sindicales fueron lideradas por conocidos obreros como María Cano o Ignacio Torres Giraldo, quien fundaría en 1926 el Partido Socialista Revolucionario, el cual dos años después, se adheriría a la Internacional Comunista. Ese mismo año, Torres Giraldo constituyó la sección colombiana de la Liga Mundial antiimperialista con el apoyo del líder estudiantil cubano Julio Antonio Mella y del marinero boliviano José González Arce. El hecho de sobresalir por su reconocido activismo político tuvo como consecuencia una persecución implacable del Estado contra estos los líderes e incluso la expatriación de Torres Giraldo a Rusia.

Como lo reseña Vega Cantor,

«las expectativas generadas por la implantación de fábricas en las ciudades, de los enclaves, de las obras públicas, atrajeron a miles de campesinos que empezaron a cuestionar el régimen

de trabajo en las haciendas y, poco después, la misma propiedad de la tierra. Esto originó importantes conflictos agrarios, en los cuales los campesinos, colonos y arrendatarios tomaron la iniciativa durante las décadas de 1920 y 1930. En las ciudades afloraron otro tipo de conflictos como resultado del aumento de población, la cual empezó a exigir servicios públicos, construcción de obras de beneficio social, viviendas adecuadas y rechazó en algunos casos el régimen fiscal impuesto por un Estado capitalista en vía de consolidación» (Vega Cantor 2002, pág. 25).

Las protestas de los trabajadores fueron reprimidas por el Estado, y dado que no existía protección suficiente a través de leyes laborales, los empresarios se complacían de dividir al joven movimiento obrero. Las movilizaciones sociales de comienzos del siglo tuvieron un carácter nacionalista y antiimperialista, por el impacto que tuvo en el país la separación de Panamá. También en otros países latinoamericanos sobresalieron las luchas nacionalistas de líderes como Francisco Villa, Emiliano Zapata en México, Augusto Sandino en Nicaragua (llamado *el general de hombres libres*) o Farabundo Martí en El Salvador.

Durante 1920 hubo treinta y dos huelgas a lo largo del territorio nacional, hechos que pusieron en evidencia la aparición de la clase obrera, la cual alcanzaba cerca del 5 % de la población y se ocupaba de actividades tan importantes como la construcción de vías de comunicación, la industria manufacturera, las industrias extractivas y una agricultura moderna (Archila 1989, pág. 220). Paralelamente, las luchas campesinas también pusieron en jaque al establecimiento.

El Estado colombiano buscaba ante todo, manejar sus relaciones internacionales con el propósito de favorecer sus intereses económicos, sin importar el precio en términos de pérdida de soberanía, como se corrobora al observar el inmenso poder que fueron adquiriendo los inversores internacionales en nuestros asuntos internos. Un buen ejemplo de la laxitud del Estado ante el gran capital fue la huelga obrera de la Tropical Oil Co en 1924, en reclamo por mejores salarios. Los trabajadores no solo fueron reprimidos sino que el gobierno autorizó el despido de 1.200 de estos. Luego en 1925, ante otra huelga en la misma compañía en la cual se paralizó el trabajo de 5.000 trabajadores, el gobierno nuevamente respaldó a la Tropical y lejos de concertar, la policía disparó contra los huelguistas, episodio en el cual murieron dos de ellos. Seguidamente se declaró el estado de sitio y se encarceló a los huelguistas (Melo 1989, págs. 96-97).

Asimismo, la obtención de precios favorables para el café, la ampliación del comercio exterior, la búsqueda de préstamos para modernizar al país y la apertura hacia la cooperación técnica fueron objetivos que pasaron

a dominar la agenda de las relaciones internacionales de Colombia *para no detener su paso al tren del progreso*. En ese contexto, el café adquirió un significado especial al convertirse en *la clave de la política exterior*. Según Escobar (1996), la lucha contra la pobreza en nuestro continente – de la cual, el gobierno de los Estados Unidos se proclamaba abanderado – hizo posible «el establecimiento de nuevos mecanismos de control» pues los pobres surgieron como «un problema social que requería nuevas formas de intervención social en educación, salud, higiene, moralidad, empleo, enseñanza de buenos hábitos de asociación, ahorro, crianza de los hijos». Inspirados en estos principios, llegarían al país diversas comisiones internacionales, como la Misión Kemmerer, la Misión Currie, entre otras. Para las elites gobernantes la modernización capitalista llegaría con la inversión extranjera y particularmente la estadounidense.

Un grupo de intelectuales formó en 1924, bajo la orientación ideológica de Vicente Savinsky, un ruso emigrante a Colombia, un círculo de estudios marxistas autodenominado Partido Comunista. Este grupo «no trascendió la experiencia intelectual y la mayoría de sus componentes hizo luego brillante carrera dentro de las toldas del Partido Liberal, como fue el caso de Gabriel Turbay» (Tirado Mejía 1991, pág. 135). Según Mauricio Archila, por estos años la clase obrera colombiana rechazaba el *statu quo*, y su espíritu rebelde – en un país católico – la condujo a rechazar dogmas en búsqueda de un cristianismo puro hasta convertirlos en anticlericales, influenciados tanto de ideas liberales como de la masonería. No obstante, continuaban manejando un lenguaje religioso pues «a la actividad política se la llamaba *apostolado*, al líder obrero *mártir*, a la solidaridad *hostia común*, y se escribieran *catecismos socialistas*». Asimismo, la clase obrera «cantó primero la Marsellesa que la Internacional» pues bebió primero de la ilustración que del socialismo (Archila 1991, pág. 225).

En este período se fueron elaborando diversos «mecanismos de control» para *contener* los vientos de cambio venidos del exterior. Sobresalen la vigilancia policial (financiada por la Tropical Oil Company) y los sermones de la Iglesia para alejar a *los indeseables*. Como lo reseña el informe de la autoridad de Santander en 1925: «En los días 14 y 15 se tomaron las medidas necesarias para que regresaran a sus campamentos los trabajadores que no figuraban en *la lista negra* que el señor gerente de la Tropical y yo estábamos encargados de formar, a fin de proceder a despedir de la empresa a los obreros considerados como peligrosos» (Vega Cantor 2002, pág. 255). A su vez, la Iglesia Católica colombiana utilizaba todo tipo de estrategias para combatir la influencia comunista y socialista entre los trabajadores para lo cual impulsó la creación de sindicatos y sociedades de auxilio mutuo. Esto explica que desde comienzos de los años treinta, la Acción Social Católica emprendió la tarea «de reorganizar y centralizar bajo una dirección única

aquella diversidad de sociedades, con frecuencia mal instituidas y aisladas entre sí» (Mayor Mora 1979, pág. 37).

Con frecuencia la tarea de neutralizar la protesta obrera terminaba en medidas de hecho. Ejemplo de violencia estatal contra la protesta social fue el asesinato de siete manifestantes y dieciocho heridos en la plaza de Bolívar de Bogotá (16 de marzo de 1919) quienes gritaban «Viva el bolchevismo, viva la revolución, el pueblo tiene hambre» haciendo alusión a la revolución Bolchevique. Como lo describe James Henderson, el asunto tuvo como origen la protesta obrera en contra de la medida, aprobada por el presidente Marco Fidel Suárez de importar telas para la producción de uniformes para el Ejército colombiano durante la conmemoración de los cien años de la independencia, lo cual desató la oleada de protesta de los artesanos de la capital, al mando del presidente del Sindicato Central Obrero, Alberto Manrique Páramo quien además terminó discutiendo con el presidente porque los obreros no percibieron que sus peticiones fueran escuchadas. Ante la retirada del mandatario al palacio presidencial, los obreros lanzaron piedras y la guardia presidencial abrió fuego contra los manifestantes. Lo anterior se explica si tenemos en cuenta que para el gobierno, esa manifestación representaba el inicio de una eventual «toma comunista en Colombia», evento del cual ya había alertado el ministro de Gobierno a todos los gobernadores del país. Las consignas de «¡Viva el socialismo! ¡Con Suárez no!» «daban la impresión de que se trataba de peligrosos subversivos» (Vega Cantor 2001; Henderson 2006). Una década después, se decretaría la prohibición del derecho a la huelga y a los sindicatos, bajo el gobierno de conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930). Su ministro de Guerra, Ignacio Rengifo consideraba a las huelgas:

«Aquellas manifestaciones colectivas casi siempre bullangueras, rayanas en asonadas, en tumulto y aun en sedición, de los trabajadores y obreros (...) con el fin o con el pretexto de hacer exigencias o de imponer condiciones a los patronos de las empresas públicas o particulares (...) en la mayor parte de los casos no pueden llamarse huelgas ni ser consideradas como tales en la aceptación legal de ese vocablo, sino como verdaderos movimientos o actitudes subversivas y de carácter revolucionario» (Torres Del Río 2010, pág. 79).

Según Eduardo Posada Carbó,

«el crecimiento económico estuvo acompañado de expresiones de malestar social, seriamente manifiestas a fines de la década de 1920. Por supuesto que los problemas se exacerbaron tras

la depresión de 1929. Los conflictos más agudos tuvieron lugar en las zonas de explotación petrolera y bananera, donde las protestas sociales tomaron ocasionalmente tonos antiimperialistas, y en algunas regiones agrarias del centro del país. Los resultados de la famosa huelga contra la United Fruit Company, que desembocó en los trágicos eventos del 6 de diciembre de 1928, sirvieron para minar aún más la autoridad del gobierno de Abadía. La oposición cobró nuevos bríos. En particular, jóvenes figuras del liberalismo estuvieron al frente de los ataques: el 3 de septiembre de 1929, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán iniciaban sus acusaciones en el Congreso contra el régimen. Tres meses después, una comisión de la Cámara de Representantes, liderada por Gaitán, acusaba al presidente Abadía de ser constitucionalmente responsable de la matanza de las bananeras» (Posada Carbo 2007, págs. 5-7).

La «Masacre de las Bananeras» de 1928 ilustra otro caso de violencia oficial contra la protesta. Como lo anotase Leegrand (1986), la United Fruit en Colombia, logró con la complicidad del establecimiento erigir un «Estado dentro del Estado» en el que prácticamente las leyes eran impuestas por esta compañía estadounidense y los campesinos que laboraban para ella vivían en condiciones inhumanas sin servicio de salud ni derecho a un trato digno, es decir que la compañía frutera propiciaba, con la indolencia del Estado, una violencia social sobre sus trabajadores. Todo lo anterior, en un escenario en el cual la dependencia económica y la sumisión política se asociaban a un sentimiento que pretendía justificar la dominación de los estadounidenses, basado en sus *virtudes en contraste a nuestros defectos*. O mejor, por medio de una comparación «etnocentrista se exaltaba la grandeza de los estadounidenses y la bajeza» de los habitantes del puerto petrolero de Barrancabermeja. Como lo anota Vega Cantor, «en una forma maniquea se resaltaba todo *lo bueno* estaba del lado de los estadounidenses de la Tropical Oil Company: orden, disciplina, aseo, moralidad, ausencia de enfermedades; mientras que todo *lo malo* caracterizaba a los obreros: desorden, indisciplina, desaseo, enfermedades contagiosas e inmoralidad» (Vega Cantor 2002, pág. 255). A la par con la persecución al incipiente movimiento sindicalista, el Estado colombiano lideró una batalla chovinista y sin cuartel contra los líderes extranjeros que alimentaban el sentimiento revolucionario de la época. Es así como, en febrero de 1924 fue expulsado del país el peruano Nicolás Gutarra acusado de anarquista, sobresaliente dirigente de la Liga de Inquilinos de Barranquilla. En 1925 el gobierno colombiano expulsó al inmigrante ruso Silvestre Savinsky, propietario de una lavandería en Bogotá en donde tertuliaban simpatizantes de ideas socialistas. Asimismo en ese año se expulsó al bacteriólogo alemán Rodolfo

Von Wedel. En 1927 también expulsaron del país al dirigente italiano Vicente Adamo y al griego Evangelista Priftis por participar en la Sociedad de Obreros Libres. Se destacan finalmente los procesos contra los españoles Mariano Lacambra, Elías Castellanos y el italiano Genaro Turino, todos acusados de anarquistas (Archila 1991, págs. 236-237).

Según la prensa de la oposición, la administración de Abadía Méndez creó el fantasma de una «revolución imaginaria» de «rojos» con el propósito de tomar medidas de represión:

«El activismo de los socialistas era, no obstante, evidente. Como eran también evidentes las simpatías revolucionarias de significativos sectores del liberalismo, especialmente entre veteranos de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). En efecto, socialistas y liberales revolucionarios se habían reunido en Chocontá a mediados de 1928, para acordar los planes de una insurrección que debería llevarse a cabo conjuntamente con las fuerzas opositoras al régimen dictatorial de Gómez en Venezuela. La insurrección generalizada no tuvo lugar, pero a mediados de 1929 hubo levantamientos aislados en el Tolima, el Valle y Santander» (Posada Carbó 2007, pág. 207).

También el movimiento estudiantil fue objeto de presiones y persecuciones. Desde 1924 se había fundado la Federación de Estudiantes de Colombia (FEC) protagonista de la primera manifestación estudiantil de impacto nacional, ocurrida el 8 de junio de 1929 en la cual cayó asesinado el estudiante de derecho Gonzalo Bravo Pérez. El origen de la protesta, fue la reacción contra el nombramiento como jefe de la policía en Bogotá, de un oscuro militar, señalado como protagonista de la «Masacre de las Bananeras», ocurrida en diciembre de 1928 en el departamento del Magdalena. Aunque se destituyese al recién normado funcionario, al mismo tiempo, la manifestación fue reprimida con el asesinato del estudiante Luis Augusto Cuervo, quien sería después considerado como el «primer mártir estudiantil» (Liévano 1972). Asimismo, en 1929 (Tolima) se gestaría la famosa insurrección de los bolcheviques del Líbano (de inspiración marxista) movimiento armado fruto de la alianza entre trabajadores urbanos y rurales que se propuso la toma de varias poblaciones importantes del país, sus guarniciones militares, puertos, interrupción de comunicaciones y control de entes gubernamentales, la cual fracasó fruto de la acción policial y militar así como errores en su coordinación (Torres Del Río 2010, pág. 84).

Existían prevenciones entre las elites de que los desempleados eran susceptibles a la oratoria de los agitadores profesionales. Por tanto,

«el dilema fue entre aguantar entre la presencia de los desempleados y sus familias hambrientas en las ciudades o convencerlas que retornaran al campo... El tema de las doctrinas subversivas y los agitadores o comunistas corrompiendo a unos campesinos (más o menos inocentes) se estableció como factor permanente en el repertorio del discurso de las elites. Al menos el problema del desempleo – como efecto de la gran crisis económica – hizo que ya no se pudiera seguir con el sofisma de que en Colombia no existiera el problema social igual a los otros países» (Cronshaw 1996, pág. 207).

Lo paradójico del tema es que los desempleados eran discriminados por su condición *de ociosos*, al punto que *se legisló contra la vagancia*, como se ilustra a continuación:

«El Congreso de Colombia decreta lo siguiente:

»Artículo 4. Serán relegados a colonias penales los declarados vagos por la policía.

»Artículo 5: Se entiende por vago para los fines de esta ley a quien no posee bienes o rentas o no ejerce profesión, arte u oficio, ocupación lícita, o algún medio conocido de subsistencia... y que habiendo sido requerido por la autoridad competente hasta dos veces, en el curso de un semestre, no cambie sus hábitos viciosos (...).

»Artículo 13: A cada relegado se le señalará para su cultivo una hectárea de tierra y si tuviese familia que mantener hasta dos (...).

»Artículo 19: Los relegados serán filiados, tomando su ficha antropométrica y su retrato, y la lista de ello se tendrá en las capitales de todos los departamentos».²

Por otra parte, el 18 de mayo de 1927, catorce mil mujeres indígenas de Tolima, Huila y Cauca en Colombia

«suscribieron el manifiesto titulado “El derecho a la mujer indígena”. En dicha declaración al mismo tiempo que impugnaban la ley y justicia oligárquicas a través de las cuales se les despojó de sus tierras se declararon en rebeldía. Aún cuando el ministro de Guerra colombiano dicte miles de decretos y

2. Ley 105 de 1922, *Diario Oficial*, 23 de diciembre de 1922, pág. 601 (citado en Vega Cantor 2002, pág. 135).

el Congreso leyes las pobres infelices marcharemos al combate de nuestra reivindicación. La calumnia, la amenaza, el engaño, la promesa, para nosotras es una letra muerta y de valor ninguno. Así debe ser para todas las señoritas del país, de nuestra clase baja, quienes somos perseguidos por los hombres de civilización... Hoy las mujeres con nuestro valor y energía gritaremos amparo y justicia, como siempre lo hemos hecho, porque ya perdimos nuestros clamores y nuestro derecho, pero menos nuestra fe. Esa fe nos asiste a nosotras, pobres labriegas que al sol y al agua, haciéndole frente al hambre y a la sed le ayudamos a los hombres indígenas en nuestro carácter de esposas, hermanas, hijas y madres, a cultivar nuestras fincas, las que hoy, sin darnos un centavo, pasaron a manos de los burgueses, porque las autoridades, burlando su ministerio, violaron los derechos e intereses de la justicia (...), y si no se nos atiende hundiremos en el vientre de aquellos el cuchillo de nuestra guisandería, porque si esto pasa así, ahí tenemos potestad para cometer injusticias...» (Manuel Quintín Lame, citado en Melgar 1988, pág. 228).

La Iglesia Católica se sumaba a la campaña para perseguir y desprestigiar al sindicalismo no oficialista colombiano. Ello se ilustra en los documentos de la Pastoral colombiana, organismo que editó en 1936 un documento en el cual rechazaban a los sindicatos revolucionarios del país, incluso advirtiéndole a los fieles que al católico no le era permitido pertenecer a los sindicatos comunistas, los cuales a su juicio, envenenaban «el alma del trabajador, amenazan la tranquilidad pública y complican los problemas sociales en lugar de resolverlos» al tiempo que recomiendan inculcar en los obreros «la verdadera conciencia de su dignidad» ejerciendo cristianamente «el derecho de asociarse para su mejoramiento religioso, moral, intelectual y económico» (*Pastoral Colectiva*, citado en Oviedo 2009, págs. 64-65). Un lugar muy destacado en la defensa de los principios de la Iglesia colombiana y del capitalismo, lo jugó la Acción Social Católica, instancia que hizo posible la organización de centros obreros y sindicatos en el país que les fueran funcionales a sus intereses. Para la prensa liberal de la época, la Acción Católica se proponía «contrarrestar la influencia radical en las organizaciones obreras, llegando incluso a incitar a los empresarios para que expulsaran a trabajadores liberales o socialistas» (Archila 1991, pág. 214).

Para cumplir sus metas, la Acción Católica recogía el sentimiento de los trabajadores y mediaba ante los empresarios a favor de los obreros *pues era mejor negocio que dejarlos a merced de los sindicatos comunistas*. Esta tuvo su máxima influencia en Antioquia. Para ello se dedicó a liderar la

defensa de los problemas sociales de los obreros y así evitar que estos proyectaran en su tiempo libre «preocupaciones e intereses políticos, frustraciones o vicios, buscando más bien que desarrollara en él virtudes y costumbres cristianas» (Mayor Mora 1979, pág. 36). Las consignas de los centros católicos tomaban prestadas frases y el estilo de sus adversarios políticos, como lo destaca el periódico *El Obrero Católico* (16 de julio de 1932):

«OBREROS Y CAMPESINOS: Nuestra consigna es Jesucristo. Organizaos en nuestras asociaciones católicas. Allí encontrareis tutelados vuestros derechos. Allí formaréis vuestra conciencia de hombres dignos. Allí hallareis vuestro mejoramiento económico. Allí estaréis en la paz de Dios. Allí seréis la legión innumerable e invencible que lucha contra el adversario que defrauda. Ingresad en la federación de obreros católicos. Proletarios de Colombia: uníos en dios» (ibídem, pág. 41, el énfasis es de los autores).

La crisis económica de fines de los años veinte se materializaba en problemas fiscales para los departamentos y parálisis de transacciones privadas. En Bogotá, la terminación de grandes obras y edificios ocasionó el desempleo repentino de muchos obreros. En enero de 1930, se despidió el 80 % de los obreros que trabajaban en las obras de construcción, ante lo cual buscaron oportunidades laborales en las ciudades. Ya en abril andaban unos ocho mil desempleados por las calles de Barranquilla. De acuerdo con la Cámara de Representantes, hubo 50.000 obreros desempleados en 1931 (*El Nuevo Tiempo*, citado en Cronshaw 1996, págs. 206-207). Igualmente, la depresión económica de 1929 debilitó la fuerza del movimiento de los trabajadores de la industria en las regiones petrolíferas y bananeras de propiedad extranjera. O lo que es lo mismo, «la disminución de la demanda de mano de obra que acompañó a la crisis mundial dejó a las organizaciones militantes de estos trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad» (Berquist 1989, pág. 301).

Sobre la influencia de la Revolución Mexicana en el continente, esta produjo un gran impacto por sus consignas agraristas y de reivindicación nacional. Como primera medida, por el modelo inspirado en reformas agrarias y después por la nacionalización del petróleo, concitando grandes expectativas en el hemisferio y una ola de solidaridad y de sentimientos revolucionarios en vastos sectores populares. Al calor de la Revolución se fundaron organizaciones de pretensión continental, en cuyo programa inicial aparecía muy claramente la huella del imaginario mexicano de justicia, libertad e igualdad (Maldonado Gallardo; Guerra Vilaboy y González Arana 2006, págs. 419-438).

Parte de la cultura política de los trabajadores estaba asociada a su nivel de educación. Por tanto, un objetivo fundamental de la prensa obrera era promover y facilitar el acceso de los trabajadores

«a la razón, a la ciencia y al progreso. La tarea educativa era, por tanto, una tarea liberadora para los primeros núcleos obreros. Como se desprende de lo anterior, la educación era concebida como instrucción política, aunque también se hacían llamados a la superación del analfabetismo y al acceso del saber común de la sociedad. La ausencia de la educación política era concebida como una gran traba para la consecución de la libertad» (Archila 1989, pág. 228).

A las consecuencias de una mala educación se referiría el presidente liberal Alfonso López Pumarejo en conferencia ante el Congreso colombiano al manifestar que

«casi todas las empresas industriales o agrícolas del país están montadas sobre la base de una gran cantidad de analfabetos, brazos baratos, actividad física productiva y poco exigente. Puede ser una teoría monstruosa, pero es, ante todo, inexacta. Las reducidas proporciones del sistema económico colombiano no tienen otra causa que la miseria de los mercados, a los cuales se les resta la mayor parte de la población, tan pobre como poco ambiciosa y resignada a una vida vegetativa y oscura. Privado de medios de comunicación con un mundo menos bárbaro que la naturaleza rural que lo rodea, si saber leer ni escribir, el campesino no aspira a mejorar su vida ni aun dentro de los mismos recursos que tiene a su alcance. Recibirá malos jornales, pero el productor agrícola, que se siente beneficiado con ello, parece ignorar que sus artículos tendrían más amplio comercio y más perspectivas de ensanche su plantación, si a esos millones de asalariados les hubiera enseñado la escuela nutrirse suficientemente, los hubiera prevenido la educación contra la enfermedad, los hubiera tornado ambiciosos trabajadores y consumidores más activos» (López Pumarejo, citado en Alarcón 2010, pág. 299).

Con la llegada del liberalismo al poder en 1930 se generaron inmensas expectativas en el movimiento obrero colombiano, luego de décadas de hegemonía conservadora. La política del liberalismo era ganarse para sí a todo el movimiento sindical, motivo por el cual facilitaron escenarios para una mayor libertad a la movilización social. O como bien lo anota Tirado Mejía (1991),

«los gobiernos liberales, especialmente los de López Pumarejo, trataron de ganarse el respaldo sindical y de constituir a las centrales obreras en uno de los pilares de apoyo del gobierno.

Esto era un cambio de estilo respecto a los gobiernos conservadores. La iniciativa de creación de sindicatos en muchos casos partió de funcionarios estatales, y el tratamiento que se les dio a las huelgas fue de intervencionismo estatal, pero no de un carácter policivo, sino como mediador (...). Dentro de su función modernizante y captadora, el gobierno de López apoyó al movimiento sindical por razones económicas y políticas» (Tirado Mejía 1991, pág. 149).

La llamada ley de Tierras de López Pumarejo por ejemplo, fue una concesión táctica hacia el movimiento agrario gestada con el propósito de aplacar el ímpetu de sus luchas. Pero ya luego, en la medida que el Estado fue cooptando al movimiento laboral y sumándolo a las filas del liberalismo, «estas políticas reformistas fueron reemplazadas por otras de signo contrario» (Berquist 1989, pág. 301).

Los círculos que históricamente detentaron el poder en el país se percibían en gran riesgo si permitían el fortalecimiento del movimiento sindical pues en este escenario

«la revolución antisocial que se preconiza por todas las tendencias de la izquierda, no es peligro que amenace única y exclusivamente a los propietarios rurales y empresarios agrícolas. No. Peligro es ese que amenaza por igual de modo inminente al propietario rural que al urbano, al banquero que al comerciante, al empresario de fábrica que al inversionista y rentado, ya que el espíritu revolucionario creado entre nuestras enantes honradas y laboriosas masas populares, se encamina directamente a la destrucción de la propiedad. Y esto no como fin, sino como medio de destruir la familia, de cambiar el orden social por el caos antisocial, de suplantarse la normalidad jurídica por la anormalidad engendrada por el despojo y la violencia, de substituir nuestra organización cristiana, civilizada y libre por, por otra atea, bárbara y subordinada espiritual, política y económicamente al sovietismo ruso, cuyas ideas y prácticas de fondo hermanan, unifican y estrechan a todas las tendencias disociadoras que proclaman entre nosotros la revolución izquierdista» (*La Defensa Social*, Bogotá, 1924, citado en Cronshaw 1996, págs. 208-209).

Es pertinente reiterar que tanto el Partido Liberal como el conservadurismo han tenido la habilidad de *cooptar* al sindicalismo y unirlo a sus filas al punto que algunos analistas les llamaron peyorativamente partidos

«cogelo todo».³ Como lo anota Posada Carbó (2007) «en las ciudades y en los puertos, donde se desarrollaban con algún ímpetu la industria y el comercio, así como en los sitios de gran concentración de trabajadores – en los campos petroleros y en la zona bananera del Magdalena – este electorado fue cortejado con algún éxito inicial por los socialistas, aunque en últimas sus simpatías políticas estuviesen mayoritariamente con el Liberalismo» (ibídem, pág. 5). Históricamente en Colombia, el Partido Liberal ha tenido la habilidad para atraer a sus filas a muy diversos sectores que en muy distintos períodos se han considerado de oposición al establecimiento. Es así como por ejemplo, durante los años treinta, integró a sus filas a un amplio grupo de ex militantes del partido socialista, justo al momento en que esta agrupación se transformó en el Partido Comunista Colombiano. En otras palabras, el Partido Liberal, incluso desde los años treinta «absorbió a los nacientes movimientos socialistas, subordinó al sindicalismo incipiente y asumió muchas banderas que en otros países llenaron los movimientos populistas» (Pizarro 2005, pág. 102). Por esta misma época, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán creó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) movimiento de muy efímera duración en los tiempos en los que las lealtades partidistas eran muy arraigadas y por tanto, para no distanciarse del pueblo, Gaitán optó por retornar al seno del liberalismo. El investigador Hoskin (1991) decía al respecto que por esa época en Colombia se nacía con el rótulo partidista *pegado al cordón umbilical*.

Ante el asesinato de Gaitán en abril de 1948, la Iglesia colombiana absolvería a los amigos del régimen conservador de Mariano Ospina Pérez, así incurrieran en prácticas violentas para defenderlo, ante los sucesos del Bogotazo. Así lo relata el Beaulauc, embajador de los Estados Unidos en Colombia en un Informe Confidencial al secretario interino de Estado Lovett, en un comunicado del 11 de abril de 1948: «El párroco de Santa Ana, en Teusaquillo, dijo en un sermón que era justo o correcto portar armas y disparar contra cualquier persona que esté saqueando o produciendo incendios». A lo cual añadía, «Si ustedes matan a un saqueador no vengan a confesarse conmigo. No es pecado» (VVAA 1948, pág. 39). Incluso en tiempos del gobierno de Laureano Gómez (1950-1953) el ministro de Educación de la época dirigió una circular a los directores departamentales de educación referida a la necesaria *cristianización de la enseñanza oficial*. Parte de esta cruzada consistió en el despido de las escuelas de maestros y directores de colegios pertenecientes al Partido Liberal.

Puede afirmarse entonces que durante la primera mitad del siglo xx, Colombia estuvo sumida entre tradición y modernidad, en tanto el fuerte

3. Gary Hoskin habla de «una tradición de cooptación y compromiso de las élites como mecanismo para mantener el sistema» (Hoskin 1991, pág. 146).

poder de la Iglesia se opuso a los intentos de cambio que pretendieron generar los gobiernos liberales que dirigieron el país a partir de 1930 y hasta 1946 (Alarcón 2010, pág. 298). Y estos cambios suponían mayores derechos para la clase trabajadora y mejores condiciones de vida, luego de décadas de movilización social.

Posteriormente, a comienzos de los años sesenta, cuando ya se temía de la influencia de la Revolución Cubana sobre el país, también encontramos evidencias del activismo político de la Iglesia colombiana a instancias del Frente Nacional. Por ejemplo, la Pastoral Arquidiocesana de Pamplona emitió un comunicado (refiriéndose a la contienda electoral de ese año) en la cual declaraba que quienes ayudasen al comunismo incurrirían en grave pecado, explicando:

«Los que profesan la doctrina materialista y anticristiana de los comunistas, y en primer lugar los que la propagan, incurren por ese mismo hecho como apóstatas de la fe católica en excomunión reservada a la santa Sede Apostólica. No es lícito afiliarse al Partido Comunista o apoyarlo porque el comunismo es materialista y anticristiano (...). Tampoco es lícito para los católicos dar sus votos en la elección de representantes populares a los partidos o candidatos que, sin profesar principios contrarios a los de la doctrina católica o atribuyéndose abiertamente la condición de cristianos, proceden no obstante de hecho unidos con los comunistas, o actúan en su favor...».⁴

Consideraciones finales

Como se puede apreciar, las luchas y protestas obreras durante la primera mitad del siglo xx en Colombia no fueron un fenómeno aislado del contexto internacional, lo cual no significa que obedecieran exclusivamente a influencias foráneas, que eran sino consecuencia de un capitalismo voraz que en aras de modernizar, no tuvo reparo en explotar al máximo a la joven clase trabajadora, aprovechando la inexistencia de normas laborales avanzadas que velaran por ellos. Asimismo, utilizando la represión y la estigmatización a la protesta fue posible que el Estado, en asociación con la Iglesia intentará neutralizar el auge de los sindicatos y el fortalecimiento del movimiento social urbano. El país fue laxo con el gran capital que llegó a modernizar y a imponer un orden en el cual no se respetaron los derechos de los obreros y más bien se estigmatizó su lucha asociándola con los movimientos anarquistas, bolcheviques o comunistas que tuvieron influencia en el país.

4. *El Tiempo* 10/02/1962.

Actores transnacionales clandestinos en escenarios de conflicto: el caso de las FARC-EP en Colombia

Luis Trejos Rosero y Eliana Sanandrés Campis

.....

Introducción

Las tipologías tradicionales aplicadas a los conflictos armados desarrollan diversas categorías que pueden aplicarse al caso colombiano. La primera de ellas lo define como un conflicto *interno* que se origina en los factores domésticos, donde la violencia armada se desarrolla al interior de los límites de un solo Estado (Brown 1996 citado en Trejos 2013). Una segunda categoría clasifica los conflictos como *convencionales y no convencionales*, de acuerdo con la cual, según Trejos (ibídem), el caso colombiano responde a un conflicto armado no convencional en el que la insurgencia utiliza la guerra de guerrillas como principal táctica operativa, sin grandes batallas a campo abierto en las que participen divisiones de artillería o mecanizadas.

Una tercera y cuarta categoría que pueden aplicarse al caso colombiano son las de conflicto *asimétrico* y conflicto de *baja intensidad*. El conflicto *asimétrico* es aquel en el que no existe una base común de comparación entre los contendientes con respecto a su calidad o capacidad de acción (Garay y Pérez 2007, pág. 12). Por su parte, el conflicto de *baja intensidad*, en palabras de Von der Heydte (1987) citado por Trejos (2013), es aquel en el que existe una «guerra irregular, la cual es, por definición, una guerra en la que se busca desgastar al adversario y fatigarlo, minarle su voluntad de defenderse, doblegarlo psicológicamente; es una guerra de gran duración y de baja intensidad militar. Al final, sobrevivirá la parte que pueda aguantar más tiempo la respiración» (ibídem, pág. 94).

El presente estudio se desarrolla desde una quinta categoría que señala el carácter *transnacional* del conflicto armado; esta se enmarca en el contexto de la globalización en el que las amenazas a la seguridad estatal y los actores involucrados adquieren una connotación transnacional. Desde esta perspectiva, el conflicto colombiano puede ser definido como un conflicto transnacional con la presencia activa de estructuras guerrilleras cuyo accionar va más allá de los límites del Estado.

Inicialmente se presenta una breve descripción de la participación de las FARC-EP en el conflicto armado colombiano y su situación actual. Luego se analiza la dimensión política de esta organización guerrillera a partir de una distinción entre las acciones de tipo militar-estratégico con proyecciones políticas y aquellas predatorias con fines económicos. Posteriormente se examina la dimensión delincencial de las FARC-EP, haciendo énfasis en el narcotráfico y el secuestro como mecanismos para obtener beneficios políticos y económicos. Finalmente se concluye que las FARC-EP encajan en el concepto de actores transnacionales clandestinos, concepto que se ha desarrollado dentro de los estudios de seguridad y defensa llevados a cabo en el nuevo escenario internacional, en el que la soberanía y la seguridad territorial no solo se ven afectadas por variables de tipo militar, sino también por la creciente porosidad de las fronteras en el marco de la globalización.

Las FARC-EP en el conflicto colombiano

En términos estratégicos, no es lo mismo enfrentarse a un actor no estatal con inserción política internacional que a un delincuente transnacional. Si bien en Colombia los actores involucrados en el conflicto practican acciones de tipo predatorio como el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, el desplazamiento y ejecuciones extrajudiciales generando los mismos efectos sobre la sociedad ligados a innumerables afectaciones sobre la vida y la propiedad (Trejos 2013), es necesario hacer una distinción entre las acciones de tipo militar-estratégico con proyecciones políticas y aquellas predatorias con fines económicos, ya sean personales o colectivos, que en últimas definen la naturaleza de cada actor.

Los grupos guerrilleros en Colombia nacen en el marco de la Guerra Fría (Revolución Cubana, Doctrina de la Seguridad Nacional, ruptura chino-soviética), específicamente en la época conocida como «la violencia» (1946-1957), que se inicia con la presidencia de Mariano Ospina Pérez en agosto de 1946¹ y finaliza con la instauración del Frente Nacional en 1957.

1. La época de «la violencia» en Colombia se inició antes del 9 de abril de 1948. Bushnell (2007) señala que esta comenzó inmediatamente después del cambio de administración en 1946 cuando inician los estallidos de violencia por parte de

Desde entonces, el conflicto se ha caracterizado por una rivalidad política partidista acompañada de la represión contra cualquier opción política alternativa (Offstein 2003), una tendencia histórica a utilizar la violencia para obtener objetivos políticos y la permanencia de las estructuras de exclusión o inclusión perversa, cuyas consecuencias han sido la exclusión social, la falta de opciones democráticas de oposición y una política al servicio de los intereses de la élite (Fisas 2013).

A partir de lo anterior, podría afirmarse que la guerra en Colombia tiene como columna central la disputa por la legitimidad política, es decir, la lucha por el derecho moral de gobernar a la sociedad. Bajo esta premisa surgen los distintos grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo [FARC-EP], el Ejército de Liberación Nacional [ELN], el Movimiento 19 de abril [M-19] (grupo desmovilizado en 1990), el Ejército Popular de Liberación [EPL], el Partido Revolucionario de los Trabajadores [PRT], el Movimiento Armado Quintín Lame [MAQL] (grupos desmovilizados en 1991), el Comando Ernesto Rojas [CER] (grupo desmovilizado en 1992), la Corriente de Renovación Socialista [CRS], las Milicias Populares de Medellín [MPM], el Frente Francisco Garnica [FFG] (grupos desmovilizados en 1994) y el Movimiento Independiente Revolucionario-Comandos Armados [MIR-COAR] (desmovilizado en 1998). En la actualidad, el conflicto armado mantiene como protagonistas a las FARC-EP y el ELN, cada uno con 10.000 y 3.000 efectivos, respectivamente (ibídem).

Desde su conformación, el funcionamiento de las FARC-EP y el ELN se legitima en el discurso ideológico que los constituye, ya sea para ir en contra del sistema socio-político o validarlo (Romero; Restrepo y Díaz 2009). Sin embargo, mientras el ELN plantea promover cambios sociales por un bien común dentro del actual sistema para generar igualdad económica y social en el país,² las FARC-EP tienen como objetivo conseguir cambios estructurales, especialmente en el tema agrario, y transformar el sistema actual por otro (Ferro y Uribe 2002). Objetivos que lo han convertido en el grupo guerrillero con mayor incidencia en el país.

A diferencia del ELN, existe en las FARC-EP una justificación de hacer uso de las armas como medio para hacer política; este argumento es retomado del marxismo-leninismo, particularmente de los planteamientos

conservadores que salían a cobrar las deudas y ofensas acumuladas durante el predominio liberal, y de liberales poco dispuestos a reconocer su derrota ante el Partido Conservador. Desde entonces, el país se vio atrapado en una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que duraría hasta comienzos de la década de 1960 (ibídem).

2. Lo cual muestra que para este grupo guerrillero el rechazo total por las formas políticas legales, planteadas en sus orígenes, ha quedado en el pasado como lo planteó Cubides (2004).

de Lenin, quien en *El Estado y la revolución* retoma la doctrina de Marx y Engels sobre el carácter inevitable de la revolución violenta y concuerda con el planteamiento de Torrijos (2004), en dirección a considerar que las acciones violentas que realizan la FARC-EP son un instrumento para alcanzar sus principales objetivos políticos: lograr una reforma agraria, una redistribución de la tierra entre las personas que la cultivan, al igual que créditos para estas y tomar el poder por las armas. Tales componentes han integrado el programa político que este grupo guerrillero ha adoptado desde su fundación en 1964.

El *Informe nacional sobre desarrollo humano para Colombia* (PNUD 2003) presenta de manera esquemática tres momentos en la ideología de las FARC-EP dentro de un mismo discurso monolítico: un primer momento transcurre en la década de 1960 y se refiere al agrarismo radical en el que se pedían garantías políticas, indemnización para los campesinos desplazados, reforma agraria e inversión pública en el campo. Un segundo momento abarca la década de 1990 y se caracteriza por el marxismoleninismo en la misma línea de la Unión Soviética (URSS), en el que «el poder nace del fusil». El tercer momento se acentúa tras la caída de la URSS y la inmediata actualización de las ideas de Simón Bolívar ligadas con el latinoamericanismo, el antiimperialismo, el militarismo y el intervencionismo económico.

Desde entonces el discurso de las FARC-EP se ha ido reconfigurando con la inclusión de nuevos temas referidos con el anticlientelismo, la denuncia de prácticas y funcionarios corruptos, la resistencia a la globalización y al neoliberalismo, así como la defensa de la descentralización y de la democracia participativa. Esta ideología compartida explica la sostenida unidad interna de las FARC-EP, pese a su crecimiento numérico y a la creciente degradación de la guerra.

Actualmente, este grupo guerrillero participa en diálogos exploratorios en Cuba con el gobierno colombiano a partir de una hoja de ruta acordada por ambas partes y sintetizada en cinco puntos:

1. política de desarrollo agrario integral;
2. participación política;
3. fin del conflicto;
4. solución al problema de las drogas ilícitas;
5. víctimas.

Tanto las FARC-EP como el gobierno colombiano realizan esta negociación bajo tres principios fundamentales: aprender de los errores del pasado para no repetirlos, llevar el conflicto a su fin y no a su prolongación, y mantener las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional.

Dimensión política de las FARC-EP

Recientemente se han realizado algunas investigaciones académicas que utilizando teorías de las ciencias políticas, han caracterizado a las FARC-EP como actor político, destacándose los trabajos de Ferro y Uribe (2002), quienes utilizando el enfoque teórico de Ángel Panebianco sobre organizaciones políticas, analizan las condiciones sociales y políticas en las cuales se originó esta organización armada y desde ahí, abordan su evolución política, su relación con el Partido Comunista y la influencia de este último en su desarrollo organizacional. También analizan sus hitos fundacionales, su organización interna, su crecimiento territorial, sus dinámicas políticas y sus relaciones con la población civil. La investigación se construye desde una serie de entrevistas especialmente a militantes y simpatizantes de las FARC-EP. Los autores destacan la Octava Conferencia como punto relevante en su crecimiento y desarrollo orgánico, con la creación de los Bloques y comandos conjuntos y la formulación de su Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, «esta, en un marco pluralista, patriótico y democrático como parte de su plan estratégico» (ibídem, pág. 117).

En la misma línea se destaca el ensayo de Ávila y Caicedo (2008). Este trabajo se divide en dos partes, en la primera, los autores abordan las causas o factores que han posibilitado la prolongación del conflicto armado colombiano y la consolidación de las FARC-EP en su estructura interna y discurso político. En la segunda parte del ensayo los autores describen el desarrollo de la organización armada, tomando como hecho relevante su Octava Conferencia. También realizan una aproximación teórica al concepto de actor político, e identifican tres generaciones de temas que han hecho parte de su agenda política en momentos diferentes de su historia. En la primera generación los temas giraban en torno a los problemas agrarios, en la segunda generación abordan los problemas sociales y económicos y en la tercera los problemas globales.

Los autores se apoyan en la idea de los «incentivos selectivos» que llevan a los individuos a movilizarse a favor de la acción colectiva planteada por Olson Mancur. Para la caracterización de actor político, utilizan la idea del desicionismo político propuesta por Carl Schmitt, quien define las relaciones políticas como las relaciones de amigo-enemigo, teniendo el enemigo un carácter político, pues «la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo-enemigo» (ibídem, pág. 87).

Por último, se destaca el trabajo de Toloza (2008), quien en su texto hace énfasis en la naturaleza o categorización de las FARC-EP como actor político, utilizando para esto los planteamientos teóricos de Max Weber, Carl Schmitt y Karl Marx. Si bien el autor reconoce que hay trabajos

teóricos más recientes, decide validar sus hipótesis de trabajo con los enfoques de estos tres autores clásicos, buscando una relativa objetividad en su reconocida distancia ideológica.

En esta investigación, para la caracterización política de las FARC-EP se toman como marco de análisis los conceptos de «guerra» y «estrategia», formulados por Karl Von Clausewitz, adaptando los mismos al contexto del conflicto armado colombiano. Se utiliza este autor (Clausewitz), porque como se referenció anteriormente, ya desde teorías de las ciencias políticas, se ha demostrado la condición de actor político de las FARC-EP.

La estrategia en el conflicto armado colombiano

El conflicto armado colombiano se analizará a partir de la definición de estrategia planteada por Clausewitz, la cual servirá como marco de interpretación del accionar de las FARC-EP como un actor transnacional clandestino en el conflicto colombiano:

«La estrategia es la utilización de un encuentro para alcanzar el objetivo de la guerra. Por ello debe proporcionar un objetivo a toda la acción militar, un objetivo concordante con el de la guerra. En otros términos, la estrategia traza un plan de guerra y, teniendo en cuenta su objetivo, diagrama la serie de acciones que conducirán a ese objetivo, planea cada una de las campañas y los encuentros que tendrán lugar en cada una de ellas» (Clausewitz 2004, pág. 121).

Teniendo en cuenta que el mismo autor describe la guerra como una prolongación de la actividad política, el éxito o victoria en la misma solo se alcanzará con la consecución de los objetivos políticos por los cuales se hace la guerra. En este caso, lo político es el fin y lo militar el medio. En este mismo sentido, Bernard Brodie sugiere que:

«Las líneas principales a través de las cuales los eventos de la guerra se desarrollan y a las que ellos están sujetos, son los rasgos de la política, la cual corre a lo largo de toda la guerra hasta que tenga lugar la paz... La guerra nunca puede ser separada del rumbo del intercambio político, y si esto llegase a ocurrir en cualquier momento, toda la lógica estaría rota, y tendríamos delante de nosotros un asunto sin sentido y sin objeto» (Brodie 1978).

Con lo anterior, el concepto de estrategia queda circunscrito a un objetivo de guerra y esta a su vez se encuentra sujeta a los rasgos de la política, que en últimas justifica su prolongación. Aron (2005) cuestiona el

uso o interpretación preeminentemente militar que se ha dado al concepto de estrategia desarrollado por Clausewitz y propone la utilización de la expresión «estrategia política» ya que si en últimas la estrategia (conducción de las acciones) está al servicio de la política, deja de ser estrictamente militar.

Si se revisa con detenimiento la historia y dinámicas de los actores del conflicto armado colombiano, especialmente las FARC-EP y el ELN, puede afirmarse sin lugar a equívocos, que este conflicto es de naturaleza político-ideológico y militar; basta con revisar la gran cantidad de publicaciones y textos disponibles en sus sitios web, además del tiempo y recursos que invierten en la formación política de sus militantes y el trabajo de masas que realizan. En palabras de Rangel (1999), la naturaleza actual de la insurgencia en Colombia puede definirse como política en sus fines pero delincuencial en sus medios.

Es importante señalar que las organizaciones guerrilleras colombianas, o al menos las más grandes, han construido movimientos políticos legales y clandestinos, siendo las FARC-EP, quienes han realizado mayores esfuerzos en este sentido. Desde sus inicios han mantenido una relación de cercanía con el Partido Comunista Colombiano (PCC); en 1984 fruto de una negociación con el gobierno de ese entonces (Belisario Betancourt), nace la Unión Patriótica (UP), movimiento político a través del cual las FARC-EP harían su transición gradual hacia la vida pública. Meses después de su aparición en el ámbito político nacional la UP fue sometida a un proceso de exterminio en el que participaron grupos paramilitares, narcotraficantes y sectores activos de las fuerzas armadas (Trejos Rosero 2011).

Según Ferro y Uribe (2002), ante esta experiencia, las FARC-EP decidieron cerrar la puerta a la actividad política legal y crearon el Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Entre 1980 y 1999 cada presidente inició diálogos con las FARC o el ELN, y su consiguiente estatus político fue formalizado por 4 de ellos (Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana). En el 2002 se interrumpieron los diálogos con las FARC-EP y en cambio se inició el programa de seguridad democrática liderado por el presidente Álvaro Uribe, el cual estuvo basado en la recuperación del espacio público y el combate militar contra las guerrillas con el apoyo de Estados Unidos mediante el Plan Colombia. Solo hasta el 2012, con el presidente Juan Manuel Santos, se retoman los diálogos con el grupo guerrillero y se reconoce el estatus político al acordar una agenda común de negociación.

Desde entonces, a pesar de haber cerrado la puerta a la actividad política legal, la mayor parte de los planteamientos de este grupo revolucionario no han sido precisamente revolucionarios, e incluso en ocasiones han coincidido con políticas de gobierno. De hecho, el mayor logro político

alcanzado por la insurgencia colombiana en los últimos años ha sido el acuerdo parcial sobre el tema agrario con el presidente Juan Manuel Santos, siendo este el primer punto en la agenda de negociación. Dicho acuerdo coincide, según expertos del tema agrario en el país, con la necesidad de una agenda de modernización del campo liderada por el Estado. Para tal acuerdo las FARC-EP han propuesto erradicar el latifundio que sea improductivo e inadecuadamente explotado y hacer una redistribución de la tierra a través de un fondo que dé prioridad a los campesinos sin tierra y a las mujeres; también se erradicarían tierras baldías, despojadas e incautadas al narcotráfico. Esta propuesta ha sido aceptada por el gobierno en la medida en que se articula con la actual política agraria de reformar las reglas de juego del agro para hacer que la tierra esté mejor distribuida y para que buena parte de la población del campo deje de estar marginada.³

En cuanto a los escenarios político-militares estratégicos de las FARC-EP, el primero concibe una salida negociada al conflicto armado, en este caso se conformaría un gobierno provisional, en el que estarían representadas por su máximo comandante y el grueso de sus combatientes serían integrados a las fuerzas armadas de la «Nueva Colombia». El segundo de más larga duración plantea la acumulación de una fuerza militar tal, que les permita dar el salto de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. Y una fuerza política que converja en el movimiento popular no armado. En este último caso se daría una ofensiva general de tipo político-militar que combine huelgas y paros del movimiento popular con acciones militares contundentes que conduzcan a la captura de centros neurálgicos de poder, marcando así la antesala de un nuevo tipo de Estado, aunque este escenario es totalmente improbable.

De lo anterior, puede afirmarse que en el conflicto armado colombiano lo político y lo militar son factores dinámicos e interdependientes, ya que como lo manifestó Clausewitz, las acciones militares son el medio dinamizador de la actividad política, es decir, a mayor intensidad y capacidad de desarrollar acciones militares, mayores serán los espacios y escenarios de difusión e interacción política que se generen para el actor armado en cuestión, y a mayor capacidad de maniobra política, menores debieran ser los niveles de su accionar militar.

No es casual que internamente las FARC-EP se organicen como un ejército irregular; desde 1996 cuentan con un estatuto que define su estructura organizativa y que se ha ido adaptando con el tiempo. Su máxima instancia de decisión es la conferencia nacional de guerrilleros, que se debe reunir cada cuatro años y cuyos miembros son elegidos por todos los miembros de la organización. Esta designa el Estado Mayor Central, el organismo superior de dirección y mando, que hoy está conformado por 31

3. *Semana* (Bogotá), 22 de junio de 2013.

miembros; este nombra a su vez al secretariado del Estado Mayor Central. El secretariado hace las veces de órgano Ejecutivo y toma las decisiones mientras no se reúnan las demás instancias (Trejos Rosero 2011).

Según la Comisión Internacional de las FARC-EP (2007), la estructura interna de las FARC-EP esta compuesta por: escuadras (12 hombres incluidos sus mandos); guerrillas (2 escuadras y sus mandos, 263 hombres); compañías (2 guerrillas y sus mandos, 54 hombres); columnas (2 compañías o mas y sus mandos, 110 hombres), frentes (1 o mas columnas es una o mas columnas); el Estado Mayor del frente (tiene 5 miembros principales y 4 suplentes), bloques de frentes (5 o mas frentes con su respectivo Estado Mayor), comandos conjuntos (cuando no estan dadas las condiciones para crear un Bloque de Frentes). Además cuentan con las Milicias Bolivarianas y las Milicias Populares, que no hacen parte de su estructura militar ya que estan articuladas a los Frentes.

Las FARC-EP en este momento están compuestas por 5 bloques, 1 bloque móvil, 2 comandos conjuntos, 69 frentes, 26 columnas móviles, 28 compañías móviles y 4 frentes urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Cada una de estas estructuras tiene su comandante y su reemplazante, y se distribuyen por todo el territorio nacional: el Bloque Martín Caballero, reconocido también como Bloque Caribe, se extiende por la Sierra Nevada y las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar. El Bloque Ivan Ríos, dividido en dos mini bloques, abarca desde la Serranía de Abibe, el departamento de Córdoba, el Golfo de Urabá y la frontera con Panamá, hasta el oriente antioqueño. El bloque Magdalena Medio, se inició en el departamento del Magdalena y se fue ampliando hacia otros departamentos ribereños como Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca. El Comando Conjunto de Occidente Alfonso Cano, abarca desde las afueras de Cali y Buenaventura hasta el departamento del Cauca. El comando conjunto central Adán Izquierdo se ubica en el sur del Tolima.

El objetivo por el que las FARC-EP manifiestan hacer la guerra es la toma del poder (por la vía armada o negociada) para la instauración de un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, fundado en la siguiente plataforma bolivariana (FARC-EP 2009):

1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.
2. Una doctrina militar y de defensa nacional bolivariana. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas fuerzas armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía.
3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder

moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.

4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.
6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
7. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etcétera, en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente.
8. El 50 % del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afrodescendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno. El 10 % del Presupuesto Nacional será invertido en investigación científica.
9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, solo afectará bienes y servicios suntuarios.
10. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra,

definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.

11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.
12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.⁴

El primer intento de instauración de este proyecto político se dio en 1999 en medio de los diálogos con el presidente Andrés Pastrana, cuando se acordó la Agenda Común para el cambio hacia una Nueva Colombia o Agenda de la Machaca. Según esta, y en correspondencia con el proyecto político de la organización, serían doce los puntos principales de los diálogos de paz: solución política negociada, protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado, política agraria integral, explotación y conservación de los recursos naturales, estructura económica y social,

4. En la parte final de su «manifiesto político», publicado en 2007 en el marco su IX Conferencia, se lee lo siguiente: «La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador. Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los sectores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva». El texto completo del manifiesto se encuentra en línea: <http://www.cedema.org/ver.php?id=2229>.

reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, reforma política para la ampliación de la democracia, reformas del Estado, acuerdos sobre derecho internacional humanitario, fuerzas militares, relaciones internacionales y finalmente formalización de los acuerdos.

A pesar de las intenciones de las partes, en el año 2002 se interrumpieron los diálogos de paz sin haber logrado acuerdos sobre ninguno de los puntos establecidos en la agenda. Al retomar los diálogos en el año 2012, dicha Agenda se redujo sustancialmente hasta un total de 5 puntos que buscan afianzar y legitimar las pretensiones políticas nacionales de este grupo guerrillero con un despliegue político internacional. La comprensión de esta conexión entre política externa y política interna, es fundamental para entender el comportamiento de este actor no estatal en el escenario internacional. Hoy, la agenda consensuada en Cuba entre las FARC-EP se observa en el cuadro 5.1.

En comparación con la Agenda de 1999, estos diálogos no incluyen la protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado, la explotación y conservación de los recursos naturales, la reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, las reformas del Estado, acuerdos sobre derecho internacional humanitario, fuerzas militares y

Política de desarrollo agrario integral	Participación política
Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial.	Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación
Infraestructura y adecuación de tierras. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.	Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. Sistema de seguridad alimentaria.	Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Continúa en la página siguiente

<i>Viene de la página anterior</i>	
Fin del conflicto	Solución al problema de las drogas
Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses.	Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos
El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.	Programas de prevención del consumo y salud pública. Solución de fenómenos de producción y comercialización de narcóticos.
En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres.	Víctimas. Derechos humanos de las víctimas. Verdad. Implementación, verificación y refrendación.
El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Garantías de seguridad. En el marco de los establecidos en el punto 5 (víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.	Mecanismos de implementación y verificación. Mecanismo de refrendación de los acuerdos. Acompañamiento internacional. Cronograma. Presupuesto. Herramienta de difusión y comunicación.

Cuadro 5.1 – Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Fuente: elaboración propia a partir de Fisas (2013).

relaciones internacionales, dejando un escenario de incertidumbre sobre el futuro del proyecto político de las FARC-EP en estos aspectos.

Después de dos años de negociación para llegar al acuerdo parcial sobre el tema agrario, la participación política, el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas, los diálogos avanzan hacia el quinto punto sobre las víctimas, en el que están en juego la defensa de los derechos humanos de las víctimas y la verdad. Sin embargo, existen advertencias sobre los cuatro puntos ya discutidos, entre ellas diez advertencias sobre el tema agrario, catorce sobre participación política y cuatro sobre drogas ilícitas (Colombia informa 2014).

Las aspiraciones que desbordan la agenda de negociación apuntan a reformar el Estado, lo cual si bien no está incluido en la actual agenda, hace parte del proyecto político de las FARC-EP y fue uno de los puntos incluidos en los diálogos de 1999. Abolir el presidencialismo, sustituir la Cámara de Representantes por una Cámara Territorial, crear una cuarta rama del poder denominada Poder Popular, impedir el monopolio de los medios de comunicación y hacer que el Estado los regule, son cambios que el gobierno no está dispuesto a negociar y que han dilatado la negociación (revista *Semana*, 2013).

Dimensión delincencial de las FARC-EP

En el plano nacional las FARC-EP hacen énfasis en la utilización del poder duro o *hard power*, ya que como se señaló anteriormente en un conflicto armado como el colombiano (político-militar), la fuerza militar se convierte en el medio para alcanzar objetivos o fines políticos. Pero es precisamente la práctica reiterada de actividades delincuenciales, asociadas al despliegue de su accionar militar y financiero, las que han venido desgastando su imagen política y cerrándoles espacios legales a nivel internacional. Orgánicamente, las FARC-EP se han constituido internamente como un ejército irregular, lo que evidencia la preponderancia de lo militar sobre lo político, y es precisamente ese enfoque militarista el que genera continuas y graves afectaciones a la población civil y sus bienes.

El uso sistemático del secuestro con fines económicos y políticos, a pesar de ser una flagrante violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y la utilización del narcotráfico como medio de financiación, ponen en evidencia las serias contradicciones presentes en su accionar militar nacional y su actividad política internacional.

El narcotráfico

En cuanto a la relación de las FARC-EP con la coca, los cultivadores de coca y los narcotraficantes, ha sido evolutiva y dinámica, especialmente en los departamentos de Meta, Putumayo y Caqueta. De su inicial oposición a la siembra de los mismos en 1977, pasan a su aceptación y regulación en

1979, en 1982 inician el cobro de impuestos a los comerciantes de pasta de coca, a los laboratorios de producción de cocaína y a los vuelos de carga. A principios de los noventa inician el regulamiento policivo del comportamiento de los narcotraficantes y miembros de las cocinas, al respecto, el comandante Julio Rincón, en entrevista concedida durante los diálogos de paz en el Caguán, afirmó que: «el que compraba y vivía en la zona se sometía a las normas de nosotros: no cargar armas, máximo un revolver, jamás una nueve milímetros, no traer gente sin saber uno quién es, y si la traía tenía que responder por lo que él hiciera en la zona» (Ferro y Uribe 2002, pág. 99). En 1996 organizan las primeras marchas cocleras contra la fumigación aérea, en 1999 restringen el ingreso de compradores de pasta de coca por temor a la filtración paramilitar y se inicia la competencia por la compra de parte de los paramilitares y en el año 2000 se inicia la comercialización directa de la pasta de coca por parte de las FARC-EP.

El control y regulación de la coca en sus territorios también les es funcional orgánicamente, ya que:

«Aunque parezca paradójico, el control de la economía de la coca le representa ventajas a la guerrilla en términos de su crecimiento, incluso cuando hay una fuerte reducción de los precios. Las crisis periódicas de la coca también favorecen a la guerrilla porque ingresar a sus filas se convierte casi en la única alternativa frente a la falta generalizada de oportunidades laborales» (ibídem, pág. 100).

En el plano económico, para Rangel (1999), la mitad de los ingresos económicos de las FARC-EP tienen su origen en el narcotráfico, afirmando incluso que esta organización dedica uno de cada tres de sus combatientes a actividades relacionadas directa o indirectamente con el narcotráfico. La realidad indica que las FARC-EP tendrían serias dificultades para seguir escalando la guerra que libra contra el Estado, sin los importantes recursos económicos que obtiene mediante un complejo sistema de tributación coactiva (gramaje) impuesto en las zonas de cultivos y procesamiento de la hoja de coca.⁵

El abordaje de la real participación de las FARC-EP en la distribución y comercialización internacional de la cocaína colombiana se hace complejo, debido a la falta de trabajos o investigaciones académicas que comprueben que esta organización armada sea o se comporte como un cartel de la droga.

5. Sobre la economía de las FARC-EP véase: Junta de Inteligencia Conjunta República de Colombia (JIC) (2005). Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003 basados en información de inteligencia recolectada por las agencias del Estado, Bogotá.

En este sentido, al realizar un estado del arte, se encuentran abundantes artículos de prensa en los que se señalan los altos ingresos que perciben las FARC-EP por el cobro de impuestos a los cultivadores y la intermediación y comercialización de la cocaína en sus zonas de control y algunas áreas fronterizas como el caso de Lago Agrio en territorio ecuatoriano.

Un segundo grupo lo componen los trabajos realizados por oficiales de la fuerza pública, destacándose el libro del coronel Villamarín Pulido (1996) *El cartel de las FARC*, que fue prologado por el general Harold Bedoya, quien para la época se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció este libro como una investigación muy completa.⁶ Otro trabajo que va en esta línea, es el libro del periodista colombiano Mackenzie (2007), *Las FARC fracaso de un terrorismo*, en el cual dedica un capítulo a establecer las relaciones de las FARC-EP con el narcotráfico internacional.

La falencia que presentan tanto las notas de prensa como los libros antes referenciados es que se basan en fuentes oficiales, lo que hace que se perfilen como componentes de la lucha ideológica que libran las FARC-EP y el Estado colombiano, y no por su objetividad y profundidad investigativa.

Es importante destacar que según Trejos (2012), la primera referencia a la conexión narcotráfico e insurgencia, la realizó el teniente coronel del Ejército colombiano, Mario López, quien en 1982 publicó en la *Revista de las fuerzas armadas*, el artículo titulado: «Vínculos de las FARC con el narcotráfico», en el cual plantea que dicha conexión se inició aproximadamente en 1977 con los cultivos de marihuana y se consolidó en los ochenta con el negocio de la coca. López, señala cómo las grandes ganancias producidas por esta ilícita actividad influyen negativamente en el comportamiento revolucionario de la guerrilla.

En 1984, el entonces embajador de los Estados Unidos en Colombia Lewis Tamb, acuñó el término narcoguerrilla para definir una alianza estratégica entre guerrilla y narcotráfico, todo esto en el marco de la Guerra Fría y un cierto distanciamiento de la administración Betancur con respecto a los Estados Unidos.

Lo que debe tenerse claro es que si bien las FARC-EP se relacionan activamente con el narcotráfico, tal y como lo señala Ávila (2008), las FARC-EP no controlan toda la cadena de producción y distribución de la cocaína, en muchos casos su control llega hasta la fase de contacto con quienes intermedian y transportan la cocaína hacia los mercados de consumo final. Su vínculo y dependencia económica de esta actividad ilegal los obliga a sostener contactos comerciales con narcotraficantes,

6. Otras obras del coronel Villamarín sobre el conflicto armado colombiano se pueden consultar en: <http://www.luisvillamarin.com/obras/conflicto-colombiano.html>

tal y como quedó demostrado en abril de 2001, cuando en el marco de la «Operación Gato Negro», adelantada por el Ejército colombiano en el departamento del Guaviare, en contra del frente 16 de las FARC-EP, fue capturado el narcotraficante brasilero Luis Da Costa, alias «Fernandinho» (véase cuadro 5.2).

En las zonas de frontera las FARC-EP controlan algunas rutas por las que sale la cocaína hacia los países vecinos, pero los corredores de ingreso a los grandes mercados de consumidores están en manos de los grandes narcotraficantes y carteles.

El siguiente texto sirve para entender la dinámica que se presenta al interior de las estructuras de las FARC-EP con el narcotráfico:

«Es importante señalar que no todos los frentes viven de la cadena productiva del narcotráfico y, que algunos nunca lo han hecho. La presencia de los recursos del narcotráfico establece una odiosa diferencia entre frentes ricos, en expansión, con frentes pobres y dependientes. Los primeros se fortifican militarmente, pero se debilitan políticamente. Los segundos progresan políticamente, pero son débiles militarmente» (Ávila 2009, pág. 240).

Tanto en el plano nacional como en el internacional es un lugar común, el rechazo por razones éticas, que produce el consentimiento, validación e involucramiento de la FARC-EP, en la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Por otro lado, si bien los ingresos que le reporta el narcotráfico, sustentan el grueso de su esfuerzo de guerra, es un error afirmar que realicen esta actividad con fines de lucro personal, si así fuera, las FARC-EP serían simples delincuentes comunes, condenados a sufrir la misma suerte de los procesos bandoleriles en general, es decir, su propia autoextinción o fragmentación como resultado de las pugnas internas por ajuste de cuentas, luchas de poder o alianzas con los contrarios. En este caso, tal y como lo afirma Rangel (1999), solo habría que sentarse en la puerta a esperar ver pasar el cadáver de la guerrilla y descartar cualquier intento de formulación de políticas estatales de paz. Aunque, hay que señalar que se han venido presentado casos de excesos de lujo y enriquecimiento personal de comandantes, encargados de regular el cultivo de coca y manejar relaciones con narcotraficantes, tales como Jhon 40, ex comandante del frente 43 y Julian Cabir, ex comandante de la columna Móvil Teófilo Forero.

El secuestro

En cuanto al secuestro, considerado como una violación grave a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario,

Cultivos de hoja de Coca	Procesamiento básico de la hoja	Venta de base de hoja de coca a intermediario o no utilización de intermedios	Procesamiento y transformación en Cocaína	Trasporte al exterior	Distribución en ciudades
Bloque oriental	Bloque oriental	Bloque sur	Bloque oriental	Narcotraficante	Narcotraficante
Bloque sur	Bloque sur	Bloque sur	Narcotraficante	Narcotraficante	Narcotraficante
Comando Conjunto de occidente	Comando Conjunto de occidente	Comando José María Córdoba	Comando Conjunto de occidente	Narcotraficante	Narcotraficante
Bloque Magdalena Medio	Bloque Magdalena Medio	Bloque Magdalena Medio	Narcotraficante	Narcotraficante	Narcotraficante
Bloque Caribe	Bloque Caribe	Bloque Caribe	Narcotraficante	Narcotraficante	Narcotraficante
Bloque José María Córdoba	Bloque José María Córdoba	Bloque José María Córdoba	Narcotraficante	Narcotraficante	Narcotraficante

Cuadro 5.2 – Cadena productiva del narcotráfico y su relación FARC-EP-mafia narcotraficante. Fuente: Ávila (2009).

es posible identificar tres categorías de personas en manos de las FARC-EP, a saber: las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, que pueden ser miembros de las fuerzas armadas y personas que participan indirectamente en las hostilidades; personas civiles secuestradas por motivos económicos y rehenes.

Personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto: dentro de esta categoría se pueden incluir a aquellas personas que participan directamente en las hostilidades y a los que indirectamente apoyan el esfuerzo militar de las partes en conflicto, sin importar si son civiles o combatientes. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que:

«En la práctica, una persona civil participa directa o indirectamente en hostilidades cuando asume el papel de combatiente, individualmente o como miembro de un grupo. Dichas personas civiles constituyen una amenaza inmediata de daño cuando se preparan, participan y retornan del combate. Como tales quedan expuestos a ataque directo. Más aún, debido a sus actos hostiles, esas personas civiles pierden los beneficios de los que gozan los civiles pacíficos, de precaución al atacar y contra los efectos de ataques indiscriminados o desproporcionados» (Defensoría del Pueblo de Colombia 2013).

Es importante resaltar que aún cuando estas personas pierden su inmunidad a ataques directos mientras participan en las hostilidades, conservan sin embargo calidad de civiles, a diferencia de los combatientes comunes que una vez cesan sus actos hostiles no pueden ser atacados, aunque pueden ser procesados y castigados por sus actos beligerantes. A diferencia de lo que ocurre con las personas civiles que apoyan o participan indirectamente en las hostilidades, no pueden ser considerados combatientes por esta única razón. Esto debido a que la participación indirecta, como vender alimentos o expresar simpatía por alguna de las partes en conflicto, no implica actos de violencia que constituyan una amenaza inmediata de daño a la contraparte.

Personas civiles privadas de la libertad por motivos económicos: la Defensoría del Pueblo ha considerado que el creciente número de secuestros cometidos, especialmente por las organizaciones guerrilleras, permiten afirmar que se trata de una conducta sistemática en contra de la población civil. El secuestro con fines económicos podría ser considerado como un crimen de lesa humanidad, ya que va dirigido contra civiles desarmados y causa a estos y a sus núcleos familiares grandes sufrimientos, también puede considerarse una grave infracción al derecho internacional humanitario, ya que puede calificarse como un ataque a la población civil y

las personas civiles. Estos ataques están expresamente prohibidos en desarrollo del principio de distinción entre combatientes y no combatientes (Defensoría del Pueblo de Colombia 2001).

Rehenes: el derecho internacional humanitario no define claramente la toma de rehenes, tan solo se limita a prohibir la conducta. En el artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra de 1949, y en el artículo 4, literal C del Protocolo II adicional, se prohíbe a las partes en conflicto la toma de rehenes, infringir estas disposiciones es considerado como grave por el derecho internacional humanitario. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja:

«Los rehenes son personas que se encuentran de grado o por fuerza, en poder de una de las partes en conflicto, o de uno de sus agentes y que responden con su libertad, su integridad corporal y/o su vida la ejecución de órdenes dadas por las personas en cuyo poder están o de los actos hostiles cometidos contra ellas» (CICR 1986, pág. 13).

En la medida en que las FARC-EP mantengan privadas de la libertad a personas civiles que no tengan nada que ver en el conflicto, se mantiene la toma de rehenes y, en consecuencia la violación de los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario.

Las FARC-EP denuncian la sistemática violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares, justificando sus acciones al considerarlas una lógica consecuencia de la constante violación de los derechos fundamentales del pueblo por parte del Estado y los grupos paramilitares. En cierta forma las FARC-EP hacen de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario un arma de descalificación política de sus contrarios. La instrumentalización los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la práctica y justificación del secuestro y su involucramiento con el narcotráfico, son precisamente algunos de los factores que han afectado considerablemente su proyección internacional, llevándolos a ser incluidos en listados internacionales de organizaciones terroristas, demostrando así que muchas de sus acciones militares y económicas contradicen abiertamente los valores que sustentan su discurso político.

Contrario a lo esperado por las FARC-EP, la práctica del secuestro tuvo efectos negativos sobre la propia organización. Así lo muestra un estudio realizado por Castillo y Balbinotto (2012), quienes aplican la teoría del principal-agente para mostrar que paradójicamente, uno de los efectos del secuestro ha sido el debilitamiento de la organización guerrillera. Esta teoría supone que existe una relación asimétrica entre el principal y el

agente, en la que el primero delega tareas al segundo para que actúe en su nombre en un contexto en el que no puede observar directamente su comportamiento ni verificar, sin incurrir en altos costos, si realiza las tareas encomendadas.

Al mismo tiempo, el principal debe ofrecer al agente un esquema de incentivos que lo motive a hacer su mayor esfuerzo.⁷ Aplicado al caso colombiano, la teoría del principal-agente evidencia la incompatibilidad que el secuestro político generó entre los intereses de los mandos medios – encargados de custodiar a los secuestrados – y los fines de la cúpula, así como la posibilidad de acuerdos y alianzas entre secuestrados y guardianes a medida que se prolongaba el cautiverio (ibídem).

La decisión del secuestro se basaba en los beneficios políticos que podía obtener las FARC-EP en el mediano plazo, si el gobierno aceptaba negociar. Según Castillo y Balbinotto, las FARC-EP apostaban a que el secuestro de políticos y militares de alto rango tendría un enorme impacto político y mediático, que llevaría al gobierno a buscar mecanismos para intercambiar prisioneros. Sin embargo, los autores señalan que en el 2001 el grupo guerrillero consiguió la libertad solo de 15 guerrilleros a cambio de 310 militares secuestrados. Sumado a lo anterior, las muertes de secuestrados en intentos de fuga, rescates y liberaciones sin nada a cambio, la continua persecución del ejército y el inmenso y acelerado deterioro de su imagen y credibilidad como guerrilla revolucionaria, muestran que el secuestro político, ideado por las FARC como estrategia para llegar a la negociación y el intercambio de prisioneros, no cumplió su objetivo y en cambio tuvo efectos negativos sobre su la misma organización.

En esta parte del trabajo, es importante señalar que las FARC-EP por su carácter ilegal, adquieren una parte importante de su material de guerra en el mercado negro, es decir, participan en el tráfico internacional de armas, aunque solo hay registro de una operación de gran envergadura en la que participó esta organización. Durante los meses de marzo y agosto del año 2000, vía desembarco aéreo, las FARC-EP recibieron en las selvas del sur de Colombia 10.000 fusiles AK-47 de un lote de 50.000 que habían negociado en 1999 por un valor que se encuentra entre los 15 y 22 millones de dólares. La operación implicó una compleja logística, que se inició con

7. Este arreglo, en forma de un contrato eficiente que establece los compromisos y obligaciones del principal y el agente, respectivamente, reduce los problemas de agencia o la incompatibilidad de intereses entre las partes. Suponiendo que ambos buscan su propio interés, tienen racionalidad limitada, diferentes actitudes ante el riesgo y que la información que circula entre ellos es valiosa, la teoría de la agencia propone soluciones estratégicas para reducir la incertidumbre que enfrenta el principal, debida a la nula o mala información sobre las acciones que realiza el agente y que afectan los resultados que aquel busca obtener (Castillo y Balbinotto 2012).

el embarco de las armas en un avión de carga en Jordania y tuvo escalas en Argelia, Cabo Verde, Granada y Trinidad Tobago. El fallecido Raúl Reyes, en entrevista concedida al *Nuevo Herald* en el año 2004, sostuvo: «las FARC compran fusiles en el mercado negro, sin averiguar quién las vende, porque lo que saben las FARC, como lo sabe mucha gente, es que en el mercado negro hay ventas de armas, y las armas las produce el imperio; tienen armas para vender a quien las compre».⁸

Otras actividades delincuenciales realizadas por las FARC-EP con fines económicos, aunque en menor proporción que el narcotráfico y el secuestro son la extorsión, el abigeato. Al revisar las dimensiones política y delincencial de las FARC-EP puede afirmarse parafraseando a Alfredo Rangel, que esta organización guerrillera aunque discursivamente persigue objetivos políticos es cada vez más delincencial y bandoleril en los medios que utiliza.

Conclusiones

En Colombia se desarrolla un conflicto armado interno de carácter asimétrico, irregular y de baja intensidad, en el que sus actores armados irregulares se financian principalmente con actividades relacionadas con el narcotráfico. En las estrategias de los actores armados colombianos lo político es el fin y lo militar el medio.

Las FARC-EP tienen sus orígenes en procesos de violencia política ocurridos en la década de los cuarenta del siglo anterior, en los cuales la violencia estatal y paraestatal produjo una serie de actores y violencias contra estatales, que después de la Revolución Cubana asumieron dinámicas políticas y militares revolucionarias. En este contexto, la ausencia estatal en las periferias del país, permitieron que actores armados ilegales como las FARC-EP establecieran retaguardias geográficas en las cuales construyeran modelos de orden social y control territorial. En su fundación juega un papel destacado la orientación política del Partido Comunista Colombiano (PCC), que internacionalmente gravitaba en torno al Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). De hecho, desde su fundación en 1966 hasta 1982, las FARC-EP dependieron políticamente del PCC.

8. Sobre las FARC-EP y el tráfico de armas, véase: *Semana.com* (2 de julio de 2001) Las FARC cayeron en la trampa [En línea]: <http://www.semana.com/especiales/farc-cayeron-trampa/17807-3.aspx> [Consulta: 19-04-2010]; *Semana.com* (16 de julio de 2001) Las armas de las FARC [En línea]: <http://www.semana.com/nacion/armas-farc/18060-3.aspx> [Consulta: 16-04-2011]; *El Nuevo Herald* (10 de marzo de 2004) Las FARC admiten la compra de unos 10.000 fusiles AK-47 [En línea]: <http://www.latinamericanstudies.org/farc/fusiles.htm> [Consulta: 16-12-2011].

Solo hasta la realización de su Séptima Conferencia (1982) adquieren su mayoría de edad en términos políticos, al entablar de manera directa (sin mediación de ningún tipo) diálogos de paz con el gobierno colombiano y participar en un referente político amplio (la Unión Patriótica), en igualdad de condiciones con el PCC. Esta independencia política también se reflejó en su actividad internacional, ya que es precisamente en este período, que inician su actividad diplomática, en principio limitada espacial y temáticamente, ya que se desplegaba en Centroamérica y el Caribe y buscaba su reconocimiento como actor político-militar y apoyos para su causa.

Las FARC-EP encajan en el concepto de actores transnacionales clandestinos (ATC's), formulado por Andreas (2003), quien los define como:

«Actores no estatales que operan a través de las fronteras nacionales violando leyes estatales y quienes apuntan a evadir esfuerzos de vigilancia. Los ATC's son ampliamente variados en sus motivos. Pueden estar motivados por la obtención de lograr altas utilidades y la demanda del mercado, el deseo de llevar a cabo actos de violencia por inspiraciones políticas o religiosas o la búsqueda de empleo y refugio» (ibídem, pág. 78).

Este concepto, se ha desarrollado dentro de los estudios de seguridad y defensa llevados a cabo en el nuevo escenario internacional, en el que la soberanía y la seguridad territorial, no solo se ven afectadas por variables de tipo militar, sino también por la creciente porosidad de las fronteras en el marco de la globalización.

Schafik Jorge Handal: y la reconfiguración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (1992-2014)

Carlos López Bernal

.....

Introducción

Schafik Jorge Handal (1930-2006) es actualmente la figura más emblemática de la izquierda salvadoreña de posguerra. Handal fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) desde la década de 1950 y miembro de la Comandancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), creado en 1980, que libró una cruenta guerra contra el Ejército salvadoreño, la cual finalizó en 1992.¹ Una vez que el FMLN se convirtió en partido político, Handal participó en la redefinición política del partido, proceso que no estuvo exento de conflictos que implicaron la expulsión o salida de dirigentes históricos; al final, el PCS y las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) terminaron hegemonizando el partido.

La comandancia histórica del FMLN estuvo constituida por un dirigente de cada una de las cinco organizaciones guerrilleras, pero de ellos solo Handal y Salvador Sánchez Cerén permanecieron en el partido; los otros se retiraron luego de intensas disputas ideológicas y de poder.

1. El FMLN se constituyó en octubre de 1980 con cinco organizaciones guerrilleras: Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN), Partido Comunista Salvadoreño (PCS), y Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Véase, una apretada pero reveladora síntesis periodística de las disputas internas de posguerra en el FMLN, aparece en, «Sánchez Cerén rehabilita a los antiguos disidentes del FMLN», *El Faro* (San Salvador), 28 de abril de 2014. En <http://www.elfaro.net/es/201404/noticias/15304/> acceso 20 de junio de 2014.

Handal se desempeñó como diputado en varios períodos, y fue candidato a presidente de la república en 2004, pero su trayectoria política se truncó abruptamente con su muerte en 2006, cuando fungía como diputado en la Asamblea Legislativa. Por su parte, Sánchez Cerén ha sido diputado, vicepresidente de la república (2009-2014), ministro de Educación y hoy es presidente de la república para el período 2014-2019.

La muerte de Handal desencadenó un inédito proceso en el que su militancia revolucionaria, su incorporación legal a la política en el marco de los procesos de paz, su pensamiento político y su legado histórico han dado lugar a la «invención de un héroe» que, tal y como acontece en estos casos, desdibuja el perfil de hombre histórico, que es desplazado por el panegírico y el ensalzamiento de virtudes y cualidades posiblemente reales, pero magnificadas (Hobsbawm y Ranger 2002). Es así que se han escrito biografías, se han publicado libros que recuperan su pensamiento, construido monumentos a su memoria, y creado un museo que guarda sus reliquias. Cada año, los aniversarios de su muerte y su natalicio dan lugar a diferentes conmemoraciones en las que participan militantes y simpatizantes de izquierda. Sin embargo, como acontece generalmente en estos casos, el perfil de personaje en vida difiere mucho del que se construye después de su muerte. En el caso de Handal, los últimos ocho años han sido proliferos en la generación de acciones memoriales que perfilan una imagen que es una mezcla de memoria, historia e «invención de tradiciones».

Aunque tales procesos pretenden fundamentarse en la historia, a menudo responden más a la memoria; es decir, obedecen más a la subjetividad, filias y fobias de la construcción memorial, que al esfuerzo por recuperar el pasado a través de un estudio sistemático y crítico, tal y como se trata de hacer desde la historia. En ellos prima el uso político del pasado en función de un proyecto político del presente. Y no obstante la crítica que se pueda hacer, es innegable que mucho de lo que los salvadoreños conocen y conocerán sobre Handal y los procesos políticos en que participó, fatalmente se fundamentará en este proceso de reinversión del personaje histórico.

La muerte de Handal: un golpe inesperado a la izquierda salvadoreña

La tarde del 24 de enero de 2006 transcurría normalmente para miles de salvadoreños. Finalizada la jornada laboral, muchos regresaban a sus hogares, luchando como todos los días con los problemas del tráfico. De pronto, la rutina de la tarde se alteró cuando la radio y la televisión comenzaron a transmitir «noticias en desarrollo» que daban cuenta de que el diputado Schafik Jorge Handal, líder del partido de oposición, FMLN, había sufrido un infarto en el aeropuerto internacional El Salvador, cuando regresaba

de Bolivia, a donde había asistido a la toma de posesión del presidente Evo Morales. Inicialmente no había claridad sobre lo ocurrido; conforme el tiempo pasaba se agregaban detalles: Handal había sido atendido en el aeropuerto, luego fue trasladado en helicóptero a la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado.

La noticia se expandió rápidamente. Los militantes que pudieron se dirigieron rápidamente a la sede del FMLN a la búsqueda de mejor información. Allí siguieron los hechos y esperaron las declaraciones de sus dirigentes: «En las noticias anunciaron que su diputado y dirigente, Schafik Jorge Handal, había sufrido un paro cardíaco. Paro que le provocó la muerte... las lágrimas comenzaron a caer. Muchos opusieron resistencia al llanto. Otros detenían su dolor con la mano en la boca y los ojos viendo al techo. Nadie lo podía creer. En la planta alta, la cúpula estaba reunida a puerta cerrada». Otros marcharon hacia el hospital en que se había atendido a su líder y desde la calle gritaban las consignas del partido.² Lo inesperado del suceso explica parte de su impacto. Unos días antes, Handal estaba en plena actividad política; de hecho había anunciado su viaje a Bolivia mientras participaba en las llamadas «tribunas legislativas» en la popular y emblemática «Plaza Gerardo Barrios».

Pero lo cierto, es que la muerte de Handal afectaría fuertemente a la izquierda salvadoreña independientemente del momento en que ocurriera. Y es que Handal, junto con Salvador Sánchez Cerén, eran los únicos miembros de la Comandancia General del FMLN que permanecían dentro del FMLN. Los otros tres salieron del partido en medio de agrias disputas sobre la conducción del mismo. Handal lideraba al PCS y Sánchez Cerén a las FPL, las dos organizaciones que agruparon lo que se dio en llamar el ala ortodoxa del Frente, en contraposición a otros agrupamientos que pugnaban por una mayor apertura y flexibilidad ideológica. En cierto modo, esas rupturas revivían otras vividas a principios de la década de 1970, cuando militantes de izquierda rompieron con el PCS para buscar la revolución por la vía armada.

De hecho, el fundador de las FPL, Salvador Cayetano Carpio, abandonó el PCS luego de fuertes disputas doctrinarias con Handal y otros líderes del partido, la razón principal fue la negativa del PCS a optar por la vía armada para hacer la revolución (Carpio 2011; Harnecker 1991).³ Con el transcurso de los años surgieron otras organizaciones político-militares

2. «Luto de rojo entre la militancia efemelenista», *El Mundo* 2006 (San Salvador) 25 de enero.

3. El surgimiento de las FPL fue determinante para la historia de la izquierda en El Salvador. Las versiones de los protagonistas de estos hechos son por supuesto, contradictorias. La versión del PCS aparece en (Handal 2011); y documentos internos del Partido, tales como «Manifiesto del Partido Comunista de El Salvador en Ocasión del 50 Aniversario de su Fundación». Texto ubicado y digitalizado por

que escogieron la lucha armada, mientras el PCS mantuvo una línea de trabajo sindical y alianzas con otros partidos legales para participar en procesos electorales, hasta 1977. El PCS fue el último que optó por la lucha armada. Por más de una década el FMLN libró una cruenta guerra que al final se resolvió mediante negociaciones, auspiciadas por las Naciones Unidas. La paz se firmó en 1992, dando lugar a la legalización del Frente como partido político (Sprenkels 2011a, págs. 258-259).

En 1994 el FMLN participó por primera vez en un proceso electoral; desde entonces fue ganando creciente representación legislativa y gobiernos municipales; sin embargo perdió sucesivamente tres elecciones presidenciales. De hecho, en la de 2004, Schafik Handal fue su candidato presidencial, pero fue derrotado por amplio margen por el derechista Antonio Saca.⁴ Las sucesivas derrotas electorales alimentaron fuertes debates al interior del Partido, que básicamente enfrentaban a los que – como Handal y Sánchez Cerén – pugnaban por una línea ortodoxa-revolucionaria y otros que sostenían que esa línea era rechazada por el grueso de la población y más bien favorecía a la derecha que explotaba un discurso anticomunista, reaccionario y anacrónico, pero electoralmente funcional (López Bernal 2007).

Al final, los ortodoxos lograron hegemonizar al FMLN. Handal fue uno de los principales artífices de ese proceso, gracias al cual el PCS, legalmente inexistente, pero políticamente funcional copó los principales puestos de dirección, los cuales compartía convenientemente con las FPL. La candidatura presidencial de Handal en las elecciones de 2004 fue la confirmación del dominio ortodoxo, pero la estrepitosa derrota sufrida demostró que un FMLN afirmado en el discurso revolucionario más radical era fácil víctima de las sucias campañas electorales de la derecha.

Esta constatación no pasó desapercibida para algunos dirigentes del FMLN. De nuevo apareció el debate sobre cuál debía ser la estrategia del partido, si realmente quería llegar al poder por la vía de las elecciones. Contrario a lo ocurrido en otras ocasiones, el debate fue más bien subterráneo, pues los que cuestionaban a la conducción ortodoxa sabían que estaban en desventaja. El 2006 sería un año clave al interior del FMLN, pues habría elecciones legislativas y municipales; los resultados darían la pauta sobre la manera como se había procesado la derrota en las presidenciales de

el Centro de Estudios Marxistas «Sarbelio Navarrete» (CEM), y puesto en Internet por el Servicio Informativo Ecuménico y Popular (SIEP), abril de 2009. Acceso 22 de febrero de 2014.

4. En las presidenciales de 2004, Handal obtuvo 812,519 votos y Antonio Saca, candidato de ARENA, 1,314,436. Es decir, Saca logró el 62% de los votos. En http://www.tse.gob.sv/documentos/estadisticos/2004/consolidadonacional_presi_2004.pdf acceso 13 de agosto de 2014.

2004 y prefigurarían el escenario sobre el cual se daría el debate para la candidatura presidencial de 2009.

La inesperada muerte de Handal a inicios de 2006, distorsionó y condicionó el trabajo interno del FMLN. Paradójicamente Handal murió cuando aún no había claridad sobre el significado de sus últimas más grandes victorias y derrotas. Bajo su conducción el FMLN había aparentemente superado sus pugnas internas (los más fuertes críticos a la ortodoxia efemenista habían sido expulsados o simplemente habían abandonado el Partido para impulsar nuevos proyectos de izquierda, todos fracasaron), pero la derrota sufrida en 2004, también demostró la poca viabilidad electoral de la ortodoxia. Handal era consciente de ello, y trabajaba arduamente al respecto, cuando la muerte lo sorprendió.

El luto por la muerte de Handal pareció unificar al FMLN. Dirigentes y militantes reconocieron el liderazgo histórico y los aportes de Handal y coincidieron en que su muerte dejaba un vacío difícil de llenar. «Nos dirigimos no a enterrar al compañero Schafik, sino más bien a plantar su semilla, que germinará en todos nosotros», dijo la ex comandante Nidia Díaz. En términos parecidos se expresó Carlos Ruiz, alcalde del FMLN en Soyapango: «Shafick no es de los hombres que hay que llorarles, Shafick es de los hombres que hay que rendirles homenaje, trabajando por el cumplimiento de la visión de sociedad que él tenía». Ruiz agregó que bajo el liderazgo de Handal, el FMLN «ha recuperado su identidad, ha recuperado su rumbo y la condición revolucionaria».⁵

Generalmente, en el momento de la muerte, los antagonismos y las brechas ideológicas se reducen, de tal modo que hasta los adversarios políticos, reconocen en el difunto, méritos y cualidades que antes le negaban. Ciro Cruz Zepeda, del partido derechista Partido Concertación Nacional (PCN), dijo que «sería un error de parte de cualquier persona negar el protagonismo político que jugó mi compañero y amigo Schafik Jorge Handal en la historia reciente del país y más concretamente en la pacificación nacional».

De repente, hasta sus más acérrimos adversarios políticos, abundaron en reconocimientos y hasta elogios para Handal. Gloria Salguero Groos, reconocida dirigente de derecha, dijo que recordará a Schafik con mucho respeto, como un gran negociador, con quien se podía llegar a acuerdos: «para el país es una pérdida... (Handal) unía e influía mucho en el FMLN y las opiniones de él eran muy valederas».⁶ En otra entrevista recalcaba: «si

5. «“Schafik no es de los hombres que hay que llorarles”: Carlos Ruiz», *Diario Co Latino* (San Salvador), 27 de enero de 2006.

6. «Muere uno de los máximos dirigentes del FMLN», *Diario Co Latino* (San Salvador), 25 de enero de 2006.

él decía sí, se debía estar seguro de que eso iba a suceder, y cuando decía que no, era mejor no continuar y buscar otro mecanismo».⁷

La dirección del FMLN fue muy sensible a la partida de Handal y fue consciente de lo que la muerte del histórico líder podía significar para la unidad partidaria y para proyectos políticos futuros. Y aunque todos los dirigentes insistían en la unidad, desde un primer momento quedó claro que había que pensar en el relevo en la dirección del partido.

El diario *El Mundo* no dudó en afirmar: «el principal problema que enfrentarán es que nadie estará a la altura del dirigente, ni en el plano intelectual ni en el político... Un liderazgo fuerte impide que se desarrollen otros. No hay nadie listo para la sucesión».⁸ Obviamente, el tema se prestaba para las especulaciones. Dos días después de la muerte de Handal, un periódico informaba que la fracción legislativa del FMLN había tenido una reunión.

«Según una fuente del partido no se habló sobre la sucesión de Handal, pero otro efemelenista que pidió no ser identificado dijo que al interior del Frente ya se habla de posibles sucesores. Los nombres que circulan son los de Salvador Sánchez Cerén y Salvador Arias».⁹

Sin embargo, el Frente resolvió el problema rápidamente. El 27 de enero se supo que Salvador Sánchez Cerén fue nombrado jefe de fracción del FMLN, para concluir el período legislativo. Según Sigfredo Reyes, «el consenso natural y espontáneo reconoció el liderazgo del compañero Leonel González. Nosotros no podemos más que acompañarlo y esto es una muestra de que el Partido está unido».¹⁰ La *Prensa Gráfica* destacó: «tras la muerte de Handal, Sánchez Cerén se convierte en el último de los cinco miembros de la comandancia general del FMLN guerrillero que sobrevive en el partido».¹¹ Esta decisión significaba aparentemente la continuación y consolidación de la ortodoxia en el FMLN, imagen que se mantendría hasta 2008, cuando la escogencia del candidato presidencial para 2009 reveló que el liderazgo que sucedió a Handal, era mucho más pragmático y flexible que lo que se suponía.

7. «El negociador del FMLN era Schafik», *La Prensa Gráfica* (San Salvador), 26 de enero de 2006.

8. «La sucesión pasará por un período de transición», *El Mundo* 2006 (San Salvador) 25 de enero.

9. «Sánchez Cerén y Arias disputarían la jefatura», *El Mundo* (San Salvador), 26 de enero de 2006.

10. «Salvador Sánchez Cerén, jefe de fracción del FMLN», *Diario Co Latino* (San Salvador), 27 de enero de 2006.

11. «Cerén, nuevo jefe de bancada FMLN», *La Prensa Gráfica* (San Salvador), 28 de enero de 2006.

Los funerales de Handal: punto de partida para la invención de un mito

Un revolucionario siempre debiera estar preparado para la muerte. La disposición a perder la vida en pro de sus ideales sería la confirmación de su compromiso revolucionario. La historia latinoamericana abunda en ejemplos, pero hay algunas muertes que se han convertido en leyenda, la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia, la de Otto René Castillo en Guatemala, o la de Felipe Peña Mendoza en El Salvador.¹² Handal sobrevivió a una larga vida clandestina y a doce años de guerra civil, en la cual dos de sus hermanos cayeron. Solo disfrutó de plena libertad de movimiento y expresión después de los Acuerdos de Paz. La muerte heroica en combate no sería parte de su historia.

Durante la etapa de lucha armada, miles de combatientes cayeron en combate. Entre ellos destacados comandantes guerrilleros que formaron y condujeron las fuerzas guerrilleras y que incluso en vida eran mitos vivientes por su audacia y bravura. Es más, cada una de las cinco organizaciones que formaron el FMLN tiene su propio panteón de héroes y mártires, y algunos de ellos son objeto de culto. Para los primeros años de lucha guerrillera destacan: Felipe Peña Mendoza, Rafael Arce Zablah y Lil Milagro Ramírez. En el marco de la guerra civil el listado aumentó; por ejemplo en Chalatenango, al norte del país y dominado por las FPL, se honra mucho a «Dimas Rodríguez» que cayó en el volcán de San Salvador durante la ofensiva de noviembre de 1989, y «Jesús Rojas» que murió en una emboscada del ejército en 1991. Pero ninguno de los mencionados podría convertirse en un referente ideológico e identitario del FMLN como un todo. Y no porque carecieran de méritos, sino porque sus acciones se ligan preferentemente a la organización en que militaban, y en algunos casos solo son reconocidos en territorios específicos, tal sería el caso de Rojas y Rodríguez.

Con tales antecedentes, es válido preguntarse cuáles son las razones que explican el rápido proceso de mitificación de Handal y por qué pareciera destinado a convertirse en el referente ideológico e identitario del FMLN; sobre todo considerando que hay aspectos de su trayectoria histórica que no parecen favorecerlo, por ejemplo: que él y su partido fueron los últimos en incorporarse a la lucha armada a principios de 1980, cuando otras organizaciones llevaban años en ese esfuerzo; que las fuerzas

12. La militancia no garantiza una muerte heroica. Pienso para el caso en Roque Dalton asesinado de manera oscura por sus mismos camaradas, o incluso en el trágico suceso que condujo al asesinato de Mérida Anaya Montes y el supuesto suicidio de Salvador Cayetano Carpio en 1983.

armadas de liberación (FAL)¹³ no conformaron un contingente militar numéricamente importante, ni tuvieron tanta presencia territorial como las FPL o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Además, en una lucha revolucionaria mucho del reconocimiento se logra por la participación o conducción de acciones armadas, Handal no se distinguió en este campo; durante la guerra civil pasó mucho tiempo fuera del país, ya fuera por razones de seguridad o en misiones diplomáticas para las que su nombre y el de su organización se prestaban mucho.¹⁴

No obstante, esas aparentes desventajas se compensan con otros factores a considerar. Ciertamente que la demora del PCS para entrar a la guerra y su poca capacidad militar provocaron cierto escozor en los primeros años de la década de 1980, pero luego se fue diluyendo, en parte por el fuerte protagonismo de dicho partido en la gestión de apoyo internacional.¹⁵ Handal nunca descolló como un combatiente de primera línea, para contraponerlo por ejemplo con Joaquín Villalobos, líder del ERP, que se sentía muy a gusto con el olor a pólvora y que además proyectó muy inteligentemente esa imagen a través del «Sistema Radio Venceremos».¹⁶ Pero, a posteriori, esa aparente desventaja pudo haber favorecido a Schafik, pues ni él, ni su partido se vieron envueltos en sangrientas escisiones como las que vivieron el ERP en 1975, y que terminó en el asesinato de Roque Dalton, o las FPL en 1983 con el asesinato de Mélida Anaya Montes y el supuesto suicidio de Salvador Cayetano Carpio. Durante la guerra, el PCS no fue protagonista de casos importantes de denuncias por violaciones a los derechos humanos, como sí sucedió con las otras dos organizaciones.

13. Las FAL eran el brazo armado del PCS y se constituyeron como tal el 24 de marzo de 1980 (Handal 2010, págs. 25-26).

14. En los testimonios de los combatientes del FMLN, sobre todo de las bases, se nota un cierto distanciamiento frente a la «Comandancia General», que en general convivía poco con la tropa por razones obvias, y mayor cercanía con lo que se podría llamar «comandantes de campo» que eran los que conducían las acciones armadas en el terreno. En general, hay mucha más empatía hacia los últimos.

15. Véase, «Un partido que supo ponerse a la altura de la historia» Entrevista a Schafik Handal, 1982; en (Harnecker 1988, págs. 48-58). Meses antes de lanzar su primera ofensiva, el FMLN envió comisiones a buscar apoyo internacional. Cayetano Carpio fue a Vietnam y no consiguió nada. Handal dice que cuando él llegó como representante del FMLN, los vietnamitas cambiaron de actitud; al final le dieron 13.000 armas, principalmente M-16, unos 4 millones de tiros, ametralladoras y anti tanques, RPG-4 y RPG-6 (Handal 2011, págs. 259-260).

16. La importancia que Villalobos y el ERP daba a los medios de comunicación en el marco de la guerra civil queda muy clara en: López Vigil ([UCA Editores] 1991). Las FPL fueron la otra organización que tuvo su propia radio, la «Farabundo Martí» pero nunca alcanzó la proyección de la «Venceremos». Una interesante narrativa sobre la manera cómo Villalobos se perfiló en las acciones de armas desde sus primeros años de militancia aparece en Galeas (2013).

Por otra parte, su prolongada militancia le daba un prestigio y autoridad innegable en el FMLN; después de las pugnas y purgas internas, solo Sánchez Cerén podía hacerle contra peso, pero no hay evidencia de que este lo intentara y en todo caso, de hacerlo iría en franca desventaja, pues carecía de las habilidades comunicativas y de debate que hacían de Handal un adversario temible en la tribuna (Bichkova de Handal 2010, págs. 129-132). Handal ganó mucha visibilidad y protagonismo desde las negociaciones de paz y sobre todo en el trabajo político del FMLN de la posguerra. En todo ese período estuvo en primera línea y a menudo su opinión se convirtió en posición oficial del FMLN. Y es que Handal era hombre de análisis, debate y tribuna; se movía como pez en el agua en la Asamblea Legislativa y en los actos proselitistas; no es arriesgado afirmar que mucho de su reconocimiento proviene de su accionar post Acuerdos de Paz y no necesariamente de la guerra civil.

Por último, la formal disolución de las organizaciones político-militares que conformaron al FMLN dejó en un segundo plano el tema del tamaño y el aporte de cada una de ellas al esfuerzo bélico. Cada vez más, el liderazgo de Handal se asoció más al FMLN que al PCS, sobre todo para el grueso de los simpatizantes y la población. Larga militancia, creciente protagonismo y permanente visibilidad y exposición a los medios hicieron que las «debilidades» de las etapas anteriores de su vida política fueran superadas. Cuando falleció, Handal ya ejercía un liderazgo indiscutible en el FMLN; su muerte debía conducirlo a un nivel cualitativamente superior: convertirlo en «héroe y figura mítica» del FMLN de la posguerra, proceso aún en curso y del cual solo se puede señalar el estadio actual.

«Un mar de gente»: los funerales de Handal

«No parece haber duda de que el dirigente opositor se consolidará ahora en líder histórico del partido de oposición y que su imagen se convertirá en un mito y sólido referente nacional e internacional del partido al que pertenecía». ¹⁷ Así se expresaba el analista Henry Campos, cuando el cadáver de Handal recibía honores, antes de ser sepultado en el cementerio de «Los Ilustres». Más que sagacidad analítica, sus palabras evidencian el reconocimiento de la trayectoria histórica y el liderazgo del difunto.

Y es que antes de ser sepultado, Handal recibió diversos homenajes. «Un cortejo que cubría varias cuadras acompañó ayer el traslado del cuerpo del desaparecido dirigente del FMLN... desde Capillas Memoriales hasta la Asamblea». A la cabeza de la marcha iba Jorge Schafik Handal hijo, acompañado por el coordinador del Frente, Medardo González. «Les acuerpaban

17. «La muerte del enemigo», *La Prensa Gráfica* (San Salvador), 27 de enero de 2006.

dos columnas de efemelenistas, quienes constantemente levantaban su brazo izquierdo y gritaban el nombre de su dirigente».¹⁸ Todo el trayecto había sido decorado con fotos del fallecido. Al llegar a la Asamblea Legislativa, «varios jóvenes le esperaban y a su paso entonaban el himno del Partido Comunista. Mientras dos enormes pancartas firmadas por el STISS rezaban: “Schafik, comandante general, vivirás por siempre”».¹⁹ En la Asamblea, los diputados decretaron tres días de duelo nacional, le hicieron guardia de honor y hubo discursos de estilo.

Más tarde, el cuerpo fue trasladado a la Universidad de El Salvador. Allí estuvo expuesto para que militantes y simpatizantes presentaran sus respetos. «Esta casa de la que formó parte le da la bienvenida. Schafik vuelve a su casa», dijo la rectora de la UES, María Isabel Rodríguez. Hubo un acto ecuménico en que participaron cinco iglesias. A la Universidad se hicieron presentes diversas delegaciones internacionales que venían a presentar sus respetos al líder muerto y a solidarizarse con el FMLN. Los primeros en llegar, fueron los venezolanos: «Que viva Hugo Chávez, que viva Fidel Casto», gritaban emocionados. Posteriormente se incorporaron otras delegaciones junto a miembros del Partido. Banderas del FMLN, de Cuba y de Venezuela eran agitadas a su paso. En los siguientes días el número de comitivas extranjeras aumentó, al igual que las manifestaciones de pesar en el exterior.

Para el 27 de enero, el *Diario Co Latino* estimaba que unas treinta mil personas habían rendido homenaje a Handal. Un día después, fue llevado a la emblemática «Plaza Gerardo Barrios», en el centro de San Salvador. *La Prensa Gráfica*, informaba que la plaza «lució abarrotada por los seguidores del diputado Schafik Handal, cuyos restos fueron llevados al lugar como parte de las exequias».²⁰ El cadáver volvió a la Universidad de El Salvador donde permaneció hasta el domingo 29, cuando fue llevado de nuevo a la Plaza Barrios; allí en el atrio de la Catedral se ofició una misa de cuerpo presente y posteriormente fue conducido al cementerio de «Los Ilustres» para su inhumación.

18. «Handal, la UES y el pueblo», *Diario Co Latino* (San Salvador), 27 de enero de 2006.

19. «Domingo inhuman los restos de Handal», *El Diario de Hoy* (San Salvador), 27 de enero de 2006.

20. «Una plaza teñida de rojo», *La Prensa Gráfica* (San Salvador), 28 de enero de 2006. Hay que señalar que la cobertura de los periódicos salvadoreños al deceso de Handal fue desigual y estuvo marcada por las filiaciones ideológicas de cada uno. *El Diarios de Hoy*, minimizó hasta donde fue posible el suceso, *La Prensa Gráfica* dio más cobertura, pero un análisis más cuidadoso muestra ciertos sesgos, *Diario El Mundo*, fue muy directo en el abordaje, sin omitir cierta visión de derecha y el *Diario Co Latino*, confirmó su alineamiento de izquierda. Véase Guzmán; Peraza e I. Rivera (2006, págs. 13-14).

El entierro de Handal marcó el cierre de una jornada luctuosa que se prolongó por una semana. Como era de esperarse todos los actos estuvieron marcados por la emotividad, tanto por parte de la izquierda como por la derecha. En el primer caso se destacó la larga y comprometida trayectoria política de Handal, su moralidad incuestionable, sus luchas por las libertades políticas y la democracia, así como las persecuciones, exilios y torturas que sufrió. Todo ello como consecuencia de su amor por la gente. Por parte de la derecha se reconoció su talante político, la firmeza de sus convicciones (aunque no las compartieran) y su liderazgo al interior del FMLN (con todo lo positivo o negativo que conllevaba).

El luto unificó a la militancia del FMLN en torno a la figura del carismático líder. Posiblemente buena parte de ese reconocimiento provenía del papel de Handal en la posguerra, ya que en la época del conflicto, el protagonismo había sido copado por figuras más jóvenes y de alto perfil militar. Seguramente, muchos simpatizantes de izquierda que conocían poco a Handal, se acercaron más a él en el marco de las honras fúnebres.

Los recursos memoriales para la construcción del mito

Los homenajes rendidos a Handal durante sus exequias fueron el punto de partida para proyectarlo como una figura heroica y referente identitario del FMLN, pero por sí solos no significan mucho. Al luto inmediato deben seguirle acciones sistemáticas y recurrentes en las que no solo se «recuerde» al personaje, sino que vayan agregando atributos y significados. Y es que la consagración de un héroe implica fatalmente un distanciamiento, cuando no un choque con la evidencia histórica. Es decir, el registro de los atributos del héroe pocas veces coincide plenamente con sus acciones en vida. A lo largo del proceso de «invención» hay una depuración, una selección interesada de aquellos aspectos «positivos» que se quieren destacar, y consecuentemente, la negación u olvido de otros que no concuerdan con la imagen heroica que se construye. En cierto modo, el mármol y el bronce conllevan un empobrecimiento de la figura histórica (Demasi y Piazza 2006; Menjivar Ochoa 2005).

Y ese «empobrecimiento» responde a una agenda elaborada por aquellos que impulsan el proceso y responde a sus necesidades y visiones del presente, que tampoco pueden coincidir plenamente con las acciones y pensamiento del personaje histórico. En suma, en un proceso de invención de héroe se retoman y magnifican determinados aspectos que interesa destacar y se niega o silencia otros que no encajan con la imagen que se

está elaborando.²¹ Esas selecciones no son estáticas ni definitivas y pueden cambiar a lo largo del tiempo, con lo que un determinado personaje puede tener diferentes significados en diferentes épocas. En cierto modo será una figura en permanente modelaje (Harwich 2003).

El poco tiempo transcurrido desde la muerte de Handal obliga a tratar con cautela las evidencias recogidas y a no arriesgarse con conclusiones tajantes. Pero la revisión de las iniciativas memoriales permite adelantar algunas ideas; el tiempo dirá si estas son correctas. Lo visto hasta hoy permite adelantar la tesis de que efectivamente hay actores interesados en convertir a Handal en un «héroe y referente identitario» del FMLN, y que en el corto término de ocho años ya han realizado significativas acciones encaminadas a ello. Este proceso ha sido impulsado por dirigentes del Partido – a través de acciones personales – pero también por medio de instancias como la secretaría de memoria histórica, el Instituto de Estudios Políticos «Schafik Jorge Handal», y por la familia Handal que ha apadrinado la «Casa Museo Schafik Jorge Handal» y el «Instituto Schafik Handal», ambas instancias pretenden conservar el legado del líder, por medio de exposiciones y publicaciones.

La «Casa Museo Schafik Handal» fue fundada en 2010 y «es un espacio en el cual las nuevas generaciones pueden conocer la vida, lucha revolucionaria y trayectoria política de uno de los hombres que ofrendó su vida por los cambios en beneficio del pueblo». Tiene siete salas temáticas y 885 objetos en exposición. Ofrece recorridos guiados a los visitantes, los que pueden adquirir libros sobre Handal publicados por el «Instituto Schafik Handal», así como recuerdos. Custodia además la biblioteca personal de Handal y documentos de trabajo y manuscritos aún no clasificados, ni disponibles para consulta.²²

Cada año se hacen actos en su honor para el cumpleaños y el aniversario de su muerte. Todos estos homenajes atraen a cientos de militantes y simpatizantes, pero su cobertura mediática es desigual. Los medios afines al FMLN publican notas extensas, no así los de línea más conservadora. Lo cierto es que aunque el partido pretende darles significado nacional, siguen siendo eventos cuasi domésticos, orientados a mantener y fortalecer la «memoria militante» elaborada sobre Handal, pero que a la larga impactan en un público más amplio (Sprenkels 2011b, págs. 24-25).

21. A nivel centroamericano destacan los casos de Juan Santamaría en Costa Rica, Gerardo Barrios en El Salvador y Augusto César Sandino en Nicaragua. Véase Palmer 1992; Palmer 1988; Dospital 1996 y López Bernal 2013.

22. «Schafik entregó su vida, y nos dejó un legado importante» (26/09/2013). En <http://fmln.org.sv/oficial/index.php/noticias-2/notas/2892-schafik-entrego-su-vida-y-nos-dejo-un-legado-importante> acceso 12 de abril de 2014.

Este tipo de actividades conmemorativas se ajustan a un modelo bastante predecible, no obstante conllevan mucha emotividad, la cual se canaliza por diferentes vías; desde el color rojo de las banderas y la vestimenta de los participantes, los cantos alusivos (Himno del FMLN, «El pueblo unido», «Milonga del guerrillero», y un cántico venezolano que ya se asocia profundamente con Handal: «Mi comandante se queda»); las ofrendas florales, testimonios, poemas, guardia de honor, y música revolucionaria de fondo para los discursos de estilo. Casi siempre en la víspera del aniversario de la muerte de Handal se hace una «vigilia» en el cementerio de «Los Ilustres». El público asistente generalmente se compone de militantes y simpatizantes de izquierda y algunas delegaciones internacionales.²³

Además de los aniversarios, que por su naturaleza son pasajeros, se impulsan iniciativas de más largo alcance. La escogencia del lugar para la tumba de Handal, en la entrada principal del emblemático cementerio de «Los Ilustres» evidencia que desde un inicio se concibió la tumba como un «lugar de memoria» (Nora 1997). Seguramente que el hecho de que el FMLN gobernara la alcaldía de San Salvador facilitó la asignación de ese privilegiado lugar, cuya importancia y significado se acrecentó con la construcción del mausoleo.

Efectivamente, en el transcurso de 2006 se organizó un grupo de trabajo, cuya tarea sería diseñar y construir un mausoleo digno de la memoria de Handal. La obra consistiría de una combinación de estructuras de granito rojo y un busto de Handal en bronce. El granito sería traído de África y el bronce obtenido por donaciones de material por militantes y simpatizantes. Centeno destacó el aporte de los «hermanos lejanos». El busto fue fundido en Guatemala, como colaboración de la izquierda guatemalteca. En una de las estructuras se grabaría una frase de Handal. «Que me recuerden como he sido: un luchador por mi pueblo».

Inicialmente el diseño se sometió a concurso en el país, sin embargo, las propuestas no llenaron las expectativas del comité, al parecer por el costo. «Schafik siempre fue un hombre humilde. En su casa él no vivía con muebles caros, él prefería lo menos ostentoso, prefería lo artesanal, lo hecho a mano», afirmó Centeno. Al final se asignó la obra al arquitecto

23. Véase como ejemplo, «Conmemoran nacimiento de Schafik Handal», *La Prensa Gráfica* (San Salvador), 14 de octubre de 2012. A diferencia de las otras actividades, tan comunes al registro de conmemoraciones de los héroes oficiales, la «vigilia» se asocia más a prácticas memoriales de izquierda o populares. Por ejemplo, se hacen vigiliias para conmemorar el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido en noviembre de 1989, o las masacres cometidas por el Ejército salvadoreño.

salvadoreño Leonel Mejía, al cubano Rómulo Fernández y al escultor Rafael Consuegra, reconocido en Cuba por varios monumentos al Che Guevara.²⁴

El mausoleo se inauguró el 13 de octubre de 2007, como parte de la celebración del cumpleaños de Handal: «al evento asistieron autoridades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, militantes, amigos e internacionalistas quienes le tienen un gran aprecio a nuestro compañero y comandante Schafik Jorge Handal».²⁵ Desde entonces, el mausoleo es lugar de cita obligada en cualquier actividad relacionada con Handal o evento importante para el Frente, por ejemplo aniversario de la constitución del FMLN, ofensivas militares, acuerdo de paz, inicios o cierres de campañas electorales y sobre todo para celebrar triunfos electorales.²⁶

Mucho más importante y de mayor visibilidad es el monumento levantado al final del Boulevard Constitución, al norponiente de la capital, que fue inaugurado el 24 de enero de 2011. Este monumento es el mayor construido hasta hoy en memoria de Handal, está ubicado en la nueva entrada norte de San Salvador, un lugar donde convergen los automóviles que vienen del norte, occidente y oriente del país. El conjunto comprende la plaza nominada «Schafik vive» y consta de tres estructuras de concreto. En la cima de la estructura principal se encuentra la estrella estilizada que identifica al FMLN; en la segunda el busto de Schafik. Otra de las estructuras contiene un pensamiento de Handal: «si hemos de mirar al pasado, que sea solo para extraer de él firmeza y reafirmación de nuestro carácter revolucionario». Según Medardo González, la «estructura principal, más alta que el monumento a la Constitución, expresa la firme convicción de que el pueblo es y debe ser el fundamento de toda obra de cambio, pero que a la vez, toda obra de cambio requiere de una estrella guía».²⁷ Obviamente

24. «Nuevo homenaje cultural en el cementerio de “Los Ilustres”». En <http://www.uca.edu.sv/virtual/comunica/archivo/abr272007/notas/nota21.htm> acceso el 25 de julio de 2014.

25. «Inauguran mausoleo durante cumpleaños de Schafik en el marco del 27 aniversario FMLN». En <http://cbmiguelmarmol.blogspot.com/2007/10/boletín-208-del-grupo-parlamentario-del.html> acceso 14 de agosto de 2014.

26. «El presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, inició este domingo 1 de junio de 2014, con una visita al cementerio de Los Ilustres, para dirigirse a la tumba del líder histórico del FMLN, Schafik Handal. El acto sirvió de homenaje a los largos años de lucha compartidos con su querido compañero y amigo». En <http://www.fmln.org.sv/oficial/index.php/noticias-2/notas/3765-salvador-y-oscar-visitan-tumba-de-schafik-antes-de-ser-juramentados-com-o-presidente-y-vicepresidente-de-la-republica> acceso 6 de agosto de 2014.

27. «Un monumento para perpetuar el recuerdo del comandante Simón», *Diario Co Latino* (San Salvador), 25 de enero de 2011. La misma nota explica que este monumento fue diseñado por el escultor Rafael Consuegra y el arquitecto

esa estrella es el FMLN, del cual Handal fue fundamento y por eso su rostro aparece en la base.

Al acto de inauguración asistió el entonces vicepresidente Sánchez Cerén quien aprovechó la ocasión para hablar del significado de que el FMLN gobernara el país, «en el 2009 abrimos una nueva etapa histórica en El Salvador. Ya Schafik lo intuía, lo preparaba, decía que era importante ganar el gobierno, que era necesario ganar el gobierno, pero no bastaba solo ganar el gobierno. Teníamos que hacer las transformaciones y los cambios». Para que los cambios se consolidaran se requería la continuidad de la izquierda en el poder. Por eso Sánchez Cerén remataba su discurso así: «no debemos de permitir que regrese ARENA al gobierno, ese es el compromiso que hacemos ahora ante Schafik. Vamos a trabajar para que este monumento ilumine a todo el país, ilumine a nuestro partido, ilumine a nuestra dirección y nos dé la sabiduría para saber conducir a nuestro pueblo».²⁸ Durante el emotivo acto, Tania de Handal, viuda del dirigente, resaltó con entusiasmo y a la vez con nostalgia que el monumento «es el signo de la inmortalidad» de Handal y que dicha obra «es un paso para perpetuar la memoria de Schafik y representa el inicio de un gran camino para mantener su aporte a la noble causa de la lucha por la justicia social».²⁹

Asimismo, haciendo uso de las facultades legales, diferentes gobiernos municipales del FMLN, han dado el nombre de Handal a calles y plazas o le han dedicado pequeños monumentos. Aún hace falta hacer un inventario exhaustivo; a modo de ejemplo se mencionan: la calle Schafik Handal en la exclusiva zona del paseo Escalón en San Salvador, y el monumento a los «Héroes y mártires de la revolución salvadoreña» en Mexicanos, en que figuran Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Handal y Farabundo Martí y una planta de almacenamiento de combustibles construida por «ALBA Petróleos» en Acajutla que lleva el nombre de Handal.

Es decir, a las grandes iniciativas memoriales habría que añadir homenajes a nivel local que complementan las otras aquí estudiadas. Al respecto, Sprenkels señala:

«en poco tiempo la imagen de Schafik se ha hecho de un lugar privilegiado dentro del panteón de líderes históricos de la izquierda, y su estampa ayuda a marcar territorios domina-

Rómulo Fernández, de Cuba, autores también de la cripta que guarda los restos de Handal en la entrada del cementerio Los Ilustres, lo cual explica las evidentes similitudes de diseño.

28. «Discurso de Salvador Sánchez Cerén (Leonel) en la inauguración del monumento a Schafik Hándal», <http://funde-musa.blogspot.com/2011/01/discurso-de-leonel-en-la-inauguracion.html> acceso 14 de marzo de 2014.

29. «Un monumento para perpetuar el recuerdo del comandante Simón», *Diario Co Latino* (San Salvador), 25 de enero de 2011.

dos o disputados por el FMLN... Se le encuentra en forma de murales en muchas comunidades campesinas y colonias marginales, o en las paredes de las casas de partido del FMLN y alcaldías gobernadas por el FMLN» (Sprenkels 2011a, pág. 267).

No es arriesgado afirmar que en la imaginería heroica de la izquierda salvadoreña, las más conocidas son la de Farabundo Martí, con su infaltable sombrero y la de Handal, obviamente barbado; a veces acompañados del Che Guevara o Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Entre la ortodoxia ideológica y el pragmatismo: la memoria de Handal en las elecciones

En toda contienda electoral hay una constante interacción entre pasado, presente y futuro; algunas veces explícita, la mayoría implícita. Este juego entre diferentes temporalidades fue fácilmente perceptible en las elecciones municipales y legislativas posteriores a la muerte de Handal.

En un primer momento era plausible pensar que tales comicios serían un indicador del impacto de la derrota del FMLN en las presidenciales de 2004; algunos analistas afirmaban que el Frente corría en desventaja, que la derrota de Handal en las presidenciales confirmaba que las apuestas ortodoxas restaban competitividad electoral al Partido.³⁰ Sin embargo, la inesperada muerte de Handal incidió positivamente en la moral de la izquierda. Rápidamente Handal apareció en la campaña como el referente ideológico que reafirmaba la opción radical y militante;

«Aprovechando la coyuntura y la popularidad de Handal en la campaña electoral, el FMLN usó la figura de su recién fallecido líder histórico. En distintos municipios, se vio al candidato efemelenista de la zona en afiches y pancartas que de fondo tenían la foto de Handal. En los mítines, los candidatos del FMLN hacían alusiones frecuentes al legado de su dirigente, quien había fallecido el 24 de enero, menos de dos meses antes del día de las elecciones» (Guzmán; Peraza e I. Rivera 2006, pág. 13).

La muerte de Handal también afectó al partido en el gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que de repente perdió a uno de sus principales blancos de ataque. Por años, Handal representó para ARENA la

30. En las presidenciales de 2004, Handal obtuvo 812,519 votos y Antonio Saca, candidato de ARENA, 1.314.436. Es decir, Saca logró el 62% de los votos. En http://www.tse.gob.sv/documentos/estadisticos/2004/consolidadonacional_presi_2004.pdf acceso 13 de agosto de 2014.

encarnación siempre presente del enemigo a vencer, aquel que resumía y personificaba los atávicos prejuicios y temores al comunismo. Sin Handal, el FMLN no ofrecía blancos obvios y fáciles, sobre todo en el contexto de elecciones legislativas y municipales en las que los competidores son muchos.

Handal no desapareció de la escena política; es más parecía tener una incidencia muy positiva para los intereses de la izquierda. Se confirmaba así, el análisis que el dirigente de derecha César Funes, hizo en el contexto de los funerales de Handal: «el fallecimiento de Handal podría generar un ambiente de cohesión que incluso podría ser utilizado para fortalecer la campaña alrededor de la figura del Schafik como un “luchador social” y apelar al plano emotivo. No obstante, después de pasadas las elecciones, vendrá el tema de la sucesión».³¹ El FMLN usó intensamente la imagen de Handal en la campaña, pero los resultados no mostraron una mejora espectacular.³²

Como ya se dijo, la sucesión no provocó mayor conflicto al interior del FMLN, Salvador Sánchez Cerén sucedió a Handal en la dirección de la bancada legislativa y Medardo González ya era coordinador del FMLN; ambos pertenecían al ala ortodoxa y habían liderado el proceso de unificación del partido desde inicios de la década. Si hubo debate, este no trascendió a los medios. Justamente, Handal fue uno de los que pugnó porque las decisiones más importantes del Partido las tomara la cúpula dirigente sin la participación de las bases, cuya poca formación, criterio o información podía afectar negativamente la toma de decisiones. En 2004, Handal criticaba el excesivo democratismo del Partido: «casi siempre estamos inmersos en uno de ellos, a lo largo de 4 a 6 meses, durante los cuales la militancia y sus dirigentes se absorben en los enfrentamientos internos, haciendo las delicias de los medios de derecha; dejamos de escuchar a la gente, abandonamos la elaboración de propuestas, la organización y la movilización social» (Handal 2004, pág. 8).³³

Alguna razón tenía Handal para expresarse en esos términos. Ciertamente, los procesos de elección de dirigentes y selección de candidatos a puestos de elección popular, habían degenerado a menudo en enfrentamiento de facciones. Después de los Acuerdos de Paz, el FMLN vivió

31. «La sucesión pasará por un período de transición», *Diario El Mundo* (San Salvador), 25 de enero de 2006.

32. ARENA obtuvo el 39.2 % de los votos válidos y el FMLN el 39.29 %; un virtual empate, que no obstante favoreció a ARENA que logró 34 diputados, mientras que el FMLN alcanzó 32 (*Memoria especial elecciones 2006, 2006: 203 y 226*).

33. Este fue un extenso documento de 23 páginas que Handal publicó para apoyar a Medardo González que disputaba la coordinación general del Partido con el reformista Óscar Ortiz. Al final, González ganó. «Sánchez Cerén rehabilita a los antiguos disidentes del FMLN», *El Faro* (San Salvador) 28 de abril de 2014.

sucesivas escisiones (Yañez 2014, págs. 187-190). En 1994, apenas estrenándose en la Asamblea Legislativa, perdió siete diputados cuando un grupo liderado por Joaquín Villalobos, antiguo comandante del ERP, apoyó a la derecha en una reforma tributaria. Entre 2001 y 2004, y adicionales a las tradicionales afiliaciones a las cinco antiguas organizaciones guerrilleras, al interior del Frente, coexistían al menos cuatro tendencias: la «Corriente Revolucionaria Socialista» (CRS) liderada por Handal y Sánchez Cerén (la más ortodoxa y radical); el «Movimiento Renovador», cuyas cabezas más visibles eran Facundo Guardado y Francisco Jovel; los «terceristas», liderados por Gerson Martínez; y la «Tendencia Revolucionaria», de pensamiento muy radical, pero sin expresión política organizada, conducida por Dagoberto Gutiérrez, quien por un tiempo disputó a Handal la dirección del PCS.

Las diferencias abarcaban desde la definición de la ideología del partido y su proyecto revolucionario histórico, su papel como oposición política, la estrategia electoral, etcétera. Todas implicaban en el fondo una falta de consenso sobre quiénes conducían el partido y el nivel de participación de la militancia y las bases en la toma de decisiones; es decir la «democracia interna» del partido. Luego de agrios debates y ante la imposibilidad de conciliar posiciones los disidentes fueron expulsados o abandonaron el FMLN; según fuese el grado de ruptura eran calificados de confundidos, disidentes o hasta traidores.

Las ideas de Handal y los ortodoxos se impusieron y el FMLN abandonó las elecciones primarias como método para la selección de sus candidatos. Las últimas primarias para elegir candidatos presidenciales se dieron en 2003; en ellas Handal derrotó al reformista Óscar Ortiz por estrecho margen, y en medio de denuncias de fraude. Fue así como Handal participó en las elecciones presidenciales de 2004. De allí en adelante, la escogencia de candidatos pasó a manos de los órganos de dirección.

Ese verticalismo en la dirección fue usado un par de años después para definir la candidatura presidencial para las elecciones de 2009. El 24 de enero de 2008, en la conmemoración del segundo aniversario del deceso de Handal, «cual si estuviera físicamente presente, la máxima dirigencia del FMLN rindió cuentas a su ex comandante guerrillero Schafik Handal». Como parte de esa rendición de cuentas, Medardo González informó del cambio de método para elegir a sus candidatos a fin de evitar disputas internas, tal y como había sugerido Handal. Es decir la nominación la hacía la cúpula partidaria, sin consultar a las bases. Producto de ese proceso: «tenemos el mejor candidato a la presidencia que pudiéramos querer y tener», dijo González.³⁴ Sus palabras pudieron tener varios significados;

34. «Hemos escogido al mejor candidato a la presidencia: Medardo González», *Diario Co Latino* (San Salvador), 25 de enero de 2008.

si Schafik hubiese podido oír las seguro se sentiría feliz de que el Partido siguiera sus propuestas de conducción. Pero resultó que el candidato escogido fue Mauricio Funes, el mismo al que Handal vetó en 2004, porque fue propuesto por el ala reformista liderada por Óscar Ortiz. En cierto modo, que Funes fuera «el mejor candidato», podía significar que Handal no lo había sido.

Trabajando muy hábil y discretamente, ciertos grupos propusieron al periodista Mauricio Funes como candidato a la presidencia. La jugada era arriesgada, Funes ya había sido propuesto en 2004, y rechazado por el ala ortodoxa. Argumentaron que Funes no tenía militancia histórica en el FMLN, por lo tanto no garantizaba la unidad del partido, y peor aún, la defensa de la reivindicaciones populares desde el ejecutivo. Handal triunfó en esa disputa y terminó siendo el candidato presidencial, pero desde un inicio debió enfrentar críticas internas y externas que lo calificaron como un candidato perdedor, como efectivamente sucedió. La historia reciente parecía darles la razón a quienes impulsaban a Funes; la ortodoxia de Handal (que representaba a una parte importante de la dirigencia) los había llevado a la derrota: era momento de cambiar, si realmente querían llegar al poder. Y había un factor más: Handal ya no estaba; era posible intentar acercamientos con sus herederos en el PCS que desde hacía rato mostraban un insólito pragmatismo político y económico.³⁵

Esta maniobra desconcertó a algunos analistas. Paul Lawrence señala atinadamente que «la derrota de Handal motivó un debate interno entre reformistas y ortodoxos acerca de cómo debía concurrir la izquierda a las siguientes elecciones presidenciales», y concluye apresuradamente que «los reformistas ganaron» (Colburn 2009, pág. 147; Haber 2011, pág. 147). En realidad, el proceso fue más complejo. Sin renunciar a un discurso aparentemente radical y ortodoxo, la dirigencia del PCS también había valorado los resultados de las elecciones presidenciales de 2004. Estaban tan seguros de su dominio al interior del FMLN que se mostraban dispuestos

35. Por ejemplo, Handal propuso muy tempranamente la adhesión de El Salvador a «PETROCARIBE» iniciativa de cooperación regional venezolana. El gobierno de Saca rechazó la idea, pero Handal buscó alternativas a través de las municipalidades. Trabajaba en el proyecto cuando murió; su lugarteniente Ramiro Vásquez, retomó las negociaciones hasta constituir «Alba Petróleos» que ha llegado a agrupar diferentes empresas dedicadas a la comercialización de combustibles, agroquímicos, proyectos inmobiliarios y alimentos. También incluye una financiera y una Fundación (Alba Becas) que ayuda a estudiantes de escasos recursos. Alba Petróleos se ha constituido en un importante poder económico dentro del país, aunque se define como «una empresa en función social» que apoya a sectores pobres. Alba Petróleos realizó una intensa campaña propagandística en las elecciones de 2014, y los analistas le atribuyen parte importante del triunfo del FMLN.

a arriesgarse con un candidato foráneo, si se aseguraban la conducción interna y una adecuada negociación para la conformación del gabinete. Además, la no existencia de un proceso público y amplio de discusión de la propuesta facilitó la negociación, que incluyó dar la vice presidencia a un dirigente histórico del Frente: Salvador Sánchez Cerén. En tal sentido, la victoria de los «reformistas» no significaba necesariamente una derrota de los «ortodoxos», más bien fue como ellos dirían una «retirada estratégica».³⁶

Es decir, la ortodoxia del FMLN aceptó la candidatura de Funes en la medida que no cuestionaba su hegemonía partidaria y podría facilitar un triunfo electoral que para entonces urgía. Aun así, el manejo de la campaña electoral de 2009, debió hacerse en dos vías: hacia la población no militante se destacó la apertura que significaba la candidatura de Funes; se alabó su historial como periodista crítico y comprometido con la verdad y su independencia de pensamiento. Las dudas ideológicas de la militancia del Frente se calmaron al incluir a Sánchez Cerén, como vicepresidente. En este último punto fue muy útil recurrir a Handal, cuya cercanía con Sánchez Cerén se remarcó insistentemente.

El 24 de enero de 2009, los candidatos asistieron a la conmemoración de la muerte de Handal. Medardo González expresó: «muchos creyeron que con la muerte de Schafik el Frente se vendría abajo, pero no. Hinchamos nuestro pecho para continuar porque el pueblo necesita del Frente». En el transcurso del acto, Funes y Sánchez Cerén colocaron una ofrenda floral en la tumba. «Luego de que varios radicales de ese partido exaltaran los ánimos de sus correligionarios, estos partieron en un recorrido por las principales calles del centro histórico capitalino». La actividad terminó con un carnaval en la alameda Juan Pablo II.³⁷

El FMLN ganó las elecciones de 2009 por estrecho margen, aun llevando a un candidato fresco y con mucho apoyo fuera de la izquierda tradicional. Los resultados parecían darle la razón a los que planteaban que el FMLN no hubiera triunfado con una candidatura histórica.³⁸ Llegado el momento, los ganadores dedicaron el triunfo a la memoria de Handal. El 23 de marzo, una comitiva del FMLN se concentró en su tumba. «Cumplimos con el sueño de mi padre Schafik, pero también el de muchos compañeros que siempre lucharon por el país», resaltó Jorge Schafik Handal (hijo), mientras se dirigía hacia los militantes y simpatizantes del Partido. Tania

36. Véase la entrevista a Ramiro Vásquez, lugarteniente de Handal en Martínez y Arauz (2007).

37. «Nostalgia por Schafik en militancia del FMLN», *El Diario de Hoy* (San Salvador), 25 de enero de 2009.

38. El FMLN logró el 51,32 % de los votos y ARENA el 48,68 (Tribunal Supremo Electoral 2009, pág. 87).

de Handal expresó: «si somos fieles a Schafik tenemos la obligación de ver más adelante en la búsqueda de cumplir nuestros ideales».³⁹

Durante sus primeros dos años de gobierno, Funes tuvo frecuentes choques con el ala más radical del FMLN; a menudo el discurso del partido era muy similar al que manejaba cuando era oposición a los gobiernos de ARENA. El fondo de la discordia era el aparente distanciamiento del presidente de la agenda partidaria en temas históricamente sensibles para la izquierda. Pero conforme pasó el tiempo hubo acercamientos; en la medida en que el Ejecutivo fue atacado por la derecha y la cúpula empresarial, debió buscar el apoyo de la izquierda. En el último año de gobierno, Funes y el FMLN trabajaron con mucha cercanía.

El FMLN definió muy temprano su candidatura presidencial para 2014, y aprovechando los vacíos legales hizo lo que antes tanto había criticado a la derecha: adelantó una larga campaña pre electoral – que se prolongó por más de un año – para promover a Salvador Sánchez Cerén, con el reformista Óscar Ortiz como compañero de fórmula.

Esta vez el FMLN presentó a dos comandantes guerrilleros históricos. Aunque Ortiz fue por varios años un crítico acérrimo a la conducción ortodoxa, en varias ocasiones al borde la expulsión, terminó aceptando acompañar a Sánchez Cerén, a condición de tener un papel mucho más protagónico en el gobierno. La contienda electoral limó asperezas entre Funes y los sectores más radicales del Partido, al grado de que el presidente fue el principal activista de la campaña del FMLN. Convirtió el programa radial sabatino «Conversando con el presidente» en una tribuna de denuncia y ataque contra ARENA, y llamó a votar contra la derecha incluso un día antes de las elecciones. En vano ARENA denunció a Funes ante el Tribunal Supremo Electoral; las demandas no prosperaron, tardaron en ser retomadas y cuando hubo alguna sanción, esta resultó ineficaz para contener al furibundo Funes.

Curiosamente, cuando el FMLN llevó en su fórmula presidencial a dos comandantes históricos, la figura de Schafik Handal desapareció del escenario electoral. El FMLN trató a toda costa de distanciarse de su pasado guerrillero; por el contrario se presentó como un partido que miraba al futuro y evitaba la confrontación ideológica. Las imágenes de su propaganda electoral abundaron en llamados a continuar «el cambio», a la reconciliación, a favorecer a niños, jóvenes y ancianos por medio de programas sociales aumentando la inversión en salud y educación.

Cuando fue candidato a la vicepresidencia en 2009, Sánchez Cerén sufrió los tradicionales ataques de la derecha que lo acusaba por la destrucción causada en la guerra, su responsabilidad en asesinatos y secues-

39. «Celebran triunfo electoral frente a la tumba de Schafik», *Diario Co Latino* (San Salvador), 23 de marzo de 2009.

tros, y sus simpatías por el régimen castrista. ARENA intentó aplicar la misma estrategia en 2014, pero no tuvo éxito; en parte porque el FMLN diseñó una campaña que no se prestaba a la tradicional confrontación derecha-izquierda.

La campaña del Frente fue mediáticamente perfecta: mucho colorido, una propaganda en los medios, alegre y aparentemente no ideologizada, y con mensajes dirigidos a blancos específicos: campesinos, mujeres, jóvenes, etcétera. Es decir, atendió a lo que se sabía preocupaba a los votantes en el día a día, por ejemplo, el mantenimiento o ampliación de los subsidios, mejoras en educación, salud, carreteras, etcétera. Cuando era inevitable se tocaba marginalmente temas más complejos como la delincuencia y la economía, sin comprometerse a nada. Se ignoró absolutamente temas fundamentales, pero electoralmente incómodos como fiscalidad, sistema de pensiones y endeudamiento estatal. Fue una campaña vacía de discusión política, nada parecida a lo que Handal gustaba de hacer, pues él siempre decía que los procesos electorales debían servir para educar políticamente al pueblo.

El FMLN hizo una campaña muy larga, costosa y en cierto modo ilegal (algo que antes criticaba a ARENA). El temprano nombramiento de su candidato, a quien todas las encuestas situaban muy mal en la opinión pública, fue una jugada arriesgada, pero al final funcional. El poco debate interno que hubo, se dio temprano, y se diluyó igual. Se mostró preferentemente la faceta civilista y familiar de Cerén (vicepresidente, ministro de Educación, esposo y abuelo ejemplar), borrando cualquier alusión a su pasado guerrillero y militante.⁴⁰

Los diseñadores de la campaña sabían que Sánchez tiene muchas dificultades para comunicar en público y manejar el debate en los medios, así que no lo expusieron innecesariamente; durante buena parte de la campaña, lo mantuvieron alejado de los medios, no dio entrevistas, no se pronunció sobre temas importantes. Solo apareció ante las cámaras, cuando el escenario político ya le era favorable.

El FMLN como tal, mantuvo una posición intermedia. Siguió atacando a ARENA cada vez que la oportunidad se presentaba, pero sin entrar en un debate ideológico de fondo. Los temas preferidos fueron las acusaciones de corrupción, la tendencia de ARENA a favorecer a los más ricos

40. Durante la guerra civil, las FPL fueron acusadas de ser una organización radical e intolerante. Uno sus comandantes, Mayo Sibrián, dirigió una sangrienta campaña de depuración interna que llevó al asesinato de cientos de combatientes y militantes, a quienes se acusó de haber infiltrado la organización. Ante las muchas denuncias, y ya al final de la guerra civil, Sibrián fue enjuiciado y ejecutado. A Sánchez Cerén se le acusó de haber tolerado esos excesos. Véase Galeas y Ayala (2008).

y desproteger a los pobres, etcétera. Claro, en actividades internas su discurso era más radical. Los dirigentes del FMLN insistían en que hacían una campaña limpia y basada en resultados y propuestas; cuando era indispensable, aclaraban que no les interesaban los debates en los medios, porque ellos debatían día a día con la población. Cuando al final se realizó un debate televisivo, se negoció tan cuidadosamente el formato que en ningún momento las debilidades de su candidato quedaron expuestas.

En este contexto no resulta extraño que Schafik Handal, el ícono y referente identitario del FMLN, desapareciera del escenario electoral y la campaña mediática. Su discurso ortodoxo y radical que siempre iba a la médula de los problemas, su imagen barbada y ceñuda y su cercanía con la Cuba castrista y la Venezuela de Chávez, no encajaban con la campaña electoral *light* que el FMLN impulsaba.⁴¹ En realidad, Handal no desapareció del todo. Cada vez que el FMLN tenía un acto proselitista se le mencionaba y se reconocía su liderazgo, pero estas alusiones eran de consumo estrictamente interno y entre gente de comprobada afinidad ideológica. Al final, el FMLN ganó de nuevo la presidencia, aunque debió ir a segunda vuelta.

Epílogo

A diez años de su fallecimiento, la memoria de Handal no solo permanece sino que parece consolidarse. Esto se ha debido al esfuerzo sistemático de diferentes actores, entre los que destacan el FMLN como tal y la familia Handal. Cada uno a su manera ha ido creando instancias para conservar y proyectar a la militancia, simpatizantes y población en general, una imagen de Handal que se acomoda a sus visiones político-ideológicas y a la veneración que guardan hacia el personaje.

Este proceso ha definido una serie de atributos que perfilan al Handal «héroe en construcción». Entre estos se destacan: larga militancia, liderazgo, habilidad política, solidez ideológica, honestidad y unidad. Destacar estos atributos ha implicado negar o minimizar, ciertos hechos; por ejemplo, que su larga militancia no significó necesariamente una visión de izquierda radical; que el liderazgo de Handal en el FMLN solo se consolidó después de los Acuerdos de Paz; que el «radicalismo» aparente de Handal y el PCS, no tiene fundamento histórico, por el contrario, muchas de sus

41. Hay que señalar que desde hace rato las campañas electorales han dejado de ser fenómenos político-ideológico y se han convertido en un asunto de *marketing* y manejo de medios. El diseño e implementación de la campaña no recae en las dirigencias de los partidos, sino en empresas y «gurús» expertos en el tema; son ellos los que marcan las pautas del discurso, proponen la «imagen» del candidato y deciden qué temas estos discutirán y cuáles no.

disputas con otros líderes y organizaciones de izquierda se debieron a que por mucho tiempo, Handal y el PCS mantuvieron una posición más bien reformista, orientada a disputar el poder por la vía electoral con miras a construir una «democracia burguesa» que más adelante permitiera la búsqueda de la revolución socialista. Ciertamente, Handal fue factor importante para que el FMLN superara sus divisiones internas, pero esto solo fue posible a costa de la expulsión o salida de aquellos líderes y militantes que no compartían su visión.

Desde 2009, el FMLN tuvo que flexibilizar su discurso y posiciones ideológicas, lo cual implicó distanciarse de los rígidos planteamientos de Handal. Temas que por años fueron banderas de lucha del Frente debieron posponerse; se dejó de hablar de lucha de clases y de revolución. Después de ganar dos elecciones presidenciales continuas, pareciera que la decisión fue correcta. Persiste la duda, si este cambio, es solo una estrategia – como alguna vez lo dijo Ramiro Vásquez – o si realmente el Partido ha renunciado a su histórico radicalismo y optado por una vía reformista a través de la competencia democrática electoral. En cualquier caso, Handal tendría mucho que decir y mucho que debatir.

Capítulo 7

El pensamiento político latinoamericano y su recepción, creación y circulación en MIR chileno

Ivette Lozoya López

.....

Entre 1965 y 1973 se produce en Chile una concentración de intelectuales latinoamericanos y latinoamericanistas excepcionalmente amplia que además están en el período más prolífico de su vida intelectual.¹ Esta confluencia coincide con un proceso creativo original continental a gran escala que se potencia con los vínculos, redes y las políticas de estímulo y difusión del pensamiento local desarrolladas en la época. En Chile, esta potencia creadora continental entronca con una realidad política muy estimulante que enfrentaba a distintos proyectos que se disputaban la conducción del país. Los intelectuales que convergen en este Chile en transformación van a involucrarse en la realidad política, van a formar parte de la pugna y muchos de ellos van a nutrir las filas de las distintas organizaciones políticas, una de esas organizaciones es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria que adscribe a la lucha armada e intenta desde fuera de la institucionalidad lograr el salto revolucionario. Explicar cómo el MIR se transformó en un espacio de recepción, circulación y creación del pensamiento de estos intelectuales latinoamericanos y latinoamericanistas es el objetivo de este artículo.

Establecer un nexo entre la teoría social, los cientistas sociales y la violencia revolucionaria no parece ser una tarea fácil, menos aún en Chile, donde las interpretaciones históricas y los discursos políticos sitúan a la violencia como un fenómeno excepcional e irracional que irrumpe en un momento específico como una anomalía dentro de la esencia democrática e institucionalista nacional. Más específicamente, la violencia revolucio-

1. Agradezco enormemente las conversaciones e intercambios de ideas con los profesores Eduardo Devés y Carla Rivera Aravena que me permitieron ampliar las reflexiones sobre este tema.

naria parece no tener vínculo con la identidad popular en Chile por lo que suele ser definida como un acto solo de voluntarismo político sin vinculación con proyectos serios y con posibilidades de materializarse.

Sin embargo, si indagamos en el período que va desde la Revolución Cubana – por señalar un acontecimiento simbólico – y el golpe de Estado en 1973, veremos que la violencia, lejos de ser un fenómeno marginal o excepcional, fue un fenómeno central en la política y la identidad de amplios sectores de la población chilena. La violencia se pensó, se practicó y se enarboló no solo por el Estado a través de la represión y el control, sino también, desde proyectos civiles que dotaron a la violencia de una ética y objetivos específicos (Goicovic 2004 y 2013).

Basado en las reflexiones anteriores, resulta interesante indagar en cuáles son los motivos por los que un grupo de sujetos de elite y vinculados a las letras y la reflexión teórica se vincularon durante los años sesenta en proyectos revolucionarios en Chile, cuáles son los argumentos que esgrimían para justificar la lucha armada en un país donde los espacios democráticos estaban abiertos y siendo exitosos y, de qué manera el pensamiento latinoamericano aportó a la definición del MIR y cómo la organización revolucionaria contribuyó a su vez al pensamiento político local. Importante también es indagar en las condiciones que hicieron posible esos vínculos y aportes.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria fue fundado en Chile en 1965 en la época de máxima difusión de la vía revolucionaria pero también en el período de máxima genialidad intelectual en América latina. Esta organización adoptó como estrategia para la llegada al socialismo la vía armada y en sus primeros años estableció un vínculo militante y de colaboración estrecha con varios intelectuales latinoamericanos que para entonces residían en el país.

Durante las décadas del cincuenta y sesenta, Chile desarrolla una importante infraestructura académica que le permite recibir a una gran cantidad de intelectuales y científicos sociales convirtiéndose en un espacio de creación y confluencia del pensamiento latinoamericano y latinoamericano. La instalación de instituciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con sede en Santiago o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y algunas de carácter local como las escuelas de sociología o los organismos de investigación como el Centro de Estudios Socioeconómico (CESO) o Centro de Estudio de la Realidad Nacional (CEREN) se transformaron en espacios de atracción tempranos para los científicos sociales de América Latina. Es así que entre los años 1965 y 1973, etapa de fundación del MIR, un grupo importante de intelectuales no solo se habían instalado académicamente

en el país, sino también tenían una estrecha relación con la política local (Lozoya 2013).

Los importantes cambios acontecidos en el continente y el enfrentamiento entre proyectos interpelan a los científicos sociales y les exigen compromiso, la revolución no se piensa, se hace, por lo que bajo estos presupuestos de época, los intelectuales nutrieron las filas de los partidos y se involucraron en los proyectos y ensayos reformistas o revolucionarios.

Es posible entonces estudiar desde una perspectiva distinta a las organizaciones político militares de la región, analizándolas como espacios de reflexión y circulación de ideas; en este caso el objetivo es analizar la discusión político teórica en la que están involucrados los intelectuales militantes y colaboradores del MIR. En un ejercicio de esquematización dividiremos esta primera época del MIR en tres períodos identificando vínculos intelectuales, circulación de ideas y reflexiones desde la militancia.

Período fundacional influencia trotskistas y escisiones de la izquierda tradicional (1965-1967)

El MIR se funda luego de la victoria del candidato de la Democracia Cristiana Eduardo Frei a la presidencia del país, dicho resultado generó en un sector de la izquierda un pesimismo respecto a la posibilidad de llegar a la conducción del Estado a partir de la vía electoral. En este contexto un grupo importante de militantes del Partido Socialista se había retirado de la organización por sus diferencias con la forma de abordar la campaña presidencial acusando al partido de derechización en pos de los objetivos electorales. Este grupo de militantes van a acercarse a un sector de la izquierda obrerista y otros sectores críticos escindidos del Partido Comunista que habían realizado algunos intentos de construcción orgánica desde los años cuarenta en adelante, adoptando posiciones revolucionarias en la última década. Todos estos sectores confluyeron en la fundación del MIR.

El origen del MIR entonces, no fue el simple reflejo o imitación de la Revolución Cubana, sino que respondía a los propios procesos de radicalización de la política nacional. En ese sentido existía por parte de los intelectuales que lo fundan una discusión teórica y una evaluación de las condiciones políticas del período que sustentaron su adscripción a la vía revolucionaria.

En los años iniciales del MIR confluyeron tres líneas de pensamiento en desarrollo en Latinoamérica desde la década del treinta, estas estuvieron representadas por tres personalidades: Oscar Waiss, Luis Vitale y

Clotario Blest.² El primero de estos sintetizaba las críticas al estalinismo y la creación de una corriente filotrotskista en latinoamérica, Vitale por su parte, integró una visión latinoamericanista de la historia que diferencia las experiencias del continente de aquellas vividas por Europa, mientras que Blest, a su experiencia como dirigente obrero sumó la recepción de las transformaciones del pensamiento cristiano a partir del Concilio Vaticano II. Las expresiones escritas del pensamiento de estos intelectuales y la justificación de su adhesión a la lucha armada la encontramos en la revista teórica del MIR, *Estrategia*.

Publicada entre los años 1965 a 1967 *Estrategia* se definía como un órgano de elaboración teórica que buscaba contribuir a enriquecer el programa de la revolución socialista chilena, se definía también como una «tribuna abierta a todas las corrientes del pensamiento marxista revolucionario [que] aspira a superar el viejo pasado sectario y dogmático ofreciendo generosamente sus columnas a todas las tendencias marxistas que quieran expresar libremente sus puntos de vista» (*Estrategia*, noviembre 1965).

El primero de los intelectuales fundadores del MIR que analizaremos será Oscar Waiss. Abogado de profesión, escritor y periodista de oficio había hecho una trayectoria intelectual estudiando el socialismo chileno y al momento de su participación en la fundación del MIR tenía publicados varios libros que lo instalaban en las discusiones de la región sobre nacionalismo, socialismo y vía revolucionaria.³ Los textos de Waiss circularon por América Latina e incluso fueron editados en Argentina.

En 1961 Ediciones Socialismo editó uno de sus artículos antes publicado en Argentina lamentando la poca publicación de textos que aporten al pensamiento socialista y denunciando que «la esterilidad intelectual y teórica, suelen convertirse en una traición al socialismo» (Waiss 1961). Para los editores, en Cuba, Perú, Venezuela, Uruguay había experiencias revolucionarias esperando orientaciones adecuadas, «que bien podrían, en una proporción relativamente importante, provenir de Chile» (ibídem). La reflexión del chileno se desprendían de las críticas a los partidos tradicionales que se propagaban en América Latina de la mano del trotskismo y profundizadas bajo la influencia de la Revolución Cubana y superando el nacionalismo populista que en algún momento el propio Waiss defendió,

2. En el caso de este último no es un sujeto que cumpla la función social de intelectual; sin embargo para el objeto de este estudio es lo que llamamos militantes intelectuales refiriéndonos a aquellos que sin ser trabajadores intelectuales logran sistematizar la experiencia o crear teoría.

3. Sus publicaciones políticas más importantes al respecto fueron *Problemas de socialismo contemporáneo* (1961); *Vía pacífica o revolución* (1961), *Nacionalismo y socialismo en América Latina* (1961); *Basura teórica y traición política* (1964), *El espejismo del 64* (1964).

cuando junto a una de las escisiones del Partido Socialista de Chile, apoyó la candidatura de Carlos Ibañez del Campo.

El artículo publicado por Waiss en la revista *Estrategia* titulado «La metamorfosis» nos presenta la síntesis de su pensamiento, que en definitiva es también la síntesis de una generación, la reflexión sobre una época de escisiones y confluencias, agitación, construcción obrerista e intentos reformistas que terminaba con el último fracaso para la izquierda, el de la vía electoral. En su síntesis de época Waiss afirmaba:

«Lo que hasta promediar el año 1960 podía considerarse como desviaciones oportunistas, se ha transformado de una manera irreversible en traición política y teórica que ha convertido, tanto al Partido Comunista como al Partido Socialista, en aprendices de régimen de la democracia burguesa. Es decir, la metamorfosis se ha consumado, y el lugar de la vieja socialdemocracia, con su insondable abismo de corrupción y de ilusiones en las reformas concedidas por los órganos del poder burgués, ha sido ocupado en gloria y majestad por los partidos tradicionales de la clase obrera» (Waiss 1965).

Waiss y un sector de la izquierda rechazaban la estrategia electoralista que habían adoptado los partidos tradicionales de la clase obrera acusándolos de renunciar a sus principios revolucionarios subordinando los intereses populares a las ansias de poder de sus cúpulas, de esta manera es posible entender la búsqueda de alternativa en varios sujetos críticos a los partidos Comunista y Socialista como una forma de actualización del ideal revolucionario en concordancia con los tiempos y en oposición al comportamiento de la izquierda chilena.

Si Waiss sustenta su adscripción a la lucha armada en el período fundacional del MIR en la crítica a los partidos y su estrategia electoral, Luis Vitale la justifica en el análisis de la formación social chilena. Vitale, historiador, argentino de origen, residente en el país desde una década antes de la fundación del MIR y representante del trotskismo chileno, por esos mismos años comenzaba a dar clases en la Universidad de Concepción y publicaba el tomo primero de ocho de su *Interpretación marxista de la historia de Chile*. Los estudios de Vitale sobre la formación social chilena, el carácter de la burguesía latinoamericana y el modo de producción en América Latina, lo sitúan en las discusiones continentales dadas desde los años treinta en la búsqueda de la estrategia de desarrollo para el subcontinente y nos permiten entender su adscripción a la organización revolucionaria como parte de su análisis de la realidad continental; para Vitale debido al desarrollo del capitalismo y las condiciones de la lucha de clases en América Latina los sectores populares debían desestimar la alianza de

clases propuesta por el PC y avanzar directamente hacia la construcción del socialismo, lo que implicaba una oposición y no una colaboración de clases.

El número 5 de la revista *Estrategia* estaba íntegramente dedicado al texto de Luis Vitale titulado «América Latina ¿feudal o capitalista? ¿Revolución burguesa o socialista?». En aquel texto, el historiador militante se hacía cargo de la discusión respecto a la revolución por etapas en América Latina, la conciliación de clases y el carácter de la formación social chilena y latinoamericana. Dedicado en homenaje a los argentinos Milcíades Peña y Ángel Bengoechea, en su texto decía coincidir con las apreciaciones de André Gunder Frank respecto a que América Latina no poseía una formación social de carácter feudal sino capitalista.⁴ Argumentaba caracterizando el proceso de conquista como una empresa dentro del desarrollo del capitalismo y definía a la elite criolla que materializó la independencia como «una clase que aspira a gobernarse a sí misma» y por lo tanto como burguesía, este aspecto subjetivo le permitió discutir con las tesis del historiador militante comunista Hernán Ramírez Necochea, aunque coincidía con él en que la elite local no desarrolló una revolución democrática burguesa (Vitale 1966).

Las tesis desarrolladas por Vitale no buscaban discutir con los intelectuales liberales y conservadores –aunque el texto lo hacía– sino contradecir las tesis del «reformismo» sustentadas en aquellos análisis. En su crítica señala

«la estrategia política de los revisionistas se basa en la teoría de la revolución por etapas. Como según ellos, América Latina ha sido dominada por la oligarquía feudal, es necesario primero hacer la revolución antifeudal, a cuya cabeza debe ponerse la burguesía progresista (...). La historia ha demostrado que esta burguesía es incapaz de realizar las tareas democrática.

»La táctica de la vía pacífica está determinada por la teoría de la revolución por etapas. Los revisionistas garantizan a la respetable matrona burguesa que el parto de la revolución antifeudal será sin dolor. De lo contrario, no se concibe como esta señora entraría a un frente en el que actuaran desorbitados partidarios de la vía violenta; esos guerrilleros que sin respetar las buenas maneras y los pactos de caballeros pueden saltarse las etapas convenidas expropiando no solo al imperialismo y a la “oligarquía feudal” sino también a sus propios patrones criollos: los industriales progresistas.

4. El artículo de Frank al que se refiere Vitale es el aparecido en la revista *Monthly Review* en agosto de 1964 titulado «Feudalismo no: capitalismo».

»La nueva generación latinoamericana (...) sabe que hay un solo camino para derrotar a los enemigos seculares del atraso continental: *la insurrección popular armada para implantar el socialismo*» (ibídem, el énfasis es del original).

Los análisis de Vitale se afirman en investigaciones y apreciaciones realizadas por latinoamericanos y latinoamericanistas como Silvio Zabala, Nahuel Moreno, Marcelo Segal y Sergio Bagú aparte de los ya mencionados Peña y André Gunder Frank. Podemos reconocer así un núcleo de pensamiento que está reinterpretando la historia latinoamericana y que sirvieron de sustento para las tesis políticas revolucionarias que se levantaron en el período.

La discusión sobre el modo de producción latinoamericano se origina en las ciencias económico-sociales ocupadas principalmente de la transición de un modo de producción a otro y desde ahí – como lo plantea Devés – «salió centrifugada para ir a clavarse en la historiografía clavando también en la filosofía y en los estudios sobre la cultura» (Devés 2003), es así entonces cómo las preocupaciones de economistas y sociólogos latinoamericanos por determinar las condiciones de la sociedad latinoamericana para diseñar políticas de intervención, terminan impactando en interpretaciones del pasado y sustentando proyectos de futuro, en este proceso son recepcionadas por Vitale e incorporadas al MIR.

Finalmente en esta etapa, una de las personalidades relevantes en la fundación del MIR fue Clotario Blest, ex seminarista, dirigente gremial de los empleados fiscales y fundador de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT). Blest incorpora al MIR no solo su experiencia en la organización obrera y su liderazgo ampliamente respetado, sino también una lectura creativa del cristianismo construida desde su juventud a partir de su participación en círculos de estudio con influyentes sacerdotes y laicos cristianos, desde donde pudo recepcionar las nuevas lecturas del cristianismo a partir del Concilio Vaticano II y las orientaciones más progresistas salidas desde la Universidad de Lovaina, la misma universidad de formación de Camilo Torres y Alberto Hurtado (Echeverría 1993).

Previo a la fundación del MIR y en paralelo con sus últimos años de dirigente de la CUT, Clotario Blest se convirtió en un promotor de la Revolución Cubana, veía a la insurrección popular como la estrategia para la terminar con las injusticias sociales y concordante con esto funda en 1962 el «Comité Latinoamericano por la Guerrilla», siendo su primer objetivo emitir “bonos solidarios”, que tenían por fin promover la compra de plasma sanguíneo y elementos de primeros auxilios para las columnas guerrilleras que combatían» (ibídem).

La recepción de los cambios en la Iglesia Católica y la lectura latinoamericana del cristianismo y el marxismo se materializaba en la fundación del

Movimiento Camilo Torres en el que Clotario Blest participó y que servía para articular a los cristianos revolucionarios dentro y fuera del MIR. El 25 de diciembre de 1967, el Movimiento Camilo Torres haciendo eco del pensamiento del cura colombiano, reparte en la misa de Nochebuena una declaración que se iniciaba citando la Biblia. El texto señalaba «si alguno tiene bienes de este mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios? Juan 3,17» y a continuación citaba a Camilo Torres señalando: «por eso la REVOLUCIÓN no solamente es permitida sino obligatoria, para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos».⁵

El texto denunciaba la navidad diferente para ricos y pobres y calificaba a estos últimos como «los condenados de la tierra explotados por el imperialismo internacional del dinero y muertos una y otra vez en los conflictos armados realizados en nombre de la civilización cristiana occidental». Aludiendo al ejemplo del cura guerrillero y a las enseñanzas del Papa Juan XIII y de Paulo VI reafirmaban su compromiso «hasta las últimas consecuencias con los explotados» y la «solidaridad activa con los pueblos que luchan con las armas en la mano para liberarse de los opresores foráneos y nacionales» y terminaba señalando que «el deber de un revolucionario es hacer la revolución y que el deber de un cristiano es ser revolucionario»,⁶ de esta manera Blest encontraba en las propias enseñanzas del cristianismo los argumentos para vincularse a un proyecto como el del MIR.

Aparte del aporte directo de los intelectuales fundadores del MIR, podemos – a través de la revisión de los artículos aparecidos en la revista *Estrategia* – reconocer la lectura que la nueva organización hacía de la realidad latinoamericana, los vínculos con intelectuales de la región y la recepción de las teorías revolucionarias que se difundían por el continente. En el número 3 de abril de 1966 se publicó un artículo de Quijano (1966) bajo el seudónimo de Silvestre Condoruna titulado «Las experiencias de las últimas etapas de las luchas revolucionarias en el Perú» donde analizaba la historia peruana desde mediados de los años cuarenta. Quijano hablaba de la gran desorientación de los sectores populares al no ser reconocidos en sus necesidades por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que terminó haciendo alianza con la oligarquía, sin embargo reconocía que estos tampoco habían sido capaces de dotarse de una organización de clase que condujera las transformaciones.

5. *Declaración de Navidad*, Movimiento Camilo Torres, 25 de diciembre 1967. En <http://www.ruinasdigitales.com/cristianismoyrevolucion/cyrchiledeclaraciondenavidaddelmovimient6/>

6. *Ibidem*.

El sociólogo planteaba que «la racionalidad sistemática de la totalidad de la experiencia revolucionaria de la última década latinoamericana, es la condición *sine qua non* a partir de la cual sea posible la progresiva elaboración de una teoría de la revolución latinoamericana, sin la cual ya no parece posible, de ninguna manera, el logro de las metas revolucionarias»(Quijano, 1966).

Esta apreciación la podemos instalar en la reflexión general sobre las ciencias sociales que se daba en el continente desde hace una década. El proceso de fundación e institucionalización de las ciencias sociales durante los años cincuenta comprendía también reflexionar sobre su utilidad. En el contexto de búsqueda de caminos propios para el desarrollo de América Latina los científicos sociales se pusieron a disposición de los proyectos nacionales, es así como las ciencias sociales nacen politizadas – para algunos ideologizadas – y desde mediados de los sesentas la reflexión salta desde la vinculación y colaboración con el Estado al cuestionamiento de este generando una propuesta de revolución del pensamiento y de las estructuras, en esta reflexión se inscribe la adhesión de algunos científicos sociales a los proyectos armados.

El MIR entonces, en sus orígenes justificará su definición como organización revolucionaria no solo a partir de la coyuntura interna, sino compartiendo una lectura y un itinerario común para América Latina. A partir del aporte de los intelectuales fundadores y miembros de su primera dirección se dotará de una lectura de la formación social latinoamericana y una mirada histórica de la realidad chilena, recogiendo también las discusiones dadas en el continente respecto a estos puntos. Basándose en el análisis de procesos latinoamericanos como la Revolución Cubana, la experiencia aprista peruana, las tempranas dictaduras de Argentina y Brasil desecharon la idea de la revolución por etapas y la alianza de clases proponiendo en cambio la vía insurreccional revolucionaria.

De la experiencia revolucionaria adquirida en el continente y sin precedente en el país, el MIR desarrollará también la convicción de que era necesario crear una teoría para la revolución y que esta debía ser latinoamericana.

Miguel Enríquez, Bautista Van Schouwen y las reflexiones sobre la estrategia y el poder popular (1967-1969)

Junto con los experimentados dirigentes e intelectuales concurrieron a la fundación del MIR o se fueron sumando en sus primeros años, un grupo de jóvenes influidos por las tesis revolucionarias de la época y sin la carga de la tradición política nacional. Ese sector desde el año 1967 y luego del Tercer Congreso accedió a la conducción de la organización.

Los jóvenes eran líderes destacados en sus espacios de formación universitaria, con tempranas militancias en las organizaciones tradicionales chilenas y con recientes rupturas respecto a estas. Estos inexpertos pero brillantes militantes se van a conformar como teóricos revolucionarios a partir de la práctica política y la relación con la experiencia y el pensamiento latinoamericano. De estos destacan los integrantes de la Dirección Nacional y referentes del mirismo hasta la actualidad, Miguel Enríquez y Bautista Van Schouwen. El Tercer Congreso de la organización había desplazado a los más veteranos fundadores y había instalado a la nueva generación, lo que significó también la desestimación de las tesis insurreccionales aprobadas en el Primer Congreso y la aprobación de la tesis foquista, la que posteriormente fue enriqueciéndose llegando a conformarse en una reflexión profunda a partir de las experiencias latinoamericanas pero reconociendo las características específicas nacionales.

Los años iniciales de militancia de Van Schouwen y Enríquez fueron de una incorporación sin crítica del modelo guerrillero de la Revolución Cubana que se tensionaba, sin embargo, con la lógica insurreccional definida desde las visiones más clásicas de los militantes de tradición obrerista. Por otro lado, el MIR lejos de levantar focos guerrilleros desarrollaba una rápida inserción social que se articulaba a través de la creación de los frentes de trabajadores, estudiantes y pobladores. La adscripción al modelo cubano está influida por el viaje que Miguel Enríquez realiza a la isla en 1967 previo al Tercer Congreso y a la difusión que tuvieron los escritos de Regis Debray y los del propio Ernesto Guevara. La revista *Punto Final*, publicación afín con la vía revolucionaria fundada en 1965 y cuyo director y muchos de los colaboradores eran militantes del MIR, fue el principal medio por el cual se difundieron esos escritos (Lozoya 2013).

La interpretación de Regis Debray sobre la Revolución Cubana permitió que se difundiera la imagen de un tipo de revolucionario que valoraba la violencia popular como acción revolucionaria en sí misma, esta «desviación» se sustentaba en la creencia de que la revolución era la guerra misma y no la construcción de las nuevas relaciones sociales, en ese sentido, la frase «el deber de todo revolucionario es hacer la revolución» era entendida como si hacer la revolución era hacer la guerra. Esto exacerbó la reflexión en torno al tema de la estrategia militar y no respecto a la construcción de movimiento popular o a cómo sería la sociedad que se debía construir.⁷

7. En Cuba, luego del triunfo de la guerrilla la reflexión intelectual en espacios como la Facultad de Filosofía de la Universidad de la Habana y la revista *Pensamiento Crítico*, se orientó hacia el cómo debe ser la construcción de la sociedad socialista, esa reflexión se interrumpió cuando las urgencias de la subsistencia genera la adscripción al modelo soviético (Martínez Heredia 2010).

Pese a lo anterior – y a que las reflexiones y balances posteriores Miguel Enríquez planteaba que la diferencia fundamental de su concepción revolucionaria y la de los fundadores tradicionalistas era la decisión cierta de desarrollar la lucha armada – (M. Enríquez 2005)⁸ el MIR limita sus acciones armadas entre 1969 y 1970 a escuelas de formación militar, acciones de financiamiento y acciones de sabotaje menor hasta que la dirigencia se compromete con Salvador Allende a no realizar más acciones de esta naturaleza, así, podemos hablar más de una retórica violenta que de un desvío militarista. El MIR había definido que la violencia era el único camino y la forma que debía tomar la revolución era la guerrilla, integrando al pueblo al ejército revolucionario desde la instalación de los primeros focos,⁹ no obstante, podemos ver una contradicción entre la práctica política de la organización y la definición ya que el fuerte del período era la inserción en las masas y el desarrollo de los frentes de estudiantes, pobladores y el de trabajadores.

Las reflexiones sobre la estrategia se fueron complejizando a la luz de las circunstancias nacionales, haciéndose parte de las reflexiones sobre los sujetos populares urbanos y rurales que habían dado ya los sociólogos dentro de la llamada teoría de la marginalidad que no eran desconocidas para la elite intelectual miristas ya que una de las líneas de esta teoría, elaborada por Roger Veckeman, había permitido la creación de la política de Promoción Popular del gobierno de Frei (Lozoya 2013). En esta perspectiva, la visión que el MIR levanta sobre los marginados del campo y la ciudad son una respuesta también a la lógica integradora del gobierno reformista de la Democracia Cristiana.

La diversidad de frentes en los cuales la organización tenía inserción y la complejidad de las tareas políticas y militares permitieron la creación de los grupos políticos militares que eran células con base territorial y que dan cuenta de la complejidad que va adquiriendo el pensamiento y la creación en torno a la estrategia. En lugar de un aparato armado se crean unidades que desarrollen la política y las tareas militares y que desarrollen el vínculo entre las masas y el partido.

Las reflexiones respecto a la estrategia tuvieron en cuenta el éxito militar de la Revolución Cubana, pero también el fracaso de la incursión del Che en Bolivia, además, Miguel y Bautista formaron parte de círculos intelectuales donde estos temas se debatían. En una entrevista a Eduardo Cabieses citada por Mario Amorós, este resalta las dotes intelectuales de Miguel Enríquez y la buena impresión que se llevaban los intelectuales

8. Y pese a que algunas interpretaciones que tildan a la organización como militarista, (Palieraky 2014).

9. Esta definición aparece en el documento sobre estrategia militar luego del Tercer Congreso en 1967, antes de la muerte del Che.

al conversar con él, sobre todo cuando se explayaba en la tesis del desarrollo de la guerra en los pobres del campo y la ciudad. Cabieses señala que «Miguel buscaba ese tipo de conversaciones, asesorías, de personas especializadas en diversos ámbitos, algunos de los cuales llegaron a ser militantes del MIR» (Amorós 2014, pág. 84).

Una lectura que sin duda influyó en la concepción de la estrategia revolucionaria, fueron las reflexiones hechas por Vania Bambirra a propósito de la estrategia foquista (Bambirra 1967). En el trabajo de Bambirra existía una crítica a la estrategia del foco. Esta crítica se había debatido en los círculos de la Política Operaria (POLOP) antes y después del golpe contra Joao Goulart a propósito de las características que la revolución en el Brasil debía tener. Miguel y Bautista pudieron aprender las lecciones de la lucha en Brasil a partir de sus vínculos directos con Theotonio Dos Santos y las continuas visitas a la casa del matrimonio Dos Santos-Bambirra una vez que estos se instalaron en Chile. El brasileño respecto a este aspecto señala:

«nosotros éramos contra la idea de los focos y del foquismo, incluso había un par de artículos de crítica al libro del Che, a pesar que apoyábamos la Revolución Cubana, no apoyábamos las interpretaciones que el Che da de que fue un foco que se extendió por el país. Hay un libro de Vania sobre Cuba, esa era nuestra interpretación».¹⁰

Para Dos Santos, el MIR no era foquista propiamente, si bien existía una influencia de la Revolución Cubana esta no determinó la estrategia, dice el brasileño «y como Vania había escrito su libro, ellos lo leían, lo discutían». Para este intelectual, el MIR adscribió más bien a la idea de la guerrilla urbana tomando las experiencias y teorización de los Tupamaros uruguayos.¹¹

Los planteamientos de Bambirra hablaban de la existencia de condiciones objetivas y subjetivas en América Latina para la realización de la revolución (Bambirra 1971), sin embargo plantea que la problemática de las organizaciones revolucionarias surgidas posteriormente a la Revolución Cubana era su inmadurez ya que les correspondía en ese período no solo oponerse a la institucionalidad reinante, sino construir y llenar el vacío administrativo y político que dejaría la caída del capitalismo. La condición entonces para que esas organizaciones fueran realmente revolucionarias era dotarse de un cuerpo teórico y de experiencia práctica (Briceño 2014).

10. Entrevista de la autora con Theotonio Dos Santos. Río de Janeiro, junio de 2013.

11. *Ibíd.*

Bambirra criticaba la interpretación de Regis Debray respecto a la revolución latinoamericana, lo acusaba de esencializar la experiencia cubana ignorando otras experiencias. Señalaba que la concepción foquista de Debray instalaba como fórmula la guerra de guerrillas planteando el desarrollo de la revolución desde el enfrentamiento, subordinando la política a lo militar y desconociendo el rol de los trabajadores en el proceso de construcción revolucionaria y desestimando la importancia del partido.

Dos Santos sintetiza la discusión de la siguiente manera:

«(...) la experiencia boliviana y en la teorización que de ella hacía Debray una etapa de transición entre el foquismo y una nueva estrategia insurreccional que comienza a madurar en el movimiento popular bajo el título general de “guerra popular continental”. Esa estrategia no encuentra aun su teoría, más ya se vislumbra en la práctica de distintos movimientos nuevos, principalmente los Tupamaros en Uruguay y la Vanguardia Armada Revolucionaria (Palmares) y la Alianza Nacional Libertadora (de Carlos Mariguella) en Brasil (...). En realidad, no hay aun una teorización consecuente de esta forma de lucha armada debido a su carácter aun embrionario. Se trata de saber hasta qué punto es una prolongación de la fase guerrillera anterior, o bien, la apertura de una nueva fase (...). El concepto de guerra popular elimina la tesis de foco, elimina la contradicción foco-partido, la contradicción campo-ciudad, todas ellas alternativas artificiales creadas por la apreciación unilateral de la experiencia de la Revolución Cubana» (Dos Santos 1970, pág. 16).

Esta reflexión dada en Chile por el teórico de la dependencia había sido madurada en las discusiones continuas con los revolucionarios chilenos. La conclusión era que la insurrección popular no es espontánea sino conducida por el partido, ese es el rol que debe cumplir el MIR.

En retrospectiva el historiador chileno Eduardo Devés plantea que el pensamiento latinoamericano sobre la estrategia estuvo íntimamente vinculado a la idea de liberación como centro de la sensibilidad sesentista, así la matriz para la elaboración de las teorías sobre la estrategia estaban dadas por la lectura del marxismo hecho en Cuba (Devés 2003), la matriz era la inexistencia de matrices, la ruptura de las lecturas dogmáticas, así lo expresan las experiencias de Tupamaros en Uruguay o los escritos de Mariguella en Brasil, en esta línea se enmarcan las propuesta estratégicas de Enríquez y Van Schouwen incluso dando expresión a diferencias entre las visiones de ambos (Hernández 2004).

Las concepciones estratégicas de los revolucionarios del MIR fueron incorporando categorías que van a ir adquiriendo contenido en el desa-

rollo mismo de la política, de esta manera la violencia va a estar cada vez más relacionada con la actividad de masa y el enfrentamiento cotidiano y de la construcción de Poder Popular y más lejos de una organización militarizada. El MIR en suma, aspiraba a construir una fuerza social revolucionaria (Naranjo y col. 2004).

Hacia 1971 luego del triunfo de Allende, el MIR reconocía que Chile vivía una aceleración histórica y enriqueciendo la idea de guerra popular prolongada, llamaba a la acción del pueblo en torno a sus propias reivindicaciones inmediatas y a utilizar la violencia popular como preparación para el asalto al poder.

Durante este período, la revista *Punto Final*, cuyo director era Eduardo Cabieses militante del MIR, se convirtió en el principal medio escrito chileno difusor de la revolución latinoamericana. *Punto Final* publicaba documentos del MIR, pero también extensos reportajes a las experiencias revolucionarias en América Latina, entrevistas, debate teórico, análisis de la realidad nacional, discusión política y cultura.

A diferencia de la revista *Estrategia*, *Punto Final* era una publicación de masas que se vendía en los quioscos y dirigida a todo tipo de público. El principal acierto en este período va a ser la publicación en exclusiva para el Cono Sur del *Diario del Che en Bolivia*. La dirección de la revista le permite a Cabieses el vínculo directo con intelectuales y personalidades políticas de toda Latinoamérica y la publicación de artículos en clave revolucionaria de intelectuales como André Gunder Frank y Vania Bambirra, así como comentarios sobre literatura y poesía del escritor argentino Julio Huasi, entre otros.

Los intelectuales latinoamericanos en Chile y el MIR (1969-1973)

Desde los años cincuenta en adelante Chile se convirtió en un espacio de recepción de intelectuales de toda Latinoamérica atraídos por la creación de una portentosa infraestructura institucional que tuvo como origen la instalación de la CEPAL y la FLACSO. A esta migración temprana se agregó la migración obligatoria de muchos intelectuales que escaparon o fueron expulsados de Argentina y Brasil luego de instalarse las dictaduras (Lozoya 2013). El MIR, con una militancia numerosa, una inserción en las masas exitosa y una orgánica en transformación, estableció un vínculo fluido e intenso con los pensadores latinoamericanos, ese vínculo fue de distintos niveles de compromiso, pasando desde las colaboraciones eventuales, el aporte a los trabajos de inserción social hasta la militancia. El MIR se convirtió así en un espacio de recepción y circulación de ideas.

Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, Juan Carlos Marín, Emir Sader fueron de los intelectuales extranjeros más prominentes que militaron en la organización y otros como Theotonio Dos Santos o Mattelart como

colaboradores. La relación entre intelectuales y la organización fue muy relevante en dos términos; primero porque nutrió a la primera de sustento teórico que justifican la opción por la revolución desde una perspectiva histórica, con análisis de la formación social y estudios sobre los sujetos; en segundo lugar, la producción de los intelectuales se vio influida por la militancia, quienes aportaron desde el compromiso político concreto a los espacios académicos en los cuales se desempeñaban pero también buscaron otras formas de relación entre el pensamiento crítico y las transformaciones que se daban en el país. Esa vinculación permitió también superar el rol de *intelligentsia* que habían ocupado los científicos sociales desde CEPAL o como funcionarios de los Estados latinoamericanos a partir de las primeras décadas del siglo xx (Garretón 2007).

De esta manera podemos hablar de estos científicos sociales como intelectuales revolucionarios, ya que estuvieron orgánicamente vinculados a los proyectos de transformación social y en ese vínculo terminaron revolucionando sus disciplinas también.

Andrés Pascal Allende, uno de los líderes del MIR y quién ocuparía el cargo de secretario general luego de la muerte de Miguel Enríquez, recuerda de esta manera la relación entre intelectuales y el MIR:

«Las inquietudes van cambiando después del 69 (...) cuando ya entra el Mauro [Marini], cuando desarrollamos los vínculos con André Gunder Frank, el propio Theotonio, aunque era socialista y no mirista, igual nos reuníamos con él y con su mujer [la mujer de Frank], con la Marta Fuentes, eran conversaciones que incluso tenían cierto orden, las hacíamos cada quince días o una vez al mes, nos reuníamos y colocábamos temas, ahí exprimíamos al grupo de dirección, a Theotonio, Ruy Mauro, sobre la teoría de la dependencia, como una interpretación más novedosa del marxismo, de todo buscando para que diera cuenta de nuestra realidad, esa era la agrupación nuestra – esto no puede ser mecánico, no puede explicarse con las máximas del marxismo, esto es otra realidad, esto fue colonial, tuvo su lucha de independencia, es oligárquica, no es la clase obrera industrial, porque las industrias son pocas, es otra composición social la del pueblo, la forma de dependencia se ejerce de forma distinta, cómo se vinculaba esto del antiimperialista y anticolonialista o la revolución socialista, es revolución por etapas o es solo un proceso revolucionario – tratábamos de entender y definir esas cuestiones, eso nos iba distinguiendo del pensamiento que imperaba dentro de la izquierda que llamamos tradicional, que es la tradición etapista de la revolución, no digo que los viejos del MIR tuviera esa

visión, no, pero fuera del MIR, en el PS y en el PC y en general en la cultura de izquierda, imperaba esa visión, y tenía que ver con influencias muy fuertes que confluían, que ayudaban a construir un pensamiento que no era muy sistemático, pero era nuestra visión de las cosas».¹²

En relación a las redes académicas, el MIR tuvo a través de sus intelectuales vínculos con los centros de pensamiento social y político que se fundaron en la época en Chile. En el caso del CEREN vinculado a la Pontificia Universidad Católica de Santiago,¹³ Pascal Allende,¹⁴ fue su promotor, uno de sus fundadores y quien contactaría a personalidades como Jacques Chonchol y Norbert Lechner (Pascal, 2014). A este mismo centro llegaron a trabajar en 1968 dos jóvenes sociólogos argentinos que huyendo de la dictadura atravesaban la cordillera y se radicaban en Chile, ellos eran Patricio Biedma y Hugo Perret, el primero de ellos establece un vínculo militante con el MIR. Instalados en el Centro, trabajarán con Franz Hinkelammert en un estudio comparativo entre las experiencias socialistas entre la Unión Soviética, China y Cuba y darán forma al libro publicado más tarde con el título *Dialéctica del desarrollo desigual* (Hinkelammert 1970). Esta publicación fue importante porque a juicio de su autor, contenía un debate con un destacado militante mirista André Gunder Frank. Ambos alemanes latinoamericanistas interpretaron la dependencia y el subdesarrollo desde ópticas diferentes, para el primero Gunder Frank «no hacía un análisis de la estructura económica sino de la mera circulación de mercancías. Entonces era más bien teoría del intercambio desigual» (Fernández Nadal y Silnik 2012).

En el caso de Gunder Frank sus primeros vínculos con Chile se realizan en 1962 comenzando su desarrollo como latinoamericanista. Su primera polémica fue con Jacques Chonchol, futuro ministro de Frei y posteriormente tras ingresar al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), ministro de Allende, en ambos casos su rol fue la implementación de la Reforma Agraria. Gunder Frank – utilizando sus palabras – en un ataque al reformismo, abogaba por una reforma agraria rápida contra la

12. Entrevista de la autora con Andrés Pascal Allende. Santiago de Chile, enero de 2014.

13. Respecto al CEREN un estudio profundo es el realizado por C. Rivera (2014) como parte de su trabajo doctoral en historia y cuyos avances presentó en las Jornadas de Historia de las Izquierdas.

14. Pascal Allende solo estará un año en el CEREN ya que en 1969 tras una acción del MIR el gobierno firmará una orden de captura para los dirigentes, lo que obligará – en palabras del entrevistado – a la «profesionalización» de la organización, lo que implicaba en este caso abandonar la vida pública y asumir la clandestinidad.

implementación lenta que el ministro aconsejaba. Respecto a las críticas de Hinkelammert las podemos incluir en lo que el autor sintetizó como «críticas académicas a su supuesto circulacionismo» se le acusaba de no dedicarse a la producción y por lo tanto sus tesis no eran suficientemente marxistas (Frank 1991). Frente al debate que se dio sobre su carácter de marxista ortodoxo o neomarxista él dirá más tarde: «nunca he pretendido ninguno de los rótulos» (ibídem, pág. 53).

Frank, va y regresa a Chile hasta 1968 cuando con su esposa chilena, Marta Fuentes, se radica definitivamente en el país hasta 1973. En uno de sus libros escribe más tarde

«fue la ocasión para expresar sentimientos políticos y para poner en práctica la teoría de la dependencia (...). Miristas y socialista, en especial Miguel Enríquez, Bautista Van Schouwen (el Baucha), Rafael Barahona, el director de *Monthly Review* en Chile Ernesto (Tito) Benado y el brasileño Ruy Mauro Marini pasaron días y noches en nuestra casa, y yo en algunas de las suyas o en otras, en discusiones sin fin sobre como traducir “la teoría de la dependencia” en prácticas políticas en Chile» (ibídem, pág. 49).

El otro espacio de creación de pensamiento era el CESO, Centro de Estudios Socio Económico, ahí al igual que en el CEREN, la presencia de los brasileños fue fundamental en la creación y circulación de teorías novedosas y críticas respecto a América Latina su pasado y su presente. En el CESO los militantes del MIR eran Antonio Sánchez García, Marco Aurelio García, Tomás Amadeo Vasconi, Ruy Mauro Marini. El primero, un converso en la actualidad que viviendo en Venezuela, ha adoptado una vociferante oposición al chavismo y que incluye en dicha oposición la profunda crítica a su experiencia militante de antaño. Sánchez se reconoce como el encargado de la política universitaria del MIR en los años setenta y encargado del vínculo con los intelectuales y artistas. En un texto escrito para el portal disidente cubano «Encuentros en la Red» señala respecto a su trayectoria:

«Pude haber hecho “carrera política” en el Partido Socialista de Chile. Nada más llegar me convertí por un corto período en asesor ideológico de un viejo conocido, Carlos Altamirano, a quien visité en el Senado de la República para redactar un documento titulado *Fascismo o socialismo: el enfrentamiento es inevitable*, que le sirviera de plataforma ideológica para conquistar la secretaría general del PS en el Congreso Nacional de dicho partido, celebrado en enero o febrero de 1971 en la ciudad

nortina de La Serena. Preferí, en cambio, ingresar al MIR como simple y llano “simpatizante”. Incluso feliz de hacerlo: era la autodisciplina bolchevique, el orgullo por la postración ante los “profesionales de la revolución”, castrante y autoritaria en su misma esencia. Lo hice junto a dos compañeros de trabajo en el Centro de Estudios socioeconómicos (CESO) de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en Santiago: Tomás Amadeo Vasconi, sociólogo argentino ya fallecido, y Marco Aurelio García, exiliado brasileño» (Sánchez García 2003).

Respecto a este último, profesor de historia que luego de su vuelta a Brasil se va a convertir en unos de los fundadores del Partido de los Trabajadores siendo asesor para asuntos internacionales de Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Monge 2012).

Vasconi, mientras tanto, se destaca en esos convulsionados años por sus escritos sobre universidad y movimiento universitario. Las reflexiones de Vasconi estarán estimuladas por el proceso de reforma universitaria chilena que en 1967 comenzaba a cambiar las estructuras académicas y de formación. En paralelo se desarrollaba el estallido estudiantil a nivel mundial y los jóvenes universitarios se convertían en un sujeto de transformación. El MIR en este contexto, logrará un importante nivel de inserción en los espacios estudiantiles liderando el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) logrando además –gracias a la numerosa militancia existente en la Universidad de Concepción– ganar la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC) y algunos centros de estudiantes de las carreras de la universidad.

Vasconi en un trabajo publicado por el CESO en 1970 titulado *Movimiento estudiantil y crisis en la Universidad de Chile*, analiza el proceso de reforma universitaria en dicha institución y explica las diferencias entre las reformas aceptadas en la universidad en general y las de la Facultad de Filosofía y Educación. Dicho proceso va a dejar importantes lecciones para la organización social en general respecto a las tensiones existentes entre institucionalidad y revolución ya que mientras que en votaciones la universidad rechazó el cogobierno, en la Facultad de Filosofía y Educación se dieron formas masivas de participación que permitieron modificaciones importantes al interior de la unidad que instalaron de hecho el cogobierno. Vasconi en su artículo analiza las consecuencias señalando que, el proceso de la facultad, dejó como experiencia la movilización como estrategia para la conquista del poder. Para el argentino la contradicción existente entre el estatuto aprobado en la universidad y las acciones de los estudiantes de Filosofía y Educación, evidenciaban que había varios caminos hacia la transformación y que «la acción de un grupo que traspasa las reglas del juego vigentes en la institución y rompe con los acuerdos democrática-

mente sancionados al interior del movimiento estudiantil» era uno de esos caminos (Vasconi 1970, pág. 13), esa será la estrategia ocupada por los estudiantes coordinados en el MUI, y de los actores revolucionarios en general en el período 1970-1973, sobrepasar la institucionalidad vigente aprobada bajo las lógicas de la democracia burguesa y será, posteriormente, una tensión constante entre los frentes sociales conducidos por el MIR y la institucionalidad conducida por Allende desde 1970.

En Concepción, donde el MIR tenía una militancia universitaria muy nutrida y la conducción política del movimiento estudiantil, en algunas facultades y departamentos, la reforma había tomado vuelo. La universidad reformista había abierto las puertas a una formación interdisciplinaria muy pertinente para los estudiantes revolucionarios que cursaban carreras pero que también querían formarse políticamente. Mario Garcés,¹⁵ militante del MIR y adscrito en ese entonces a la estructura estudiantil de la organización, recuerda que en antropología «había malla flexible y eso les permitía tomar ramos con los profesores más destacados de otras carreras», esos profesores destacados eran los que incluían una reflexión desde la perspectiva marxista. Los argentinos llegados después de la intervención en la Universidad de Buenos Aires en 1966 eran los más atractivos para los estudiantes. Profesores como Néstor D'alessio proponían una entrada crítica al marxismo, desde una mirada histórica que superara el estructuralismo de Louis Althusser y Marta Harnecker, que no eran muy apreciados.¹⁶ Al mismo tiempo en sociología, había también un par de miristas chilenos que se habían convertido en intelectuales jóvenes que comenzaban su carrera dando clases, ellos eran Marco Antonio Enríquez y Fernando Mires, profesores de historia.

Los intelectuales compatibilizaban sus actividades de investigación y docencia con la militancia, la discusión y la formación política. En 1972 el MIR decidió desarrollar un trabajo más sistemático hacia el mundo cristiano organizando un curso de marxismo en la parroquia universitaria «ese curso fue muy exitoso, curas, monjas, dirigentes juveniles, de los movimientos», los profesores fueron Fernando Mires y Néstor D'alessio, ambos militantes del MIR y «los mejores de sociología».¹⁷ Mires además, comenzó a publicar sistemáticamente desde 1969 en la revista *Punto Final* artículos de síntesis y debate teórico en torno a los conceptos del marxismo, en el primero de ellos «Marx y el sufragio» sintetizaba las referencias de Marx respecto a la vía electoral, esto en plena coyuntura de elecciones

15. Mario Garcés actualmente es historiador de la Universidad de Santiago de Chile.

16. Entrevista de la autora con Mario Garcés. Santiago de Chile, enero de 2014.

17. *Ibíd.*

presidenciales en Chile en el cuarto intento y definitivo de Allende por convertirse en presidente de la república (Mires 1969, pág. 14).

Estado y represión, eran los principales temas abordados por Mires desde una tribuna que no solo llegaba a los militantes miristas, sino a los militantes y simpatizantes revolucionarios en general, lo que permitió alimentar las discusiones políticas dadas en el período desde conceptos teóricos tensionados por la práctica.

Néstor D'alesio era miembro del comité regional de Concepción en el momento en que se levantó en la región la Asamblea Popular en 1972; el vínculo de los sectores populares con la revolución y con la vía chilena al socialismo inquietaba a los intelectuales militantes y colaboradores del MIR que teorizaban en torno al poder popular y daban sus propias interpretaciones respecto al poder dual. D'alesio durante un período estuvo a cargo de la comisión poblacional regional, y le correspondió estar al mando de la formación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP),¹⁸ Garcés relata:

«estábamos en reunión y él pide que desde las distintas estructuras contemos cómo nos ha ido en la formación de las JAP. Habló un compañero, no sé si de barrio norte o de algún barrio de Concepción él dice: “hay una vieja que siempre jode”, entonces Néstor para y pide volver sobre esa vieja, – a ver, qué dice esa vieja – bueno, la política popular consiste en la capacidad de procesar lo que dijo esa vieja, de la capacidad de hacernos cargo de las críticas».¹⁹

En esta misma línea, Aníbal Quijano debatiendo con los teóricos de la marginalidad, va a generar una profunda reflexión sobre los «pobres de la ciudad».²⁰ Según Quijano, el problema de la marginalidad no es un problema cultural de los sujetos sino una condición material de las sociedades dependientes, hablará así de marginalizados y no de marginales (Cortés Morales 2013). «Quijano incorporará en su concepción del proceso de marginalización la experiencia del Movimiento de Pobladores, estudiado por el CIDU, abriendo espacio en su interpretación estructuralista para las potencialidades de la acción transformadora de este movimiento social» (ibídem, pág. 7). Teniendo en cuenta la experiencia del movimiento de pobladores en Chile y de la participación del MIR en ello a través de la

18. JAP, organización creada durante la Unidad Popular para responder a la escasez de productos y la inflación, la JAP tenía una organización barrial.

19. Entrevista de la autora con Mario Garcés. Santiago de Chile, enero de 2014.

20. Quijano trabaja en la CEPAL entre 1968 y 1971 en la división de asuntos sociales. Luego va a establecerse en el Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU) dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

creación de milicias populares, va a señalar que en su acción reivindicativa los marginalizados no solo generan una crítica a la propiedad tomándose los espacios de habitación sino que también logran un grado superior en la organización y uso de la violencia, convirtiéndose en sujetos en los cambios revolucionarios que se estaban produciendo e incluso, jugaban un papel importante en la defensa del gobierno de Allende ya que ahí había embriones de poder popular (ibídem).

Fueron muchos los intelectuales involucrados en el proceso que colaboraron con las organizaciones políticas del período y en esa relación nutren su pensamiento complejizándolo. Es una relación enriquecedora tanto para las organizaciones políticas como para los pensadores. Las condiciones políticas excepcionales dadas en Chile donde la revolución era reivindicada desde el gobierno y desde el mundo popular permitían la relación estrecha entre intelectuales y revolución. Por otro lado, esas condiciones excepcionales permitían que una organización como el MIR, que planteaba la lucha armada, no combatiera y se dedicara a la construcción de poder popular. Esa experiencia servía de «laboratorio» para el desarrollo de pensamiento a los intelectuales que militaban en la organización. Los académicos marxistas no aplicaban la receta del marxismo ortodoxo soviético, sino que intentaban construir teoría para la revolución chilena.

Uno de estos pensadores que sin ser militante del MIR se involucró en el trabajo de frentes de masa fue el experto en comunicaciones Armand Mattelart, quien en una publicación reciente habla de esta relación entre el intelectual y la política en el Chile de los años sesenta. Ahí señala:

«Debo decir que sin haber pertenecido a este movimiento, las relaciones de larga amistad que he mantenido con los responsables del MIR, me llevaron muchas veces a discutir con ellos de problemas que yo trabajaba y que les concernían. Pienso que tenían un largo de ventaja sobre los partidos burocráticos, sobre todo a lo que respecta a la reflexión sobre el lugar de los medios de comunicación en la lucha política, tal y como la vivíamos en aquel tiempo. Esto explica porque el MIR fue uno de los escasos actores políticos en concebir un proyecto de radio propio, durante el gobierno de la Unidad Popular. Si no pudo llegar a realizarlo fue porque se lo impidió el golpe de Estado. Las cuestiones sobre la ideología y la cultura bebían de las fuentes de la heterodoxia marxista, en sintonía con lo que sucedía internacionalmente. Pero, sería un error pensar que mis relaciones con la izquierda se limitaban a estos contactos. Sin haberme encerrado en el claustro de partido alguno, colaboré estrechamente con una gama amplia de militantes,

que pertenecían a los sectores críticos de los partidos que integraban la Unidad Popular» (Mattelart 2013, pág. 102).

Las ideas revolucionarias de Mattelart respecto a las comunicaciones, influirán de manera importante en el joven sociólogo argentino nombrado anteriormente Patricio Biedma, quien en conjunto con Mattelart publicará un libro sobre las comunicaciones y el socialismo, en él escribía «la revolución necesita intelectuales, necesita técnicos, necesita médicos, no los quiere transformados en obreros, los quiere como tales» (Mattelart y Biedma 1971, pág. 256). Asumiendo esta premisa en su texto reflexionaba respecto a las posibilidades y necesidad de construir medios de comunicación revolucionarios que «representaran» al mundo popular, Biedma dice que «a medida de que los trabajadores van aumentando su nivel político, a medida que sus victorias se hacen cada vez más frecuentes y más intensas, se van creando el proceso de su emancipación de los capitalistas y, como tales, se emancipan también de los canales capitalistas para presentar a toda la sociedad su propia forma de analizar el proceso» (ibídem, pág. 260). Dirá también «cuando el proletariado se organiza en pos del poder solo admite una forma de representación: la representación revolucionaria, la representación de un partido revolucionario» (ibídem, pág. 256),

Respecto a los intelectuales revolucionarios y su rol en Chile de inicios de los setenta, en un libro publicado en Ecuador y que recopila algunos escritos de Ruy Mauro Marini – uno de los más brillantes intelectuales militantes del MIR – Patricio Rivas señala que los intelectuales que reflexionan en el Chile de la Unidad Popular:

«Lo hacen frente a una urgencia que no proviene de su saber autocentrado sino de la aceleración histórica de los tiempos políticos en nuestra región (...). Esa aceleración impulsa la necesidad de correlacionar investigación, modelo, sugerencia y propuesta en un proceso doble: por un lado, desde el programa de transformación que los agrupa, y por otro de producción de datos relevantes para su propio pensamiento, como se ve en las reflexiones frecuentes entre estos pensadores» (Rivas 2012, pág. 13).

En el caso de Ruy Mauro Marini la reflexión la daba integrando las experiencias vividas en su militancia en la POLOP en su país de origen – con fracaso foquista incluido – y la represión solapada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano. Marini llegó a Chile en 1969 invitado por Nelson Gutiérrez militante del MIR, integrante de la Dirección Nacional de la organización, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción e impulsor del proceso de transformación

del área de ciencias sociales de la universidad. El brasileño se puso a disposición del MIR y pasó luego a integrar su Dirección Nacional. Un año más tarde en Santiago su producción intelectual retomará el ritmo perdido en Concepción a raíz de su intensa vida política. Contratado por el CESO, alternaba las actividades investigativas y militantes. Los desafíos eran contribuir a la interpretación teórica de la dependencia, participar de las discusiones teóricas del MIR, construir poder popular y definir cuáles eran las tareas del Estado en un momento en que se organizaba la contrarrevolución en Chile (ibídem).

Siguiendo el orden de los desafíos planteados anteriormente Ruy Mauro Marini publicó *Dialéctica de la dependencia* que se convertiría en un texto consultado y debatido por la militancia chilena; discutía respecto al concepto de poder popular a través de la revista *Chile Hoy* editada desde 1972 junto a otros intelectuales como Dos Santos y Harnecker y reflexionaba sobre el Estado y la transición al socialismo en una ponencia titulada «¿Transición o revolución?». Presentada en el simposio organizado por el CEREN y el CESO a principios de 1973.

En 1974, ya fuera de Chile, luego del golpe militar, Marini publicó un ensayo titulado «Dos estrategias en el proceso chileno» donde diferenciaba las estrategias definidas en el período por el Partido Comunista chileno y el MIR. Manteniendo el análisis de la necesidad del salto revolucionario que había expresado en sus escritos en *Chile Hoy*, en este texto Marini exculpaba al MIR por el golpe (tesis difundida por la derecha chilena) y responsabilizaba al imperialismo estadounidense y a la burguesía chilena, aunque también recalca los errores de ambas estrategias para poder materializarse en la coyuntura abierta por la Unidad Popular (Marini 1974).

La tesis del salto revolucionario ante la reacción conservadora de la derecha chilena, será compartida por su compatriota Dos Santos. A juicio de los brasileños, la estrategia pretendida por el Partido Comunista de acercamiento y pacto con la Democracia Cristiana no era la adecuada y lo que se debía hacer era activar los espacios de poder popular construidos y avanzar hacia la ruptura revolucionaria. Una reflexión distinta era la de D'alessio, que frente a la proximidad del golpe debatirá con la Dirección Nacional del MIR respecto a la estrategia que debían tomar; para él, la opción no era pasar a la ofensiva sino el repliegue táctico. En el MIR se debatía respecto al desarrollo de los destinos de la revolución cuando Augusto Pinochet lidera el golpe de Estado contra Allende.

Así, esta brillante confluencia de intelectuales revolucionarios tiene un desenlace trágico el 11 de septiembre de 1973 cuando la violencia obligó a huir a la mayoría de ellos y exiliarse en distintas partes del mundo, para varios de ellos fue la segunda o tercera oportunidad; el proceso revolucionario quedaría trunco.

Conclusiones

La potencia de los acontecimientos en Chile y Latinoamérica en los años sesenta y la necesidad de referencias para realizar cambios revolucionarios, van a definir que las organizaciones político-militares se constituyan en espacios para la creación intelectual. El MIR en Chile va a disfrutar de una situación privilegiada al respecto, debido a los numerosos intelectuales que atraídos por las instituciones chilenas y por el proceso político, llegan al país. El exilio de argentinos y brasileños potenciará este proceso trayendo a intelectuales de alto nivel y en su mejor momento productivo.

Los gobiernos de Frei y Allende tuvieron una potencia intelectual, ya que lograron convocar a técnicos y teóricos de trayectoria no solo local, sino también del resto del continente y algunos europeos. La nueva izquierda también atrajo intelectuales que se interesaron en el proceso revolucionario que vivía Chile y contribuyeron no solo con teoría, sino que asumiendo responsabilidades políticas concretas en las organizaciones.

Pese a que el período del que hablamos existe un llamado a la lucha concreta y las organizaciones revolucionarias interpelaban a los intelectuales con la máxima que señalaba que la revolución no se piensa sino que se hace, los intelectuales en el MIR tuvieron espacios para crear y fueron considerados por la organización en tanto intelectuales, asignándoles una función desde ahí. Así el MIR desarrolló una política hacia los intelectuales generándose una relación de estímulo y desarrollo mutuo. Esa relación se vio potenciada debido a que el proceso chileno no significó la militarización de la organización por lo menos hasta 1973, el MIR no combatió, lo que evitó el fenómeno ocurrido en otras organizaciones, donde las tareas militares terminan subordinado la reflexión política.

Por otro lado y contradiciendo las afirmaciones de sentido común que plantean que el marxismo que circuló en América Latina en los sesenta era un marxismo mecanicista althuseriano, afirmamos que la realidad continental permitió una recepción y difusión de un marxismo bastante heterodoxo y creador. Los intelectuales en Chile debatían sobre la contingencia política, el problema del poder y la construcción social a partir del marxismo intentando aportar a su desarrollo como teoría. De la misma manera, si bien para la izquierda revolucionaria Cuba era un símbolo y una referencia, no hubo en Chile la intención de aplicar el modelo cubano, sino de crear uno propio.

El período fundacional del MIR (1965-1973) es de reflexión política y de creación de teoría y práctica revolucionaria, esto nos permite definir a los intelectuales que tuvieron vínculos orgánicos como intelectuales revolucionarios no solo porque militaban en una organización revolucionaria, sino fundamentalmente porque revolucionaron su campo al generar síntesis entre la teoría y la acción.

Las ideas que circulan y que nutren las concepciones revolucionarias, así como la confluencia de intelectuales que cumplían su función como tal permite una creación teórica original que dota al MIR de una visión sobre la formación social chilena, un conjunto de ideas sobre la estrategia que superan la teoría insurreccional clásica pero también el foquismo, una reinterpretación del pasado histórico, una caracterización del Estado y una teorización respecto al sujeto de la revolución, el partido y el trabajo de masas.

La potencia política de la época exigía definiciones y apuestas, muchos de los intelectuales latinoamericanos radicados en Chile apostaron por el MIR y pusieron su obra al servicio de la revolución, esta situación lejos de limitar su producción intelectual la estimuló nutriendo de manera importante al período más brillante de la producción originalmente latinoamericana.

Entrevistas realizadas por la autora

Dos Santos, Theotonio. Río de Janeiro, junio de 2013.

Garcés, Mario. Santiago de Chile, enero de 2014.

Pascal Allende, Andrés. Santiago de Chile, enero de 2014.

Human Rights and the Liberalization of Civil Society

Rachel May

.....

In the post-World War II era in Latin America, popular social movements emerged for the first time in modern history to challenge the socio-economic and political reality of the region. These movements were deeply shaped by the context of the Cold War. Particularly after the triumph of the 26th of July movement in Cuba, armed revolutionary struggle became, if not the dominant form of popular struggle, an important and influential part of the phenomena of social movements in Latin America. Popular social movements were class-based, and they made use of a Marxist analysis to shape their ideologies, mobilization strategies, and organizational modalities. By the early 1980's, the region was controlled by military dictatorships who had to varying degrees adopted National Security Doctrine in order to crush popular opposition. In this defensive context the human rights movement emerged in Latin America. While initially connected to the larger popular struggle, the human rights movement made pragmatic use of international legal instruments in order to oppose the state, and to protect themselves and the organizations with which they had established networks of solidarity. The appeal to the United Nations, the international community, and international law forced an ideological shift towards liberalism. In this paper I will discuss the transition from the more radical organizational model of the Cold War era to the more benign idea of civil society within a context of «transitions to democracy» and the pivotal role of the human rights movement in this transition. I will also consider the options for social movements (particularly the trans-national human rights movement) in a contemporary context.

The collapse of Soviet communism prompted an interesting and cogent political discourse about the nature of «civil society». It is a discourse that began as a critique of Marxism and Soviet power, but it quickly became

relevant to the discussion of peace and democratization in societies that formerly suffered under the most strident anticommunist regimes as well. This application of the concept was certainly not anticipated by the first wave of theorists who initiated this discussion. Its application to Latin American regimes during and after the Cold War changed some of the assumptions of the original argument. Gellner (1994) and others argued that «civil society is based upon the separation of the polity from economic and social life». The idea of civil society as autonomous from the state remains important to our contemporary understanding, but in Latin America the autonomy of civil society was not the most important feature. Civil society was a necessary pre-condition for and a component of democracy because it created a space for the politically and economically marginalized to *influence* the polity. Leaders in civil society (social movements) could choose to force the polity to address social and economic issues. The Mexican EZLN explicitly used the notion of civil society in this way. The Zapatistas claimed to be demanding an acceptance of «civil society» which they saw as having an historical presence in Chiapas, and they saw this as a way of allowing economically marginalized peoples to demand reforms in the political and economic realm. They used this paradigm to make demands of a state that was not really hegemonic (except in the Gramscian sense). The absence of the state in the poor marginalized state of Chiapas was more relevant than the state's dominance. The civil society paradigm then spread from Chiapas to social movements in Latin American countries with very weak states (e.g., Colombia, Guatemala, El Salvador, and Peru) as a way of framing national and global opposition to neo-liberalism.

The conceptualization of the idea of civil society by the theorists who were looking at the collapse of the Eastern Bloc was that civil society was a more pragmatic and meaningful description of a viable, appropriate, humane, and pluralistic political system than previously articulated notions of procedural democracy. Civil society then was defined as a set of organizations which could provide a democratic space and the opportunities for political participation and experience for individuals outside of the realm of government (which was constrained and exclusive). These theorists argued that citizens in a democratic society need a space to organize themselves outside of the overarching influence of the state. But for civil society to be a meaningful measure of democracy, it has to have some power and influence vis-à-vis the state, or at least society at large. And this seemed to be evident both in the post-Soviet context, as well as in the newly democratizing states of Latin America. The former was a case of civil society providing a balance to the power of a totalitarian state, and the latter was civil society providing the building blocks for democratization in the absence of a legitimate state.

It seems clear in retrospect that a larger ideological shift was required of social movements to make the transition from «popular struggle» to «civil society». At some point in the mid-1990's, *Starbucks* claimed (in what was essentially an advertisement for their brand of Guatemala coffee) to be «supportive of Guatemalan civil society». The idea that a multinational coffee corporation would be co-opting what had been less than a decade before the «popular revolutionary struggle» in Guatemala (the same organizations, and in many cases, the same people) was stunning. And it raises the question about what new social movements really are?

The end of the Cold War required a re-conceptualization of social movements. The Cold War had certainly framed social movements from the 1959 forward. And the end of that era required a re-framing, and also provided an opportunity for social movements to consider ways in which to organize and re-create themselves in ways that could be more constructive and meaningful. Thus the idea of «new social movements» was transferred to the Latin American context.¹ There are several contextual patterns to consider when examining how this transition took place: (1) the emergence of «civil society» as an internationally acceptable framework for analyzing and implementing «transitions to democracy», (2) the emergence of identity-based politics, and (3) the rise of the human rights movement. All three of these factors are inter-related.

The Emergence of “Civil Society”

Civil society discourse did emerge in Latin America at the end of the 1970's and early 80's, but it was not part of an intellectual analysis of democratization in the region, it was part of the discourse of Gramscian Marxists who were modeling their vision of a revolutionary struggle against a hegemonic state (Gorski 2007, pág. 17). The Gramscian idea of civil society was never really embraced by a broad base of social movements in the region, and after the EZLN employed a more liberal definition of civil society, the Gramscian idea of civil society all but disappeared from «new social movements» in the region.

The new social movements of the 1990's embraced and defined themselves within a classically liberal idea of civil society. The end of the Cold War had made direct opposition to the state all but untenable. The struggle was over. Marxism-Leninism was viewed as a discredited ideology, and

1. Bernd Reiter argues in «What's New in Brazil's “New Social Movements”?» (*Latin American Perspectives*, October 2010) that the postmaterialist European notion of «new social movements» cannot be easily applied to Latin America because identity-based social mobilization has in some sense always been at the heart of the popular struggle in Latin America.

in some sense progressives in Latin America had to acknowledge that the battle had been lost. On the other hand, anticommunist military regimes which had ruled most of the region had been forced out of power. In many countries the militaries and their anticommunist allies were put on trial and internationally shamed. There was no utopian revolution to celebrate, but popular organizations and their constituencies emerged from the struggle as survivors, and many felt it would be foolish not to claim a victory for what had become a distinctly international mandate for liberal democracy. Organizations and social groupings that embraced the auto-definition of civil society were allowed in some cases to negotiate the terms of peace.² Some formed new political parties, and others were connected to international foundations and lending agencies, and they were able to obtain financing for significant development projects and other initiatives. Non-Governmental Organization's (NGO) (especially in Central America) were able to alter the material circumstances of their constituencies in significant ways.

The shift to political liberalism coincided with the rise of economic neo-liberalism. And by the mid-1990's when new social movements had mobilized to oppose neo-liberal economic policies, they did so within a moderate liberal ideological framework. And they were not unsuccessful in their quest to undo the socially regressive policies of the 1980's and early 1990's. They were able to influence elections and reverse some of the damage of neo-liberal extremism. There were small-scale victories as well as dramatic large scale electoral victories.³ But, with the exception of Hugo Chavez and to a lesser extent Evo Morales, the combative revolutionary ideological framing was lost from these victories.⁴ The Left had finally achieved dominance, but it was a considerably less radical movement than the one it replaced.

2. El Salvador, Guatemala, Peru and Colombia.

3. The so-called «red tide» in Latin America included the rise to power of an entire generation of Leftist progressive heads of state in Latin America, many of whom came directly out of popular movements.

4. Hugo Chavez's Bolivarianism is hard to categorize within this analysis. Chavez comes to power on an antineoliberal platform, and his rhetoric mirrors an earlier Marxist ideology, but he has been able to co-opt a new and more complex array of social movements both within Venezuela and Latin America as a whole. Chavez's brand of populism, however, seems more reminiscent of Peronism or Vargas's *Novo Estado* than of Castro's Cuba. It remains to be seen whether Bolivarianism will outlast Chavez's own tenure in office.

From Class-Based Politics to Identity-Based Politics

The popular revolutionary struggle of 1960's through the 1980's was defined by the conceptual framework that was largely circumscribed by classical Marxism. By the 1970's, even community-based organizing (cooperatives, peasant leagues, and Christian Base communities) were drawn into a larger, more political confrontation with repressive states, and were ideologically bound to a fairly traditional class-based ideological analysis. It was a useful frame for the times, and it provided the basis for widespread solidarity and new forms of alliances (including worker-peasant alliances in many countries). But the seeds for new more complex forms of social movements were being planted simultaneously.

Technology, infrastructure, and the class-based alliances of this era created a generation of national Leftist activists by the 1980's that was considerably more diverse than in any previous generation. In countries with large indigenous populations, there was unprecedented physical mobility in the second half of the Twentieth century as agriculture was transformed into agro-industry. Traditionally isolated communities were torn open by both violent conflict and economic necessity. Indigenous *campesinos* typically migrated several times in a year. This reality led to unlikely political alliances and it forced the question of ethnic identity in ways that had never been previously considered by most indigenous peoples. For most Native Americans, ethnic identity was a function of membership in a closed community. Because indigenous people had limited contact with non-Indigenous *campesinos* and workers, there was very little possibility to consider questions of culture and identity apart from very long historical trajectory which dated back to the Conquest. As indigenous people became proletarianized as migrant workers and politicized within the popular struggle, more fluid and self-aware identities began to emerge. In the case of Guatemala, the first generation of university-educated Maya paved the way for the first Pan-Maya movements in Guatemala's modern history by the early 1970's.

Increasingly this evolving Ethnic identity began to come into conflict with what was in reality a fairly simplistic class-based identity imposed by the popular movement. In addition to this inherent tension, there were other «traditional» characteristics which weakened popular organizations in Latin America, both ideologically and structurally. The tendency towards personalistic and sometimes authoritarian leadership – the concentration of power in the hands of a few visible leaders – lead to a situation in which popular leaders became disconnected from the material needs of the rank and file. Moreover, because the state was openly and violently hostile towards popular organizations, powerful leaders made easy targets for violent reprisal. Where organizations were very dependent upon

one or a few leaders, the organizations themselves were very vulnerable to violence. There are countless examples in Latin American history of popular movements dependent upon a singular personality for legitimacy and viability, which were unable to withstand the loss of a caudillo-type leader. In addition, many popular leaders were ideologically dogmatic and insensitive to racism and sexism, both in the larger society and within their own organizations.

In the case of Guatemala, Maya nationalism⁵ began to emerge through organizations like the *Asociación Indígena Pro Cultural Maya-Quiché* and *La Asociación de Forjadores de Ideales Quichelenses* and the *Asociación de Escritores Mayenses* which were all organized between 1970 and 1972. In addition to providing the impetus for the formation of non-traditional and extra-legal broad front peasant alliances, the new emphasis on Maya ethnic awareness also contributed to a political movement which came to be seen as an alternative to the traditional Ladino Left. Maya nationalists were not active in confrontational politics during the worst years of violence, but they did begin to re-emerge after 1985. In the late 1980's and early 1990's, there were two competing approaches to modern Maya politics, the *indigenista* approach (Maya nationalism) which was represented by its own national umbrella organization by the mid 1980's,⁶ and the popular approach (new social movements), which also had a national indigenous umbrella organization (*Majawil Q'ij*) which included Maya organizations, multi-ethnic peasant alliances, and human rights groups.

Those who adopted the *indigenista* approach in the 1980's believed that Maya were in error when they allied themselves with non-Maya, and that Ladino leftists manipulated indigenous people into participating in a sort of confrontational politics which is not really «the Maya way» (Arias, 1990; Smith, 1991). According to Carol Smith the Maya nationalists emphasized the following three points with regard to the revolutionary struggle in which large numbers of ethnically indigenous people participated:

1. Ladino leaders were so consumed by class (as opposed to ethnic) issues that they did not even know the most likely areas and issues for Maya recruitment;
2. the ladino leadership was unable to take seriously any cultural issues of importance to Maya, like Maya women's clothing; and
3. Maya take tremendous risks if they follow non-Maya leadership in any political venture, evident in the terrible costs paid by Maya 'innocents' in [what was then] the latest round of state repression (Smith 1991, págs. 32-33).

5. Maya nationalism was manifest in organizations such as *Asociación Pro Maya-Quiché*.

6. El Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG).

The Maya nationalists believed that the Maya who were victims of the military's genocidal campaign in the late 1970's were manipulated by both the armed forces and the Ladino leaders of the guerrilla struggle. Most Maya they claimed were only concerned with «political» issues as they related to ethnic integrity and autonomy of the Maya people. They were interested in preserving native languages and dress, community forms and Maya cosmology as legitimate forms of expression in Guatemala. They claimed that Leftist Ladinos belittled these cultural concerns.

Most Maya nationalists in the early 1990's were, according to Smith, «literate self-proclaimed Maya» (ibídem, pág. 30). This meant that they were unlikely to be the poorest and most exploited Maya *campesinos*. Nevertheless the emergence of the Pan Maya movement, which presented a strong challenge to the traditional «popular» approach to organizing, was a strong indication that the indigenous majority in Guatemala had undergone a significant transformation in the ways in which they viewed themselves in a larger political context.

The phenomenon of rising indigenous ethnic awareness and reflective ethnic self-identification was repeated (in perhaps less dramatic fashion) all over the region. In Bolivia both political parties and popular social movements emphasized Aymara cultural traditions within a class-based analysis. The indigenous figure of Tupak Katari – who led an indigenous uprising in 1781 – became the symbolic figurehead for many of these social movements. Katarismo was not in and of itself a social movement, it was a way for social movements to declare Aymara identity, but even during the Cold War Katarismo was more successful at mobilizing *campesinos* than were dogmatically class-based movements. By the 1980's organizations based exclusively on indigenous cultural interests were dominant (Peeler 2003, págs. 264-265). Ironically, the rise of MAS and the election of Evo Morales in Bolivia is clearly the result of a more class-based popular alliance, albeit with a strong Katarista influence.

In Ecuador, the question of a *pan-indigenista* identity and political movement has been less politically controversial throughout the latter half of the 20th century, but like the other largely indigenous countries in the region, the first national indigenous organization emerges in the mid-1980's, the *Confederación de Nacionalidades del Ecuador* (CONAIE). CONAIE has been very successful at influencing national politics in Ecuador through protests, marches, and participation in elections. CONAIE initially supported Correa, but the current political landscape in Ecuador places Correa (now in his third 4-year term) firmly in the camp of the Latin American populist Left, and the indigenous movement in another camp. This poses a serious problem for Correa. At least in the case of Ecuador, the indigenous majority, although opposed to neo-liberalism and in many ways sharing

common class interests with the non-indigenous poor, has ethnic-based interests which transcend and often conflict with the interests of class (Dangl 2010).

Likewise by the late 1980's grass-roots community organizing among afrodescendants in Brazil and Colombia gave way to national political movements in those countries. Like the indigenous movement in the region, this indicated that an important transformation in the reflective political identities of the base was well underway.

A parallel transformation of gendered identities also took place during the 1980's. Although Latin American feminism is beyond the scope of this paper, it is important to note that gender-based movements were intimately connected to rise of the human rights movement and the violent context in which the human rights movement was born. Women achieved leadership roles and positions of power within community-based organizations (Christian base communities, cooperatives, and development-oriented NGO's). And they achieved national political prominence as the founders and leaders of human rights organizations. Many followed the lead of the *Madres* in Argentina, forming survivors' organizations. And others found themselves «left in charge» in communities and networks in which the men were targeted for elimination by the armed forces.

There was no unifying radical ideology for the new identity-based movements. Many Leftist intellectuals posited a Gramscian vision for identity politics in the aftermath of the Cold War, but nothing really emerged. In some cases (ethnic movements in Guatemala), a Marxist model or class-based model was explicitly rejected, and in other cases the need to provide material benefits made the adoption of a more Gramscian ideology impossible. The Gramscian idea would have required the new social movements to maintain a more unified and confrontational posture with the hegemonic state. Instead a large part of the organized base chose to be more directly involved with the political process, and they resisted the idea that their varied and complicated cultural identities were somehow just a part of a hegemonic ideology. The constituencies for these diverse groups became increasingly complex, not because the class structure of any country in Latin America changed significantly, but because the sense of identity of the base was evolving. Moreover, the opportunities presented by transitions to democracy and global recognition of civil society in the form of formally organized NGO's proved to be an irresistible opportunity for many (Ernest Laclau y Mouffe 1985; Álvarez; Dagnino y Escobar 1998). In ethnic-based organizations and gendered organizations, the human rights paradigm was also central to the developmental trajectory of the movement. In both cases organizations were in regular communication with human rights NGO's and regional and international human rights

bodies. They made use of human rights instruments to make claims or pressure states, and they allied themselves explicitly with the human rights movement.

The Rise of the Human Rights Movement

The human rights movement dates to the mid 20th Century and the promulgation of the Universal Declaration of Human Rights (1948). Several scholars have pointed out that Latin Americans exercised considerable influence over the early human rights movement, both within the United Nations and the Organization of American States (OAS) (Cárdenas 2010, págs. 9-12; Cleary 2007, págs. 2-4). Nevertheless, the modern human rights movement becomes significantly more vibrant as violent state-sponsored repression prompted grass roots movements and organizations to use international human rights as a strategic defense.

The rise of the human rights movement in Latin America is difficult to consider apart from the rise of ethnic-based movements and gender-based movements. Fundamental changes that took place within the Latin American Church in the period 1952-1980 also are integral to the emergence of the human rights movement. The World Council of Indigenous Peoples (WCIP) was formed in 1972, and met for the first time in 1974 in Guyana. This «preparatory meeting» included representatives from several non-Latin American nations (including the U.S. and Canada). Colombia was the only Latin American participant. The first international conference was held in Canada in 1975 and included representatives from Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, and Mexico. The WCIP was given observer status in the United Nations, and they provided an international framework within which local and national indigenous movements could make demands or lobby for human rights instruments specific to indigenous peoples.

The first and most successful human rights NGO's in Latin America were made up of female family members of the disappeared. *Las Madres* were certainly the most recognizable, but there were organizations of mothers and widows that arose in every country suffering the burden of state-sponsored terrorism. In addition the Catholic Church promoted international human rights as an appropriate paradigm for a response/defense against state sponsored violence in many countries as well. The Vicariate of Solidarity in Chile along with Arch-Bishoprics of El Salvador and Guatemala, and the *Recuperación de la Memoria Histórica* (REHMI) project in Guatemala all used the legal framework of international human rights in order to pursue their missions. Certainly relatives' organizations were predominantly (or in some cases exclusively) female. And even within the patriarchal structure of the Catholic Church, women took on new

leadership roles within the Christian base community (CEB) movement and the human rights movement, and in most cases they were a dominant force behind the organized base. This meant that the early human rights movement was highly gendered, even if traditionally «feminist» issues were put off in the beginning.

In the aftermath of the Cold War, the number of human rights NGO's in Latin America increased exponentially. This was, in part, just the formalization of movements and organizations which had been operating informally or clandestinely during the worst years of repression. But it was also a response to the need for local organizations to take the lead in the process of implementing democracy. Transitional justice was key to the implementation of meaningful democratic reform, and although trials and truth commissions required the authority of the states (and in some cases the international community) in order to succeed, local organizations emerged to represent the needs and demands of traumatized populations during this period. In addition local NGO's (and newly developed technology) provided a measure of protection against continued violence and retaliation by the armed forces. Between 1989 and 1994, «core» human rights NGO's increased from 241 to 640 in the region. And there were literally thousands of additional NGO's which emerged during that same time frame and which dedicated themselves to causes which were tangentially related to international human rights and/or they made use of regional and international human rights instruments and bodies (Cleary 1997, pág. 63).

Human Rights as a Liberalizing Influence

International human rights, both as a paradigm and as legal structure required popular social movements to adopt a liberal framework and by extension a classically liberal ideology. Human rights requires a commitment to rule of law, and a recognition that states are the primary mechanism through which individuals can exercise their rights. Organizations within the broader context of new social movements must work within the confines of liberal democracy if they want to make use of human rights instruments or rely on international human rights organizations and bodies. The structure of human rights (on every level) is imbued with liberal ideological assumptions. While the human rights movement emerged in Latin America in the context of blatantly illegitimate military dictatorships, the collapse of those regimes (which was precipitated by the human rights movement) resulted in a new mandate for the Latin American human rights movement. While they were free to ally themselves with the revolutionary movements that stood in opposition to illegitimate states, there was no possibility of direct confrontation with the newly

democratic regimes, even if those states were only formally democratic. This left the human rights movement (including the satellite organizations that do not define human rights as their «core» mission) ideologically constrained as they attempted to address a wide range of human rights issues, including questions of social and economic justice, violence against women, and cultural rights.

New political opportunities were bought with the constraints of liberalism. But these constraints did not prohibit new social movements from taking an effective and active stance against the neo-liberal policies of virtually every government in Latin America during the 1990's. New social movements were in fact effective in rolling back neo-liberalism and electing democratic leaders who more closely represented their interests. But it also meant that the popular revolutionary struggle had been co-opted into something that could be used as a marketing tool by *Starbucks* coffee. It also meant that the Gramscian vision of civil society organized to challenge the hegemonic state had become all but irrelevant by middle of the 1990's.

The liberalization of new social movements in Latin America did not happen suddenly, and it did not represent a coherent strategic decision of a particular social sector. It was a transformation that took place as direct result of the emerging influence of the human rights movement in the 1990's. Because it represents a concession in some ways, it implies then that the human rights movement has a particular responsibility to provide a vehicle for human rights grievances that go well beyond questions of state sponsored violence and physical protection. Using the internationally recognized and heavily resourced frame of human rights could be an effective strategy for social movements in today's political climate.

Autores

Nadia Eslinda Castillo Romero. Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla (México). Catedrática en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y del posgrado en Educación del Instituto de Estudios Universitarios en Puebla, México. Sus líneas de investigación son: los movimientos sociales y de liberación nacional en América Latina en el Siglo XX, movimientos de economía solidaria en América Latina y educación ambiental e intercultural.

Roberto González Arana. Ph.D en Historia. Profesor Titular del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Universidad del Norte. Investigador del grupo Memorias del Caribe y Director del Instituto de Estudios latinoamericanos y Caribeños de la misma institución. Co-coordinador del Grupo de Trabajo: «Movimientos sociales y movimientos revolucionarios en el Caribe y Centroamérica (2013-2016)» Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Carlos Gregorio López Bernal. Doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica. Docente-investigador de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Trabaja sobre historia política y cultural de El Salvador, siglos XIX y XX.

Ivette Angélica Lozoya López. Doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile (Chile). Profesora de Historia y Geografía y Magíster en historia de Chile por la misma universidad. Sus líneas de investigación son la violencia social y política; el pensamiento político y los intelectuales de izquierda. Entre sus publicaciones se cuentan trabajos sobre la violencia social en Chile del siglo XIX, violencia política en la transición chilena e intelectuales y revolución socialista en América Latina en los años sesenta.

Rachel May. Ph.D. Latin American Studies, Tulane University. M.A. Latin American Studies, Tulane University. Director and Associate Professor, Institute for the Study of Latin America and the Caribbean (ISLAC), University of South Florida.

- Ivonne Molinares-Guerrero.** DEA, Historia Social y Política Contemporánea, Universidad Internacional de Andalucía. Magístra en Educación. Profesora M.T del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Investigadora del grupo Memorias del Caribe. Universidad del Norte.
- Eliana Sanandres.** Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, Magíster en Desarrollo Social, Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia). Investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Humano de la Universidad del Norte.
- Alejandro Schneider.** Doctor en Historia (Universidad Nacional de La Plata). Licenciado y Profesor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Profesor titular en ambas universidades. Director del proyecto de investigación «Cambios y continuidades en el sindicalismo argentino 1955-2010» (UNLP) y director en el Proyecto UBACyT «Conflictos, inestabilidad y democracia en la Historia Social y Política de América Latina, 1954-2012» Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani» (UBA). Co-coordinador del Grupo de Trabajo: «Movimientos sociales y movimientos revolucionarios en el Caribe y Centroamérica» (2013-2016) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Luis Fernando Trejos Rosero.** Doctor en Estudios Americanos de la Universidad Santiago de Chile (Chile). Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado. Abogado de la Universidad Libre (Barranquilla, Colombia). Profesor del Departamento de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte e investigador de los Grupos Agenda Internacional y Conflicto y postconflicto en el Caribe colombiano, ambos de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).
- Blas Zubiría Mutis.** Sociólogo (Universidad Simón Bolívar, Barranquilla). Magíster en Historia (Convenio Universidad Nacional de Colombia/Universidad del Atlántico). Docente de tiempo completo de la Universidad del Atlántico. Docente catedrático de la Universidad del Norte. Investigador del grupo Goffman (Programa de Sociología Universidad del Atlántico) y del Grupo de Trabajo: «Movimientos sociales y movimientos revolucionarios en el Caribe y Centroamérica (2013-2016)» Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Bibliografía

- Alarcón, Luis (2010). «Educar campesinos y formar ciudadanos en Colombia durante la república liberal (1930-1946)». En: *Revista Investigación y Desarrollo* vol. 18, n.º 2 (citado en páginas 67, 70).
- Allende, Santiago y Federico Boido (2014). «La Bolivia de Evo Morales. Conflictos, tensiones y ambivalencias durante el primer gobierno del MAS (2006-2009)». En: *América Latina hoy. Integración, procesos políticos y conflictividad en su historia reciente*. Comp. por Alejandro Schneider. Buenos Aires: Imago Mundi (citado en página 42).
- Álvarez, Sonia; Evelina Dagnino y Arturo Escobar, eds. (1998). *Cultures of Politics, Politics of Cultures*. Boulder: Westview (citado en página 152).
- Amorós, Mario (2014). *Miguel Enríquez, un nombre en las estrellas*. Santiago: Ediciones B (citado en página 130).
- Andreas, Peter (2003). «Redrawing the line. Borders and Security in the Twenty First Century». En: *International Security* vol. 28, n.º 2 (citado en página 93).
- Archila, Mauricio (1989). «La clase obrera colombiana (1886-1930)». En: *Nueva Historia de Colombia*. Bogotá: Planeta (citado en páginas 59, 67).
- Archila, Mauricio (1991). *Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945*. Bogotá: CINEP (citado en páginas 57, 58, 60, 63, 65).
- Archila, Mauricio (2003). *Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990*. Bogotá: ICANH y CINEP (citado en página 3).
- Aron, Raymond (2005). *Sobre Clausewitz*. Buenos Aires: Nueva Visión (citado en página 76).
- Askunze Elizaga, Carlos (2007). *Economía Solidaria*. Bilbao: Hegoa (citado en página 28).
- Ávila, Ariel (2008). «La guerra contra las FARC y las guerras de las FARC». En: *Revista Arcanos*, n.º 14 (citado en página 86).
- Ávila, Ariel (2009). «Las FARC: La coca y el narcotráfico». En: *FARC-EP: Temas y problemas nacionales 1958-2008*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (citado en páginas 87, 88).
- Ávila, Ariel y Eder Caicedo (2008). «Evolución histórica de las FARC-EP: Hacia la consolidación de un actor político». En: *Perspectivas actuales de*

- la seguridad y la defensa colombiana en América Latina*. Bogotá: Editorial UNIJUS (citado en página 75).
- Bambirra, Vania (1967). «Los errores de la teoría del foco: Análisis crítico de la obra de Régis Debray». En: *Monthly Review*, n.º 45 (diciembre de 1967) (citado en página 130).
- Bambirra, Vania (1971). *Diez años de insurrección en América Latina*. Vol. 1. Santiago de Chile: Ediciones Prensa Latinoamericana (citado en página 130).
- Berquist, Charles (1989). «Las luchas del campesinado cafetero». En: *Nueva Historia de Colombia*. Bogotá: Planeta (citado en páginas 54, 66, 68).
- Bichkova de Handal, Tania (2010). *Recuerdos sin peinar: mi vida con Shafick*. San Salvador: Talleres Gráficos UCA (citado en página 103).
- Briceño, Laura (2014). «La insurrección armada como alternativa para el proyecto socialista en Chile y Latinoamérica. Los aportes de la intelectual brasileña Vania Bambirra en la década de los 60 y principios de los años 70». En: IV Jornada de las Izquierdas. (Agosto de 2014). Santiago de Chile (citado en página 130).
- Brodie, Bernard (1978). «War and Politics». En: *Las fuerzas militares en la búsqueda de la paz con las FARC*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz (citado en página 76).
- Brown, Michael (1996). *The International Dimensions of Internal Conflict*. Cambridge: MIT Press (citado en página 71).
- Bushnell, David (2007). *Colombia: una nación a pesar de sí misma*. Bogotá: Planeta (citado en páginas 72, 73).
- Calderón, Fernando (1986). «Los movimientos sociales ante la crisis». En: *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires: CLACSO y Universidad de las Naciones Unidas (citado en página 9).
- Calderón, Fernando (1997). «Los Movimientos Sociales en América Latina: entre la modernización y la construcción de la identidad». En: *Filosofía Política I: Ideas Políticas y Movimientos Sociales*. Ed. por Fernando Quezada. Madrid: Trotta, UNAM y Consejo Nacional De Investigaciones Científicas (citado en página 12).
- Cárdenas, Sonia (2010). *Human Rights in Latin America*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press (citado en página 153).
- Carpio, Salvador Cayetano (2011). *Nuestras montañas son las masas*. San Salvador: Carpio y Alvarenga Editores (citado en página 97).
- Castells, Manuel (1997). *La era de la Información: economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*. Vol. 2. Madrid: Alianza Editorial (citado en páginas 3, 5).
- Castillo Romero, Nadia (2008). *Hacia la construcción del sujeto político mesoamericano: el movimiento social ante el Plan Puebla-Panamá y el libre*

- comercio. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (citado en páginas 16-20, 22, 26, 27).
- Castillo, María del Pilar y Giacomo Balbinotto (2012). «Las FARC y los costos del secuestro». En: *Revista Economía Institucional* vol. 4, n.º 27 (citado en páginas 90, 91).
- Castro, Diego y col. (2014). «Grietas en la hegemonía progresista uruguaya, entre consensos y resistencias». En: *OSAL*, n.º 35 (mayo de 2014). URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf> (citado en página 10).
- CEDLA, ed. (2009). *Alerta Laboral núm. 59*. La Paz (citado en página 42).
- CEDLA, ed. (2011). *Informe*. La Paz (citado en página 35).
- CEDLA, ed. (2012a). *Alerta Laboral núm. 70*. La Paz (citado en página 35).
- CEDLA, ed. (2012b). *Informe*. La Paz (citado en página 35).
- CEDLA, ed. (2013). *Alerta Laboral núm. 17*. La Paz (citado en página 35).
- CICR (1986). *Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja*. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja (citado en página 90).
- Clausewitz, Karl (2004). *De la guerra*. Buenos Aires: Ediciones Libertador (citado en página 76).
- Cleary, Edward (1997). *The Struggle for Human Rights in Latin America*. Westport: Greenwood Publishing (citado en página 154).
- Cleary, Edward (2007). *Mobilizing for Human Rights in Latin America*. Bloomfield: Kumarian Press (citado en página 153).
- Cohen, Jean (1988). *Teoría de los movimientos sociales*. Buenos Aires: FLACSO (citado en página 3).
- Cohen, Jean y Andrew Arato (2001). *Sociedad civil y teoría política*. México, DF: FCE (citado en página 3).
- Colburn, Forrest (2009). «The Turnover in El Salvador». En: *Journal of Democracy* vol. 20, n.º 3 (citado en página 113).
- Colombia informa, ed. (2014). *Agencia de comunicación de los pueblos*. Bogotá, 5 de septiembre de 2014 (citado en página 84).
- Comisión Internacional de las FARC-EP (2007). *Esbozo histórico de las FARC*. URL: http://www.cedema.org/uploads/esbozo_historico.pdf (visitado 13-06-2010) (citado en página 79).
- Cortés Morales, Alexis (2013). «La Urbanización Dependiente y el proceso de Marginalización en América Latina: Las contribuciones de Aníbal Quijano». En: XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología. (29 de septiembre-4 de octubre de 2013). Santiago de Chile. URL: http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/gt/GT17/GT17_CortesMorales.pdf (citado en páginas 138, 139).
- Cortez Yacila, Héctor Manuel (2006). *Descentralización productiva y territorio: un enfoque de ordenamiento territorial desde la dimensión de las estructuras*

- territoriales: México, caso de aplicación*. Tlaxcala: El Colegio de Tlaxcala (citado en página 19).
- Cronshaw, Francine (1996). «El problema social en Colombia: El tratamiento de lo social como fuente de conflictos en el plano internacional, 1971-1945». En: *Iglesia, movimientos y Partidos, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*. Comp. por Javier Guerrero. Bogotá: Archivo General de la Nación (citado en páginas 55, 64, 66, 68).
- Cubides, Fernando (2004). «Las Lógicas de la Guerra y la Resistencia Civil». En: *Colombia a comienzos del nuevo milenio: VIII Coloquio Nacional de Sociología*. Comp. por Luis Carlos Castillo. Cali: Universidad del Valle (citado en página 73).
- Dangl, Benjamin (2010). *Toward Freedom: A Progressive Perspective on World Events Since 1952*. URL: <http://www.towardfreedom.com/home/americas/2154-a-revolutions-challenge-rafael-correa-and-indigenous-movements-in-Ecuador> (citado en página 152).
- De Sousa Santos, Boaventura (1998). *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*. Bogotá: Siglo del Hombre y Ediciones Uniandes (citado en página 9).
- De Sousa Santos, Boaventura (2009). *Una epistemología del sur*. México, DF: Siglo XXI y CLACSO (citado en página 12).
- De Sousa Santos, Boaventura (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Bogotá: Siglo del Hombre, Ediciones Uniandes y Siglo XXI (citado en página 12).
- Defensoría del Pueblo de Colombia (2001). *Resolución defensorial humanitaria núm. 002*. URL: <http://www.defensoria.org.co/pdf/resoluciones/humanitaria/humanitaria2.pdf> (visitado 28-07-2013) (citado en página 90).
- Defensoría del Pueblo de Colombia (2013). *Resolución defensorial humanitaria núm. 016*. URL: <http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/02/res/humanitaria/humanitaria16.pdf> (visitado 28-07-2013) (citado en página 89).
- Demasi, Carlos y Eduardo Piazza, eds. (2006). *Los héroes fundadores. Perspectivas del siglo XXI*. Montevideo: Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (citado en página 105).
- Devés, Eduardo (2003). *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX*. Vol. 2. Buenos Aires: Biblos (citado en páginas 125, 131).
- Dos Santos, Theotonio (1970). *Dependencia y Alternativa de cambio en América latina*. Santiago: CESO (citado en página 131).
- Dos Santos, Theotonio (2004). «De la resistencia a la ofensiva: el programa alternativo de los movimientos sociales». En: *OSAL*, n.º 15 (citado en páginas 53, 54).

- Dospital, Michel (1996). *Siempre más allá: El movimiento Sandinista en Nicaragua, 1927-1934*. Managua: IHN y CEMCA (citado en página 106).
- Dussel, Enrique (2009). *El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y «latino» (1300-2000) historia, corrientes, temas y filósofos*. México, DF: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe y Siglo XXI (citado en página 12).
- Dussel, Enrique (2011). «Europa, modernidad y eurocentrismo». En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Comp. por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 12).
- Echeverría, Mónica (1993). *Antihistoria de un luchador. Clotario Blest 1823-1990*. Santiago de Chile: LOM (citado en página 125).
- Eckstein, Susan (2001). «Poder y protesta popular en América Latina». En: *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*. México, DF: Siglo XXI (citado en páginas 2, 8-10, 13).
- Enríquez, Isaac (2006). «La respuesta social mesoamericana y los esfuerzos por articular estrategias alternativas al desarrollo». En: *Los espacios de reserva en la expansión global del capital: el sur-sureste mexicano de cara al Plan Puebla-Panamá*. Comp. por Torres Torres Felipe y José Gasca Zamora. México, DF: UNAM y Plaza y Valdés (citado en página 19).
- Enríquez, Miguel (2005). *Algunos antecedentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 1965/1971*. URL: http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/Doc_Agosto_65_a_67/miragosto65a670003.pdf (visitado 01-10-2014) (citado en página 129).
- Escobar, Arturo (1996). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Norma (citado en página 60).
- Escobar, Arturo (2011). «El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?». En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Comp. por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 12).
- Espinoza, Jorge (2010). *Minería boliviana. Su realidad*. La Paz: Plural (citado en página 44).
- Esteve, Marisol (2010). «Aportes para el estudio de los movimientos sociales en América Latina: un estado de la cuestión». En: *IDeAS vol. 4, n.º 2*. URL: http://r1.ufrrj.br/cpda/ideas/revistas/v04/n02/IDeAS-v04_n02-Artigo_ESTEVE.pdf (citado en página 3).
- Estrada Saavedra, Marco (2012). «Riesgo, miedo y protesta: los movimientos sociales en la obra de Niklas Luhmann». En: *Protesta Social. Tres estudios sobre movimientos sociales en clave de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann*. México, DF: El Colegio de México (citado en página 3).

- Estrada Saavedra, Marco y Edgar Guerra Blanco (2012). «Coda. La perspectiva sistémica para el estudio de los movimientos sociales: ¿sólo otro giro de tuerca?» En: *Protesta Social. Tres estudios sobre movimientos sociales en clave de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann*. México, DF: El Colegio de México (citado en página 13).
- FARC-EP (2009). *Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia*. URL: <http://www.mbsuroccidentededecolombia.org/doc.plataforma.html> (visitado 03-07-2011) (citado en página 79).
- Fernández Nadal, Estela y Gustavo Daniel Silnik (2012). *Teología profana y pensamiento crítico: conversaciones con Frank Hinkelammert*. Buenos Aires: CICCUS y CLACSO (citado en página 134).
- Ferro, Juan y Graciela Uribe (2002). *El orden de la guerra. Las FARC-EP entre la organización y la política*. Bogotá: Centro Editorial Javeriano (citado en páginas 73, 75, 77, 85).
- Fisas, Vicencs (2013). «Anuario de procesos de paz, 2013». En: *Escola de cultura de pau*. México, DF: Editorial Icaria. URL: <http://escolapau.uab.cat/img/programas/procesos/13anuarie.pdf> (visitado 08-08-2013) (citado en páginas 73, 83).
- Fornillo, Bruno (2009). «Proletariado minero, nacionalización económica y el posicionamiento actual de la Central Obrera Boliviana». En: *Polis*, n.º 24 (citado en página 41).
- Frank, André (1991). *El Desarrollo del Subdesarrollo*. Caracas: Nueva Sociedad (citado en página 135).
- Fundación UNIR, ed. (2012). *La conflictividad en Bolivia. Estado de Situación*. La Paz: Fundación UNIR (citado en página 44).
- Galeas, Geovani (2013). *Héroes bajo sospecha. El lado oscuro de la guerra salvadoreña*. Vol. 1. San Salvador: Athena Editores (citado en página 102).
- Galeas, Geovani y Berne Ayala (2008). *Grandeza y miseria de una guerrilla*. San Salvador: Centroamérica 21 (citado en página 116).
- Garay, Cristian y Luis Pérez (2007). «La expansión de la violencia armada en la post-Guerra Fría: conflictos de baja intensidad, terrorismo internacional y delincuencia organizada transnacional». En: vol. 24. *Anales de la Facultad de Derecho* (citado en página 71).
- García Linera, Álvaro (2006). «El “capitalismo andino amazónico”». En: *Le Monde Diplomatique* (citado en página 34).
- García Linera, Álvaro (2011). *El «Oenegismo», Enfermedad Infantil Del Derechismo. (O cómo la «reconducción» del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal)*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (citado en página 50).
- García Márquez, Gabriel (1980). *Cien años de soledad*. Bogotá: Círculo de Lectores (citado en página 1).

- Garretón, Manuel Antonio (2007). «Las Ciencias Sociales en Chile. Institucionalización, ruptura y renacimiento». En: *Las Ciencias Sociales en América Latina en Perspectiva comparada*. México, DF: Siglo XXI (citado en página 133).
- Gaudichaud, Franck (2014). «“Progresismo transformista”, neoliberalismo maduro y resistencias sociales emergentes: un análisis del nuevo gobierno Bachelet en Chile». En: *OSAL*, n.º 35 (mayo de 2014) (citado en página 10).
- Gellner, Ernest (1994). *Conditions of Liberty*. Londres: Penguin (citado en página 146).
- Goicovic, Igor (2004). *La implacable persistencia de la memoria. Reflexiones en torno al informe de la Comisión de prisión política y tortura*. URL: http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/testimo/hhddtestimo0024.pdf (visitado 01-10-2014) (citado en página 120).
- Goicovic, Igor (2013). *Escrita con sangre historia de la violencia en América Latina*. Santiago de Chile: Ceibo (citado en página 120).
- Goldman, Francisco (2012). «Camila Vallejo, the World's Most Glamorous Revolutionary». En: *New York Times* (5 de abril de 2012). URL: http://www.nytimes.com/2012/04/08/magazine/camila-vallejo-the-worlds-most-glamorous-revolutionary.html?_r=3& (citado en página 1).
- Gorski, Eugeniusz (2007). *Civil Society, Pluralism and Universalism*. Washington, DC: The Council for Research in Values and Philosophy (citado en página 147).
- Guzmán, Nátaly; Xiomara Peraza e Ivón Rivera (2006). *Estudio de campañas políticas. Los medios de comunicación y las elecciones de 2006 en San Salvador*. San Salvador: Centro de competencia en Comunicación para América Latina (citado en páginas 104, 110).
- Haber, Paul Lawrence (2011). «Diagnósticos opuestos sobre la izquierda latinoamericana contemporánea». En: *Perfiles Latinoamericanos* (citado en página 113).
- Handal, Schafick Jorge (2004). *El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario en El Salvador*. San Salvador, 1 de septiembre de 2004 (citado en página 111).
- Handal, Schafick Jorge (2010). *Por la senda revolucionaria. 60 aniversario del Partido Comunista de El Salvador*. San Salvador: Ediciones Instituto Schafik Handal (citado en página 102).
- Handal, Schafick Jorge (2011). *Legado de un revolucionario. Del rescate de la historia a la construcción del futuro*. San Salvador: Instituto Schafik Handal (citado en páginas 97, 102).

- Harnecker, Marta (1988). *El Salvador: Partido Comunista y guerra revolucionaria. Entrevista al Comandante del FMLN y Secretario del PCS: Shafik Jorge Handal*. Buenos Aires: Ediciones Dialéctica (citado en página 102).
- Harnecker, Marta (1991). *Con la mirada en alto. Historia de las FPL*. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca Popular (citado en página 97).
- Harwich, Nikita (2003). «Un héroe para todas las causas: Bolívar en la historiografía». En: *Iberoamericana* vol. 3, n.º 10 (citado en página 106).
- Henderson, James (2006). *La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez*. Medellín: Universidad de Antioquia (citado en página 61).
- Hernández, Martín (2004). *El Pensamiento Revolucionario de Bautista Van Schouwen*. Santiago de Chile: Ediciones CEME (citado en página 131).
- Hinkelammert, Franz (1970). «Dialéctica del desarrollo desigual». En: *Cuadernos de la Realidad Nacional*, n.º 6 (citado en página 134).
- Hobsbawm, Erik y Terence Ranger (2002). *La invención de la tradición*. Barcelona: Crítica (citado en página 96).
- Hoskin, Gary (1991). «Los partidos tradicionales: ¿Hasta dónde son responsables de la crisis política?» En: *Al filo del caos. Crisis política en Colombia de los años 80*. Ed. por Francisco Leal y León Zámocs. Bogotá: Tercer Mundo Editores y IEPRI (citado en página 69).
- Instituto Nacional de Estadísticas, ed. (2011). *Estadísticas económicas*. La Paz (citado en página 35).
- Jasper, James (1997). *The art of Moral Protest. Cultura, biography, and creativity in Social Movemenst*. Chicago: The University of Chicago (citado en páginas 3, 8).
- Jasper, James (2012). «¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los grandes paradigmas». En: *Sociológica*, n.º 75 (enero-abril de 2012). URL: www.revistasociologica.com.mx/pdf/7501.pdf (citado en páginas 3, 8).
- Jelin, Elizabeth, comp. (1985). *Los nuevos movimientos sociales*. 2 vols. Buenos Aires: CEAL (citado en página 9).
- Jiménez, Georgina y Jorge Campanini (2012). *Minería, tierra y territorio. Mallku Kkota*. Cochabamba: CEDIB (citado en página 45).
- Kuhn, Thomas (2004). *La estructura de las revoluciones científicas*. México, DF: FCE (citado en página 2).
- Laclau, Ernest y Chantal Mouffe (1985). *Hegemony and Socialist Strategy*. Londres: Verso (citado en página 152).
- Laclau, Ernesto (1987). «Los nuevos movimientos sociales y la pluralidad de lo social». En: *Foro. Foro Nacional por Colombia*, n.º 4 (citado en página 9).
- Lander, Edgardo (2011). «Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos». En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Comp. por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 12).

- Leegrand, Katherine (1986). «El conflicto de las bananeras». En: *Nueva Historia de Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta (citado en página 62).
- Liévano, Germán (1972). «Desarrollo histórico del movimiento estudiantil en Colombia». En: *Aleph*, n.º 4 (septiembre de 1972) (citado en página 63).
- López Bernal, Carlos Gregorio (2007). «Lecturas desde la derecha y la izquierda sobre el levantamiento de 1932: Implicaciones político culturales». En: *Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador*. Ed. por Erik Ching; Carlos Gregorio López Bernal y Virginia Tilley. San Salvador: UCA Editores (citado en página 98).
- López Bernal, Carlos Gregorio (2013). «Gerardo Barrios y el imaginario nacional de El Salvador, siglos XIX y XX». En: Congreso de Latin American Studies Association. Washington (citado en página 106).
- López Vigil, Jose Ignacio [UCA Editores] (1991). *Las mil y una historias de Radio Venceremos*. San Salvador (citado en página 102).
- Lozoya, Ivette (2013). «Debates y tensiones en el Chile de la Unidad Popular ¿la traición de los intelectuales?» En: *Pacarina del Sur*, n.º 17. URL: <http://www.pacarinadelsur.com/dossier-9/812-debates-y-tensiones-en-el-chile-de-la-unidad-popular-la-traicion-de-los-intelectuales> (citado en páginas 121, 128, 129, 132).
- MacAdam, D. y D. Snow, eds. (1997). *Social movements: Reading on their emergence, mobilization and dynamics*. Los Angeles: Roxbury (citado en página 54).
- Mackenzie, Ernesto (2007). *Las FARC. Fracaso de un terrorismo*. Bogotá: Debate (citado en página 86).
- Maldonado Gallardo, Alejo; Sergio Guerra Vilaboy y Roberto González Arana (2006). *Revoluciones Latinoamericanas del Siglo XX. Síntesis histórica y análisis historiográfico*. Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (citado en página 66).
- Marini, Ruy Mauro (1974). *Dos estrategias en la experiencia chilena*. URL: http://www.marini-escritos.unam.mx/011_dos_estrategias.htm (visitado 01-10-2014) (citado en página 141).
- Marti i Puig, Salvador (2012). «Sobre la emergencia y el impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global». En: *Etnicidad, autonomía y gobernabilidad en América Latina*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca (citado en página 9).
- Martínez Heredia, Fernando (2010). *El ejercicio de pensar*. La Habana: Ruth Casa Editorial (citado en página 128).
- Martínez, Carlos y Sergio Arauz (2007). *El FMLN no es plural y no debe serlo*. 8-14 de octubre de 2007. URL: <http://archivo.elfaro.net/>

- Secciones/noticias/20051107/noticias5_20051107.asp (visitado 05-06-2013) (citado en página 114).
- Massal, Julie (2014). *Revueltas, insurrecciones y protestas. Un panorama de las dinámicas de movilización en el siglo XXI*. Bogotá: IEPRI y Universidad Nacional de Colombia (citado en páginas 3, 13).
- Mattelart, Armand (2013). *Por una mirada-mundo. Conversaciones con Michel Sénécal*. Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera (citado en página 140).
- Mattelart, Armand y Patricio Biedma (1971). *Comunicación masiva y revolución socialista*. Santiago de Chile: Prensa Latina (citado en página 140).
- Mayor Mora, A. (1979). «El control del tiempo libre de la clase obrera de Antioquia en la década de 1939». En: *Revista Colombiana de Sociología*, n.º 1 (citado en páginas 61, 66).
- McAdams, Dough; John McCarthy y Mayer Zald, eds. (1999). *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Ediciones Itsmo (citado en página 7).
- Melgar, Ricardo (1988). *El movimiento obrero latinoamericano*. Madrid: Alianza Editora latinoamericana (citado en página 65).
- Melo, Jorge Orlando (1989). «La república conservadora». En: *Colombia Hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI*. Bogotá: Siglo XXI (citado en páginas 55, 56, 59).
- Melucci, Alberto (1995). *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*. Madrid: CIS (citado en página 3).
- Melucci, Alberto (2010). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, DF: EL Colegio de México (citado en páginas 2-5, 13).
- Menjívar Ochoa, Mauricio (2005). «Los estudios sobre la memoria y los usos del pasado: Perspectivas teóricas y metodológicas». En: *Cuaderno de Ciencias Sociales*, n.º 135 (citado en página 105).
- Merton, Robert (1987). *Teoría y estructuras sociales*. México, DF: FCE (citado en página 2).
- Mestries, Francis; Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño, comps. (2009). *Los movimientos sociales: de lo local a lo global*. Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (citado en página 9).
- Mignolo, Walter (2003). *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal (citado en página 12).
- Mignolo, Walter (2004). «Colonialidad global, capitalismo y hegemonía epistémica». En: *América Latina: los desafíos del pensamiento crítico*. Comp. por Irene Sánchez Ramos y Raquel Sosa Elizaga. México, DF: Siglo XXI, UNAM y CELA (citado en página 12).
- Mignolo, Walter (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa (citado en página 12).

- Mignolo, Walter (2011). «La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad». En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Comp. por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 12).
- Mires, Fernando (1969). «Marx y el sufragio». En: *Punto Final*, n.º 77 (citado en página 138).
- Modonesi, Massimo (2014). «Editorial. La crisis venezolana y los gobiernos progresistas en América Latina». En: *OSAL*, n.º 35 (mayo de 2014). URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140506032000/OSAL35.pdf> (citado en página 10).
- Mokrani, Dunia (2006). «Pensar la política en Bolivia desde Huanuni». En: *Pensamiento de los confines*, n.º 19 (citado en página 41).
- Monge, Carlos (2012). *Marco Aurelio García, asesor presidencial de Brasil: «El fallo de La Haya será una decisión equilibrada»*. 8 de septiembre de 2012. URL: <http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/09/779579/el-fallo-de-la-haya-sera-una-decision-equilibrada> (visitado 07-09-2014) (citado en página 136).
- Morán Esparza, José Luis (2008). *La economía social solidaria: redes productivas*. URL: <http://www.eumed.net/ce/2008a> (citado en página 27).
- Murga Frassinetti, Antonio (2006). «La sociología de los movimientos sociales». En: *Tratado Latinoamericano de Sociología*. Comp. por Enrique De la Garza Toledo. Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana (citado en páginas 10, 13).
- Naranjo, Pedro y col., eds. (2004). *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y Documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria*. Santiago de Chile: LOM (citado en página 132).
- Nieto Arteta, Luis Eduardo (1942). *Economía y cultura en la historia de Colombia*. Bogotá: Ediciones Siglo XX (citado en página 53).
- Nora, Pierre, ed. (1997). *Les lieux de mémoire*. Vol. 1. París: Éditions Gallimard (citado en página 107).
- Ocampo Banda, Luis (2008). «La re-definición del Estado y los movimientos sociales en América latina». En: *Theomai. Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo*, n.º 18. URL: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12401803> (citado en páginas 9, 10).
- Offstein, Norman (2003). «An historical review and analysis of Colombian guerrilla movements». En: *Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Universidad de los Andes* vol. 21 (citado en página 73).
- Olson, Mancur (2011). *La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y la teoría de grupos*. Bogotá: Noriega Editores (citado en página 8).
- Ortiz Crespo, Santiago y Fernando Mayorga (2012). «Movimientos sociales, Estado y democracia en Bolivia y Ecuador en el tránsito del neoliberalismo».

- lismo al postneoliberalismo». En: *Iconos*, n.º 44 (septiembre de 2012). URL: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/4360#.VqYvg3XhCV4> (citado en página 10).
- Oviedo, Álvaro (2009). *Sindicalismo Colombiano. Iglesia e ideario católico 1945-1957*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional (citado en página 65).
- Palieraky, Elsa (2014). *¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta*. Santiago de Chile: LOM (citado en página 129).
- Palmer, Steven (1988). «Carlos Fonseca and the Construction of Sandinismo in Nicaragua». En: *Latin American Research Review* vol. 23, n.º 1 (citado en página 106).
- Palmer, Steven (1992). «Sociedad anónima, cultura oficial: Inventando la nación en Costa Rica, 1848-1900». En: *Héroes al gusto y libros de moda (1750-1900)*. Ed. por Iván Molina Jiménez y Steven Palmer. San José (Costa Rica): Editorial Porvenir (citado en página 106).
- Parra, Marcela Alejandra (2005). «La construcción de los movimientos sociales como sujetos de estudio en América Latina». En: *Athenea Digital*, n.º 8. URL: <http://antalya.uab.es/athenea/num8/parra.pdf> (citado en página 8).
- Peeler, John (2003). «Social Justice and the New Indigenous Politics». En: *What Justice? Whose Justice*. Comp. por Susan Eckstein y Timothy Wickham-Crowley. Berkeley: University of California Press (citado en página 151).
- Pizarro, Eduardo (2005). «El bipartidismo colombiano: entre la guerra y la conversación de caballeros». En: *Los retos de la democracia. Viejas y nuevas formas de la política en Colombia y América Latina*. Bogotá: Fundación Foro y IEPRI (citado en página 69).
- PNUD (2003). *El Conflicto, callejón con salida*. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. URL: http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/capitulo_1.pdf (visitado 13-07-2013) (citado en página 74).
- PNUD (2010). *Informe sobre Bolivia*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, noviembre de 2010 (citado en página 36).
- Posada Carbó, Eduardo (2007). «Las elecciones presidenciales en Colombia en 1930». En: *Revista de Estudios Sociales*, n.º 7 (citado en páginas 62, 63, 69).
- Quijano, Aníbal (1966). «Las experiencias de la última etapa de las luchas revolucionarias en el Perú». En: *Estrategia*, n.º 3 (abril de 1966) (citado en página 126).
- Quijano, Aníbal (2011). «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*.

- Perspectivas Latinoamericanas*. Comp. por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 12).
- Quiroga, María Soledad y col. (2012). *Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009 - 2011) Análisis multifactorial y perspectivas*. La Paz: Fundación UNIR (citado en página 45).
- Rangel, Alfredo (1999). *Colombia: guerra en el fin de siglo*. Bogotá: Tercer Mundo Editores (citado en páginas 77, 85, 87).
- Retamozo, Martín (2010). «Movimientos Sociales». En: *(Pre) Textos para el análisis político. Disciplinas Reglas y Procesos*. Comp. por Eduardo Villareal Cantú y Víctor Hugo Martínez González. México, DF: FLACSO y Universidad Von Humboldt (citado en páginas 9, 10).
- Rivas, Patricio, comp. (2012). *El maestro en rojo y negro. Ruy Mauro Marini*. Quito: Editorial IAEN (citado en páginas 140, 141).
- Rivera, Carla (2014). «Pensar las comunicaciones en un horizonte signado por la revolución. CEREN y el matrimonio Mattelart». En: IV Jornada de las Izquierdas. Santiago de Chile, agosto de 2014 (citado en página 134).
- Romero, Tatiana; Natalia Restrepo e Ivonne Díaz (2009). «Factores psicosociales que inciden en la reintegración social de tres reclusos con vínculos a los grupos armados ilegales (FARC-EP, UC-ELN y AUC) del Centro Penitenciario y Carcelario de Villahermosa». En: *Pensamiento Psicológico* vol. 6, n.º 13 (citado en página 73).
- Sánchez García, Antonio (2003). *Caracas: Hugo Chavez, Salvador Allende*. 24 de enero de 2003. URL: <http://arch.cubaencuentro.com/desde/2003/01/24/11362/1.html> (visitado 01-10-2014) (citado en página 136).
- Schneider, Alejandro (2014). «Dificultades políticas y tensiones sociales durante la segunda presidencia de Evo Morales». En: *América Latina hoy. Integración, procesos políticos y conflictividad en su historia reciente*. Buenos Aires: Imago Mundi (citado en página 43).
- Seoane, José, comp. (2004). *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 9).
- Seoane, José; Emilio Taddei y Clara Algranati (2007). «Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina». En: *Política, movimientos sociales, mundo hegemónico*. Comp. por Atilio Borón y Gladys Lechini. Buenos Aires: CLACSO (citado en página 21).
- Slater, David (1989). «Nuevos Movimientos Sociales y viejas preguntas políticas». En: *Foro. Foro Nacional por Colombia*, n.º 8 (citado en página 9).
- Smelser, Neil (1995). *Teoría del comportamiento colectivo*. México, DF: FCE (citado en página 8).
- Smith, Carol (1991). «Maya Nationalism». En: *NACLA. Report on the Americas* (citado en páginas 150, 151).

- Solano De Las Aguas, Sergio Paolo (2001). «Puertos, Sociedad y Conflictos en el Caribe Colombiano 1850-1930». En: *Observatorio del Caribe Colombiano*. Cartagena: Universidad de Cartagena (citado en página 57).
- Sprenkels, Ralph (2011a). «La memoria militante. Historia y política de la postguerra». En: *Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo*. Santiago de Compostela: Imprenta Universitaria (citado en páginas 98, 110).
- Sprenkels, Ralph (2011b). «Roberto d'Aubuisson vs Schafik Handal: Militancy, Memory Work and Human Rights». En: *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n.º 91 (citado en página 106).
- Svampa, Maristella (2008). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires: Siglo XXI y CLACSO (citado en páginas 9, 11, 13).
- Tarrow, Sidney (2004). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza (citado en páginas 6-8).
- Tilly, Charles (2010). *Los Movimientos Sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica (citado en página 6).
- Tirado Mejía, Álvaro (1991). «Colombia: siglo y medio de bipartidismo». En: *Colombia Hoy. Perspectivas hacia el siglo XXI*. Bogotá: Siglo XXI (citado en páginas 60, 67, 68).
- Tolosa, Francisco (2008). «¿Son las FARC-EP un actor político?» En: *FARC-EP: Temas y problemas nacionales 1958-2008*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (citado en página 75).
- Torres Del Río, César (2010). *Colombia siglo XX. Desde la guerra de los mil días hasta la elección de Álvaro Uribe*. Bogotá: Norma (citado en páginas 54, 61, 63).
- Torres Giraldo, Ignacio (2005). *50 meses en Moscú*. Cali: Universidad del Valle (citado en página 55).
- Torrijos, Vicente (2004). «El poder y la fuerza, apuntes doctrinales sobre la naturaleza revolucionaria de las FARC-EP». En: *Revista Investigación y Desarrollo* vol. 12, n.º 2 (citado en página 74).
- Touraine, Alan (1987). *El regreso del actor*. Buenos Aires: EUDEBA (citado en página 3).
- Touraine, Alan (1999). *¿Cómo salir del liberalismo?* Barcelona: Paidós (citado en páginas 3, 4).
- Touraine, Alan (2001). *¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes*. México, DF: FCE (citado en páginas 3, 4).
- Trejos Rosero, Luis (2011). «Antecedentes históricos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (1948-1966). Una revisión desde las teorías de la violencia política». En: *Cuadernos del Pensamiento Latinoamericano*, n.º 17 (citado en páginas 77, 79).
- Trejos, Luis (2013). «Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado». En: *Revista Enfoques* vol. 11, n.º 18 (citado en páginas 71, 72).

- Tribunal Supremo Electoral (2009). *Memoria especial elecciones 2009*. San Salvador (citado en página 114).
- Turner, R. y L. Millian (1987). *Collective behavior*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (citado en páginas 53, 54).
- Vasconi, Amadeo (1970). *Movimiento Estudiantil y crisis en la Universidad de Chile*. Santiago de Chile: CESO (citado en página 137).
- Vega Cantor, Renán (2001). *Gente muy Rebelde. Socialismo, Cultura y Protesta Popular*. Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico (citado en página 61).
- Vega Cantor, Renán (2002). *Gente muy Rebelde. Enclaves, transportes y protestas obreras*. Bogotá: Ediciones Pensamiento Crítico (citado en páginas 57, 59, 60, 62, 64).
- Vitale, Luis (1966). «¿América Latina feudal o capitalista? ¿Revolución burguesa o socialista?» En: *Estrategia*, n.º 5 (junio de 1966) (citado en páginas 124, 125).
- Von der Heydte, Friedrich (1987). *La guerra irregular moderna*. Bogotá: EIR de Colombia Ltda (citado en página 71).
- VVAA (1948). *Foreign Relations of The United States*. Vol. IX: *Western Hemisphere*. Ed. por Almon Wright; Velma Hastings Cassidy y David Stauffer. Washington: United States Government Printing Office (citado en página 69).
- Waiss, Oscar (1961). *Vía Pacífica o Revolución, ni dogmatismo ni revisionismo: leninismo*. Santiago de Chile: Ediciones Socialismo (citado en página 122).
- Waiss, Oscar (1965). «La Metamorfosis». En: *Estrategia*, n.º 1 (noviembre de 1965) (citado en página 123).
- Wieviorka, Michel (2009). «¿A dónde va el debate sobre los nuevos movimientos sociales?» En: *Los movimientos sociales: de lo local a lo global*. Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (citado en páginas 3, 10, 11).
- Yagenova, Simona (2009). «Reflexiones en torno a los movimientos sociales, el Estado y la democracia». En: *Los movimientos sociales frente al Estado, la democracia y los partidos políticos*. Vol. 1. Guatemala: FLACSO (citado en páginas 3, 9).
- Yañez, Manuel (2014). «Rupturas y debates internos del FMLN desde los acuerdos de paz a la victoria electoral». En: *2014: año de elecciones. El Salvador y Costa Rica: miradas sobre el orden político*. Ed. por Esteban De Gori; Cristina Pirker y Elena Villacorta. Buenos Aires: Sans Solei Ediciones (citado en página 112).
- Zermeño, Sergio (2009). «Movimiento social y cambio en México y en América Latina». En: *Los movimientos sociales: de lo local a lo global*. Comp. por Francis Mestries; Geoffrey Pleyers y Sergio Zermeño. Barcelo-

na: *Anthropos* y Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (citado en página 11).

Índice de autores

- Álvarez, Sonia, 152, 159
Ávila, Ariel, 75, 86–88, 159
- Alarcón, Luis, 67, 70, 159
Algranati, Clara, 21, 171
Allende, Santiago, 42, 159
Amorós, Mario, 130, 159
Andreas, Peter, 93, 159
Arato, Andrew, 3, 161
Arauz, Sergio, 114, 167
Archila, Mauricio, 3, 57–60, 63,
65, 67, 159
Aron, Raymond, 76, 159
Askunze Elizaga, Carlos, 28, 159
Ayala, Berne, 116, 164
- Balbinotto, Giacomo, 90, 91, 161
Bambirra, Vania, 130, 160
Berquist, Charles, 54, 66, 68, 160
Bichkova de Handal, Tania, 103,
160
Biedma, Patricio, 140, 168
Boido, Federico, 42, 159
Borón, Atilio, 171
Briceño, Laura, 130, 160
Brodie, Bernard, 76, 160
Brown, Michael, 71, 160
Bushnell, David, 72, 73, 160
- Cárdenas, Sonia, 153, 160
Caicedo, Eder, 75, 159
Calderón, Fernando, 9, 12, 160
Campanini, Jorge, 45, 166
- Carpio, Salvador Cayetano, 97,
160
Cassidy, Velma Hastings, 173
Castells, Manuel, 3, 5, 160
Castillo Romero, Nadia, 16–20,
22, 26, 27, 160
Castillo, Luis Carlos, 162
Castillo, María del Pilar, 90, 91,
161
Castro, Diego, 10, 161
CEDLA, 35, 42, 161
Ching, Erik, 167
CICR, 90, 161
Clausewitz, Karl, 76, 161
Cleary, Edward, 153, 154, 161
Cohen, Jean, 3, 161
Colburn, Forrest, 113, 161
Colombia informa, 84, 161
Comisión Internacional de las
FARC-EP, 79, 161
Cortés Morales, Alexis, 138, 139,
161
Cortez Yacila, Héctor Manuel, 19,
161
Cronshaw, Francine, 55, 64, 66,
68, 162
Cubides, Fernando, 73, 162
- Díaz, Ivonne, 73, 171
Dagnino, Evelina, 152, 159
Dangl, Benjamin, 152, 162
De Gori, Esteban, 173
De la Garza Toledo, Enrique, 169

- De Sousa Santos, Boaventura, 9,
12, 162
- Defensoría del Pueblo de
Colombia, 89, 90, 162
- Demasi, Carlos, 105, 162
- Devés, Eduardo, 125, 131, 162
- Dos Santos, Theotonio, 53, 54,
131, 162
- Dospital, Michel, 106, 163
- Dussel, Enrique, 12, 163
- Echeverría, Mónica, 125, 163
- Eckstein, Susan, 2, 8–10, 13, 163,
170
- Enríquez, Isaac, 19, 163
- Enríquez, Miguel, 129, 163
- Escobar, Arturo, 12, 60, 152, 159,
163
- Espinoza, Jorge, 44, 163
- Esteve, Marisol, 3, 163
- Estrada Saavedra, Marco, 3, 13,
163, 164
- FARC-EP, 79, 164
- Felipe, Torres Torres, 163
- Fernández Nadal, Estela, 134, 164
- Ferro, Juan, 73, 75, 77, 85, 164
- Fisas, Vicencs, 73, 83, 164
- Fornillo, Bruno, 41, 164
- Frank, André, 135, 164
- Fundación UNIR, 44, 164
- Galeas, Geovani, 102, 116, 164
- Garay, Cristian, 71, 164
- García Linera, Álvaro, 34, 50, 164
- García Márquez, Gabriel, 1, 164
- Garretón, Manuel Antonio, 133,
165
- Gasca Zamora, José, 163
- Gaudichaud, Franck, 10, 165
- Gellner, Ernest, 146, 165
- Goicovic, Igor, 120, 165
- Goldman, Francisco, 1, 165
- González Arana, Roberto, 66, 167
- Gorski, Eugeniusz, 147, 165
- Guerra Blanco, Edgar, 13, 164
- Guerra Vilaboy, Sergio, 66, 167
- Guerrero, Javier, 162
- Guzmán, Nátaly, 104, 110, 165
- Haber, Paul Lawrence, 113, 165
- Handal, Schafick Jorge, 97, 102,
111, 165
- Harnecker, Marta, 97, 102, 166
- Harwich, Nikita, 106, 166
- Henderson, James, 61, 166
- Hernández, Martín, 131, 166
- Hinkelammert, Franz, 134, 166
- Hobsbawm, Erik, 96, 166
- Hoskin, Gary, 69, 166
- Instituto Nacional de
Estadísticas, 35, 166
- Jasper, James, 3, 8, 166
- Jelin, Elizabeth, 9, 166
- Jiménez, Georgina, 45, 166
- Kuhn, Thomas, 2, 166
- López Bernal, Carlos Gregorio,
98, 106, 167
- López Vigil, Jose Ignacio, 102,
167
- Laclau, Ernest, 152, 166
- Laclau, Ernesto, 9, 166
- Lander, Edgardo, 12, 163, 166, 169,
170
- Leal, Francisco, 166
- Lechini, Gladys, 171
- Leegrand, Katherine, 62, 167
- Liévano, Germán, 63, 167
- Lozoya, Ivette, 121, 128, 129, 132,
167
- MacAdam, D., 54, 167
- Mackenzie, Ernesto, 86, 167

- Maldonado Gallardo, Alejo, 66, 167
- Marini, Ruy Mauro, 141, 167
- Martínez González, Víctor Hugo, 171
- Martínez Heredia, Fernando, 128, 167
- Martínez, Carlos, 114, 167
- Marti i Puig, Salvador, 9, 167
- Massal, Julie, 3, 13, 168
- Mattelart, Armand, 140, 168
- Mayor Mora, A., 61, 66, 168
- Mayorga, Fernando, 10, 169
- McAdams, Dough, 7, 168
- McCarthy, John, 7, 168
- Melgar, Ricardo, 65, 168
- Melo, Jorge Orlando, 55, 56, 59, 168
- Melucci, Alberto, 2-5, 13, 168
- Menjívar Ochoa, Mauricio, 105, 168
- Merton, Robert, 2, 168
- Mestries, Francis, 9, 168, 173
- Mignolo, Walter, 12, 168, 169
- Millian, L., 53, 54, 173
- Mires, Fernando, 138, 169
- Modonesi, Massimo, 10, 169
- Mokrani, Dunia, 41, 169
- Molina Jiménez, Iván, 170
- Monge, Carlos, 136, 169
- Morán Esparza, José Luis, 27, 169
- Mouffe, Chantal, 152, 166
- Murga Frassinetti, Antonio, 10, 13, 169
- Naranjo, Pedro, 132, 169
- Nieto Arteta, Luis Eduardo, 53, 169
- Nora, Pierre, 107, 169
- Ocampo Banda, Luis, 9, 10, 169
- Offstein, Norman, 73, 169
- Olson, Mancur, 8, 169
- Ortiz Crespo, Santiago, 10, 169
- Oviedo, Álvaro, 65, 170
- Pérez, Luis, 71, 164
- Palieraky, Elsa, 129, 170
- Palmer, Steven, 106, 170
- Parra, Marcela Alejandra, 8, 170
- Peeler, John, 151, 170
- Peraza, Xiomara, 104, 110, 165
- Piazza, Eduardo, 105, 162
- Pirker, Cristina, 173
- Pizarro, Eduardo, 69, 170
- Pleyers, Geoffrey, 9, 168, 173
- PNUD, 36, 74, 170
- Posada Carbó, Eduardo, 62, 63, 69, 170
- Quezada, Fernando, 160
- Quijano, Aníbal, 12, 126, 170
- Quiroga, María Soledad, 45, 171
- Rangel, Alfredo, 77, 85, 87, 171
- Ranger, Terence, 96, 166
- Restrepo, Natalia, 73, 171
- Retamozo, Martín, 9, 10, 171
- Rivas, Patricio, 140, 141, 171
- Rivera, Carla, 134, 171
- Rivera, Ivón, 104, 110, 165
- Romero, Tatiana, 73, 171
- Sánchez García, Antonio, 136, 171
- Sánchez Ramos, Irene, 168
- Schneider, Alejandro, 43, 159, 171
- Seoane, José, 9, 21, 171
- Silnik, Gustavo Daniel, 134, 164
- Slater, David, 9, 171
- Smelser, Neil, 8, 171
- Smith, Carol, 150, 151, 171
- Snow, D., 54, 167
- Solano De Las Aguas, Sergio Paolo, 57, 172
- Sosa Elizaga, Raquel, 168
- Sprekels, Ralph, 98, 106, 110, 172

Stauffer, David, 173
Svampa, Maristella, 9, 11, 13, 172

Taddei, Emilio, 21, 171
Tarrow, Sidney, 6–8, 172
Tilley, Virginia, 167
Tilly, Charles, 6, 172
Tirado Mejía, Álvaro, 60, 67, 68,
172
Toloza, Francisco, 75, 172
Torres Del Río, César, 54, 61, 63,
172
Torres Giraldo, Ignacio, 55, 172
Torrijos, Vicente, 74, 172
Touraine, Alan, 3, 4, 172
Trejos Rosero, Luis, 77, 79, 172
Trejos, Luis, 71, 72, 86, 172
Tribunal Supremo Electoral, 114,
173
Turner, R., 53, 54, 173

Uribe, Graciela, 73, 75, 77, 85, 164

Vasconi, Amadeo, 137, 173
Vega Cantor, Renán, 57, 59–62,
64, 173
Villacorta, Elena, 173
Villamarín Pulido, Luis Alberto,
86
Villareal Cantú, Eduardo, 171
Vitale, Luis, 124, 125, 173
Von der Heydte, Friedrich, 71,
173
VVAA, 69, 173

Waiss, Oscar, 122, 123, 173
Wickham-Crowley, Timothy, 170
Wieviorka, Michel, 3, 10, 11, 173
Wright, Almon, 173

Yañez, Manuel, 112, 173
Yagenova, Simona, 3, 9, 173

Zámocs, León, 166

Zald, Mayer, 7, 168
Zermeño, Sergio, 9, 11, 168, 173

